mensual/Mayo 80
nueva serie/número 15
COSTA RICA: 7 Colones/ESPAÑA: 75 Ptas./FRANCIA: 5 F/PANAMA: B/1.-
PERU: 100 Soles/REP. DOMINICANA: RD$1.-/SUECIA: 5 Kr./VENEZUELA: 5 Bs.

# inprecor

correspondencia de prensa internacional / intercontinental press



## Velada de armas en El Salvador
## Amenaza de golpe de estado en Bolivia
## La burguesía contraataca en Nicaragua

**DESEO SUSCRIBIRME** Rellena este boletín claramente. Envíalo al Aptdo./ 50.370 Madrid

□ Giro postal/Transf. bancaria a: JOSE VICENTE IDOYAGA, cta. nº 1.184, Banco Hispano Americano, Ag. Urbana Ntra. Sra. de Fátima, 13. Madrid-25.

□ Cheque nominal adjunto, por carta al Apartado de correos 50.370 (Cibeles) Madrid.

**inprecor** correspondencia de prensa internacional / intercontinental press

| | ESPAÑA | EUROPA | AMERICA |
|---|---|---|---|
| □ 12 números | 900 ptas. | 1.100 ptas. | 1.300 ptas. |
| □ 6 números | 450 ptas. | 550 ptas. | 650 ptas. |

Apellidos .................... Nombre ....................

Domicilio ....................

Ciudad .................... Distrito postal ....................

Provincia/Estado ....................

Nº. del giro postal/transferencia/cheque ....................

# Oferta especial para suscriptores

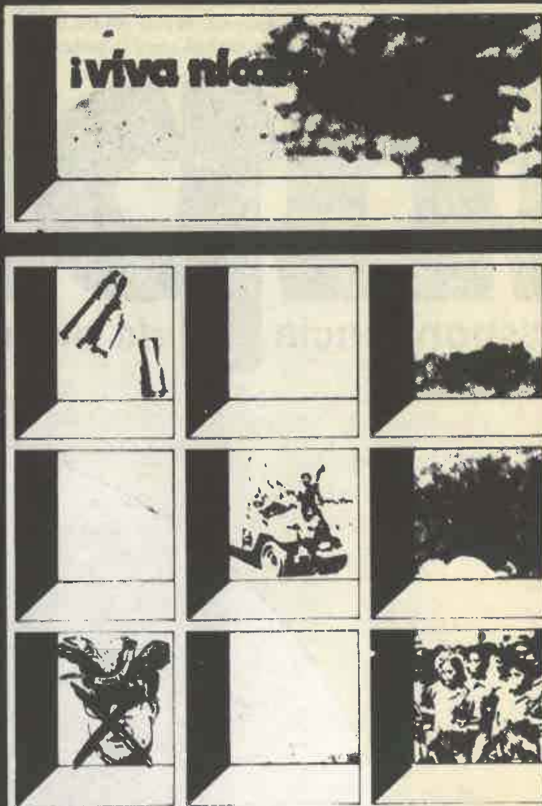
**El libro VIVA NICARAGUA LIBRE, de Miguel Romero por 100 Pesetas (1,5 Dólar U.S.A.)**

Rellena el boletín de suscripción adjunto, y envianoslo junto con:

1.000 Pesetas suscriptores en España

1.200 Pesetas suscriptores en Europa

1.500 Pesetas suscriptores en América




# Sumario



**Edita:**
**Liga Comunista Revolucionaria (IV Internacional)**
**Apartado de Correos 50.370 (Cibeles) Madrid / España**

**Imprime:**
**Ratiles**
**Mallorca 206. Barcelona**

**Deposito legal:**
**B - 40.029/79**

Los artículos firmados no representan necesariamente el punto de vista de la redacción.



**Correspondencia: Apartado de Correos 50.370**
**(Cibeles)**
**MADRID**
**ESPAÑA**

Nicaragua

# La dimisión de Chamorro y de Robelo

Charles-André Udry

EL 19 de abril de 1980, Violeta Chamorro dimite de la Junta de Gobierno de Reconstrucción Nacional, aduciendo motivos de salud. Sin embargo, *"hay informes oficiosos que señalan que la señora Chamorro no está nada satisfecha con el proyecto de ampliación del Consejo de Estado, que en principio debía constar de 33 miembros" (International Herald Tribune* del 21.4.1980).

El 22 de abril, Alfonso Robelo Callejas, dirigente de un partido burgués, el MDN (Movimiento Democrático Nicaragüense), también presenta la dimisión. En una conferencia de prensa, declara: *"Las bases fundamentales de la unidad política del país se han roto y los cambios introducidos en la composición del Consejo de Estado tienen los aspectos de un proyecto totalitario". (El País,* 24.4.1980).

Robelo explica que Violeta Chamorro abandonó la Junta por las mismas razones. El MDN ha dado instrucciones a sus miembros de que renuncien a sus puestos en el gobierno y la administración pública. Arturo Cruz, antiguo funcionario del IDB (Interamerican Development Bank, Banco de Desarrollo Interamericano) en Washington, y director del Banco Central, renuncia a su cargo.

Un nuevo giro se perfila en el proceso revolucionario en Nicaragua. Se anunciaba ya desde mediados de marzo (ver INPRECOR nº 14).

Las relaciones entre el sector privado, el mixto y el estatal exigían, con el fin de asegurar el relanzamiento económico previsto en el Plan de Reactivación Económica, la participación efectiva del sector privado, cuyo peso es grande. Según la CEPAL, a comienzos de 1980 el nivel de la producción industrial era igual al de 1962 *(Barricada,* 18.3.1980).

El viceministro de Planificación, Federico Cerdá, declara —después de haber explicado que existen *"amplias posibilidades para la iniciativa privada"* y que a los industriales se les han asegurado diversas garantías (créditos, convenios colectivos— que *"en el sector industrial, de un total de 663 empresas, unas 296 están de nuevo en marcha, y de las 63 empresas más importantes del textil, el porcentaje de fábricas que aún no funcionan es todavía mayor". (Barricada,* 29.3.1980).

Según el Minsiterio de Industria, las empresas activas sólo emplean, en promedio, el 50% de sus capacidades productivas. Como dice Federico Cerdá: *"Este proceso de 'descapitalización' ha suscitado una actitud atentista y desconfiada entre los trabajadores, que responden con la ocupación de la fábrica cuando sospechan la menor iniciativa de 'descapitalización'"* (ibidem).

En esta situación, la patronal multiplica sus recriminaciones, cuyo eje principal es el respeto de la propiedad privada, condición de su participación en un plan en que su papel no es ni mucho menos despreciable.

En la agricultura son numerosos los grandes y medianos propietarios que dudan, en el contexto social y político actual, en participar en el *"proceso de reconstrucción".* Henry Ruiz señala que la producción de maíz, de frijoles y de arroz es menor al previsto *(Barricada,* 14.3.1980).

Tanto los ganaderos como los grandes productores de café (organizados en la UNCAFENIC) o de algodón, todas estas corporaciones exigen que se ponga coto a las confiscaciones de tierras "intervenidas" (confiscaciones que se presentan como contradictorias con el decreto de noviembre de 1979), y que la ATC (Asociación de Trabajadores del Campo) controle a su base y modere las iniciatiuvas de los campesinos trabajadores que ocupan tierras o se rebelan contra las condiciones de explotación extremadamente duras. El problema, crucial, de la siembra de una gran parte de la tierra sigue pendiente.

En el sector de la distribución, las dificultades son enormes. Bajo la égida de la Cámara de Comercio, parte de los comerciantes se han organizado en un organismo denominado "ACOPORBAMA". Se han opuesto abiertamente al decreto 323, destinado a congelar los precios de los bienes de primera necesidad.

Así, emerge la crisis en la industria, la agricultura y la distribución. La polarización de clases se acentúa. Las declaraciones de los diversos sectores de la burguesía revelan tanto una profunda inquietud —ante la relación de fuerzas sociales, militares y políticas— como la precariedad de una "reconstrucción" según las líneas maestras trazadas por el Plan de 1980.

El *"Financial Times* escribe: *"Las relaciones entre el gobierno y el sector privado están congeladas... Los hombres de negocios están también inquietos por el hecho de que el gobierno cierra los ojos ante la ocupación de haciendas y fábricas que no pertenecen a Somoza ni a sus colaboradores"* (11.4.1980). Arturo Ruiz confía entonces al diario de la City londinense: *"No sabemos lo que puede ocurrir mañana".*

## Conciliar lo irreconciliable

En este contexto, la dirección del FSLN tiene que desplazar un poco el eje de su enfoque de los problemas del relanzamiento económico. Es cierto que no deja de repetir: *"En el terreno económico, el Plan de Reactivación es la demostración concreta de la voluntad sandinista de reconocer y estimular la participación de todo productor y comerciante que desee trabajar por el restablecimiento de su patria"* (Declaración de la dirección, *Barricada,* 18.3.1980). Es más: con ocasión de una manifestación, a comienzos de marzo, cuando los trabajadores exigian la confiscación de las empresas "intervenidas", Moisés Hassán (miembro de la Junta) y Ramón Medrano (secretario de propaganda de la CST), tras señalar que entienden que la iniciativa de los trabajadores está justificada, les piden que no precipiten los acontecimientos *(Barricada,* 12.3.1980).

Pero cada vez más la dirección del FSLN se ve forzada a lanzar advertencias a los grandes propietarios, a los industriales que practican el sabotaje y a sus organizaciones corporativas. Henry Ruiz denuncia las *"reticencias de los patronos, pese a que han obtenido créditos".* Y tras atacar al COSEP (Consejo Superior de la Empresa Privada), añade: *"Disponemos de instrumentos para sofocarlas* (a las fuerzas desestabilizadoras), *y no dudaremos en hacerlo... Hay problemas en la producción de algodón, pero son problemas políticos. Ellos* (los propietarios) *expresan reivindicaciones políticas, utilizando la producción como instrumento" (Barricada,* 14.3.1980).

Este ángulo de ataque reaparece a menudo desde entonces: la patronal y los grandes propietarios son acusados de querer aprovecharse del lugar que ocupan en el proceso de producción con objeto de lanzar una contraofensiva en el terreno político.

Paralelamente a estas exhortaciones, el

Ministerio de Planificación señala que las operaciones bancarias deben seguir realizándose de acuerdo con las normas habituales, pero que ya no hay razones por las que deba continuar existiendo, como en el pasado, el secreto bancario y comercial.

Asimismo están estudiándose medidas para poner fin al mercado paralelo de dólares. El presupuesto para abril-diciembre de 1980 da la prioridad a los gastos para la educación, la sanidad, los servicios sociales y la defensa. El sistema fiscal que conelleva es, por un lado, bastante prograsivo para las rentas de la propiedad, y por otro está destinado a atajar la evasión fiscal de las sociedades.

Finalmente, para combatir la 'descapitalización'', el control obrero se designa regularmente como el instrumento que deben utilizar los trabajadores. Todo esto difícilmente puede aplacar las preocupaciones de los propietarios, máxime cuando los trabajadores y los campesinos utilizan la relación de fuerzas sociales y el mayor grado de organización para imponer sus reivindicaciones.

En las declaraciones actuales del FSLN, se señala con mayor insistencia el papel primordial de la clase obrera y de los campesinos, con miras a llevar hasta sus últimas conclusiones el proceso revolucionario.

En la prensa del FSLN y de la CST se subraya también el papel de las ARE (Asambleas de Reactivación Económica), que aparecen como organismos que deben estimular tanto el esfuerzo de producción como incrementar las posibilidades de los trabajadores de controlar la producción (en el sector privado) y de intervenir en las decisiones (en el sector nacionalizado). El grado de desarrollo y la actividad de estas estructuras aún es desigual. *Poder Sandinista,* semanario de orientación de los miembros del FSLN, explica así las funciones de las ARE: *''Las ARE son escuelas en las que los trabajadores y los campesinos pueden conocer el proceso de producción mucho mejor de lo que les permite su inserción directa en la producción. Es el primer paso que les permitirá intervenir directamente en la marcha de su empresa y de toda la economía. Evidentemente, este proceso sufre aún fuertes limitaciones''.*

Se afirma la necesidad de coordinar las ARE a nivel de ramo: *''En el caso del azúcar, por ejemplo, deberíamos ser capaces de organizar AREs en las que participen delegados de todas las azucareras, de la administración y representantes del Estado, para que los trabajadores puedan conocer y controlar los planes de producción de todo el ramo''* (ibidem).

El estallido de una serie de huelgas (en la construcción, las azucareras y algunas empresas de Managua), durante los primeros meses del año, ponía de relieve, por un lado, los problemas y dificultades que sigue teniendo el FSLN en el proceso de organización y unificación sindical, y por otro, el aprieto en que le coloca su orientación.

En efecto, al afirmar que de hecho los trabajadores detentan ya el poder, la CST sitúa el centro de gravedad de la acción sindical en el apoyo al relanzamiento de la producción. La posición defendida por el FSLN en torno a la unidad sindical, y la denuncia a menudo virulenta de las demás organizaciones sindicales —cuyas direcciones, en algunos casos, no están a favor de la unificación pero disponen de una influencia real en determinados sectores— no facilita el proceso de unificación sindical.

Para superar los obstáculos, e incluso para colocar a estas direcciones en una situación difícil, hace falta combinar una verdadera discusión y la defensa de la democracia sindical. A este respecto, las concepciones del FSLN siguen siendo bastante estrechas.



**De izquierda a derecha: Daniel Ortega (de la dirección del FSLN), Maurice Bishop (primer ministro de Granada) y Fidel Castro. Primero de Mayo en La Habana.**

## Apoyo a la lucha del pueblo salvadoreño y acuerdo con la URSS

En la fase actual, la campaña de alfabetización constituye la actividad de masas más importante. La polémica entre Robelo, sectores de la ''iniciativa privada'' y el FSLN, estalló desde el principio de esta campaña. La burguesía la considera demasiado politizada y entiende que es una campaña de propaganda a favor del FSLN.

La constitución de las Milicias Populares Sandinistas se apoyó en el tema de *''nuestra defensa se organiza con el pueblo en las milicias''*. En la declaración de la dirección del FSLN, titulada *''La coyuntura y nuestras tareas''*, podemos leer: *''El imperialismo y los países con gobiernos reaccionarios consideran normal la creación de un ejército profesional, regular. Para ellos, el peligro reside en la formación de las milicias, porque esto significa que el pueblo se arma para defender la Revolución''.*

En el Encuentro Nacional de Trabajadores, Edén Pastora declaró: *''Las milicias van codo a codo con el EPS (Ejército Popular Sandinista), el ejército del pueblo, de los obreros y campesinos. Cuando una revolución es profunda, suscita la contrarrevolución, y por esto los enemigos que se preparan para atacarnos se darán cuenta muy pronto que los obreros y los campesinos disponen de un ejército de los pobres: las milicias populares sandinistas''* (*Barricada* del 14.4.1980).

Desde finales de marzo, el apoyo a la lucha del pueblo de El Salvador y las denuncias de la política de ''reforma-represión'' de la Junta son una constante en la prensa. Se han organizado diversas manifestaciones de apoyo al combate del pueblo salvadoreño. Los comunicados de las organizaciones revolucionarias salvadoreñas se reproducen en *Barricada*.

El periódico *El Brigadista*, órgano de la Juventud Sandinista del 19 de Julio, muy difundido entre las brigadas de alfabetizadores, publica una entrevista con un dirigente de la Asociación de Estudiantes Universitarios de El Salvador (ligada al BPR), en la que esta organización explica que *''es necesario profundizar y reforzar el proceso revolucionario en Nicaragua para reforzar efectivamente el proceso revolucionario en El Salvador''.*

Tomás Borge ha señalado claramente, frente a las amenazas de intervención imperialista, que cualquier ataque del imperialismo contra el pueblo de El Salvador sería considerado como un ataque contra el pueblo de Nicaragua. Esto se inscribe dentro del marco de una acentuación de la movilización antiimperialista tras la ''revelación'' de las actividades de la CIA (con ocasión de la votación, en el Congreso norteamericano, sobre el préstamo de 75 millones de dólares), tras el aplazamiento



de dicho préstamo y tras diversas operaciones subversivas que partieron de Honduras.

El 19 de marzo se iniciaron discusiones con los representantes de la agrupación de los bancos privados internacionales, con miras a renegociar la deuda. El ministro director del FIR (Fondo Internacional de Reconstrucción) hizo saber que la delegación nicaragüense rechazaba el actual tipo de interés LIBOR (London Interbank Oferred Rate), del 19%, y afirmó que *"ni en nuestras propuestas, ni en el modelo de negociación, nos planteamos solicitar la ayuda del FMI"* (23.3.1980). Los resultados de esta renegociación se conocerán dentro de poco. De momento, aún se han obtenido algunos préstamos, procedentes de países europeos o de Venezuela.

En cuanto a la ayuda, el cambio más significativo está en los préstamos y tratados bilaterales acordados con Checoslovaquia, la RDA y la URSS. La delegación de Nicaragua en la URSS estaba compuesta por Tomás Borge, Humberto Ortega (Ministro de Defensa) y Henry Ruiz (ministro de Planificación), así como por Moisés Hassán (representante de la Junta).

**Según *The Guardian*, *"el importe de la ayuda obtenida tras el viaje a Europa del Este no se conoce. Pero los informes de prensa en Praga señalan que Checoslovaquia ha concedido un préstamo de 20 millones de dólares y un portavoz del ministerio de Asuntos Exteriores ha dicho que la RDA había otorgado asimismo una ayuda de 20 millones de dólares"*. (15.4.80).**

La congelación del préstamo norteamericano —con el que contaba el sector privado—, junto a la apertura de relaciones económicas con la URSS y los países del Este, no podía sino estimular la inquietud de los industriales, de los propietarios y de sus representantes en las instancias gubernamentales y de la alta administración.

## La coalición se rompe

Además de los choques con una parte del sector privado, han proliferado las disputas con Robelo, que tras su viaje a los Estados Unidos acentuó la operación de darle alas al

MDN. El 18 de marzo, *Barricada* publicó en primera plana la opinión de algunos trabajadores sobre el MDN y sobre Robelo: *"Son unos burgueses que nos han explotado y ahora querrían aparecer como grandes revolucionarios que defienden los intereses de los trabajadores"*.

El editorial del diario del FSLN subraya que la plataforma publicada por el MDN trata de *"ocultar las verdaderas raíces y el carácter de clase del MDN"*. Los ataques prosiguen. El comandante Núñez Téllez denuncia la insistencia con la que Robelo exige la celebración de elecciones. Expresa el temor de que *"el MDN se convierta en el caballo de Troya de la reacción"* y pueda ser *"utilizado por los que descapitalizan y boicotean la producción" (Barricada,* 19.3.1980).

El MDN se defiende, en un comunicado, de la acusación de ser "el reducto de los reaccionarios". Quiere ser *"la bandera legítima de los auténticos revolucionarios que, independientemente de sus orígenes sociales, tratan de conducir la patria hacia el socialismo en libertad, genuinamente nicaragüense" (Barricada,* 24.3.1980). He aquí el lenguaje clásico de una oposición burguesa o socialdemócrata frente a una revolución en marcha.



Las advertencias y los reproches del FSLN al MDN no paren destinados a precipitar una ruptura. Paralelamente se subraya, además, la necesidad de mantener el "bloque patriótico" (alianza del FSLN con el MDN, etc.). Se trata de presionar sobre el MDN, de empujarlo a que tome sus distancias con respecto a quienes se resisten a relanzar las inversiones, de tenerlo como aval de la política del gobierno (lo que reforzaría la posición del FSLN en la campaña contra la descapitalización), y, finalmente, de preparar la constitución del nuevo Consejo de Estado, organismo "consultivo y legislativo", que deberá formarse el 4 de mayo de 1980.

La cuestión del Consejo de Estado exacerbará las contradicciones y sacará a la luz la fragilidad de una orientación que combina el mayor control en el terreno político-militar, un aumento del grado de organización de las masas y la aplicación de un plan basado en una "economía mixta", mientras gran parte de las empresas siguen paralizadas.

El proyecto de ampliación del Consejo de Estado —de acuerdo con el Programa de Gobierno de junio de 1979 debía estar compuesto de 33 miembros e incluir, entre otros, a representantes de los partidos del Frente Amplio Opositor y de las organizaciones patronales agrupadas en el COSEP— a 47 miembros, permitirá la integración en él de delegados de los CDS, de la CST, de la ATC y de las demás organizaciones de masas dirigidas por el FSLN.

Con ocasión de su dimisión, Robelo protesta contra el hecho de que *"el Consejo de Estado cuenta al menos con 27 miembros vinculados al FSLN, mientras que su partido no tendría ni uno" (Le Monde,* 24.4.1980). En su editorial, *Barricada* explica: *"En primer lugar, este organismo consultivo y legislativo contará con una amplia representatividad nacional, y en segundo lugar, estarán presentes en él las fuerzas vitales de la revolución, de acuerdo con su representatividad real"* (11.4.1980).

Robelo escogió este problema para tomar la iniciativa de abrir la crisis. Exige que todos los que se reclaman del MDN abandonen sus cargos en el gobierno y en la administración, afirmando que detentan el 26% de los puestos *(El País,* 24.4.1980). Diversos altos cargos responden positivamente a su llamamiento.

El COSEP le sigue de cerca y presenta una serie de exigencias a la Junta —formada ahora por tres miembros del FSLN— y a la dirección del FSLN. Se emprenden ne gociaciones. Washington responde inmediatamente y amenaza con romper las relaciones con Managua si *"las autoridades nicaragüenses abandonan el compromiso del gobierno de Nicaragua de respetar el pluralismo"*.

Los medios de comunicación controlados por el FSLN critican severamente a Robelo. Humberto Ortega estigmatiza del modo siguiente los móviles del jefe del MDN: *"No ha podido identificarse con un proyecto político que restringe el enriquecimiento ilimitado en Nicaragua y beneficia a la mayoría de desposeídos del país" (El País,* 25.4.1980). De momento, el FSLN sigue proclamando su vinculación a la economía mixta y al pluralismo.

Robelo he echado fuego al conflicto en un contexto caracterizado por importantes acontecimientos económicos (cosecha del algodón y estancamiento de la producción industrial), por el chantaje con la ayuda económica internacional y por las intenciones cada vez más claras del imperialismo norteamericano de asestar un golpe en América Central. Las grandes maniobras militares van a comenzar de un momento a otro en el Caribe. Es una advertencia destinada a obtener algunas concesiones y, en este marco, a reorganizar las fuerzas que se oponen a la revolución.

Lógicamente, esta crisis ha tomado la forma de una ruptura de la coalición a nivel gubernamental y de un desgarramiento en el seno del aparato de Estado, es decir, donde se trama la situación particular de dualidad de poder abierta por la victoria de julio de 1979.

En las respuestas inmediatas del FSLN al COSEP, lo importante no será tanto las afirmaciones generales sobre la economía mixta como el tipo de repercusión de un acuerdo que influiría negativamente en la actividad de las masas trabajadoras, y por consiguiente en la evolución de la relación de fuerzas entre las clases. La salida de la crisis dependerá ante todo de la continuidad de la movilización de masas, de la consolidación de la organización sindical de los trabajadores y campesinos y del desarrollo de las iniciativas de control frente al sabotaje.

Todo esto hace referencia a la ampliación y centralización de las diversas instancias de autoorganización de las masas, a su expresión en el seno del Consejo de Estado y a la futura función real de dicho organismo. La preparación militar frente a una ofensiva reaccionaria está desde hace tiempo en el centro de las preocupaciones del FSLN.

La crisis de gobierno e institucional provocada por la dimisión de Chamorro, Robelo y sus aliados puede desembocar, según sea el tipo de réplica del FSLN y del movimiento de masas, en un paso decisivo hacia la formación de un gobierno obrero y campesino. ■

Declaración del Secretariado de la IVª Internacional.

# Defendamos la revolución salvadoreña contra la intervención imperialista y la represión sanguinaria



El impetuoso ascenso de las luchas de las masas salvadoreñas, que había obligado al imperialismo y a la oligarquía a desprenderse del general Romero el 15 de octubre de 1979, no ha dejado de desarrollarse desde entonces en este país. Alcanzó un primer punto culminante en la gigantesca manifestación de masas del 22 de enero de 1980, que, convocada por la Coordinadora Revolucionaria de Masas, reunió a un cuarto de millón de personas en la capital. Pese a una represión que va en aumento, hubo a continuación dos huelgas generales, la del 17 de marzo de 1980 (con ocupación de empresas) y la que se produjo en respuesta al asesinato del arzobispo Óscar Romero. En los funerales de este, centenares de miles de personas se manifestaron de nuevo en las calles de la capital. Al mismo tiempo proliferan las ocupaciones de tierras por los jornaleros, obreros agrícolas sin tierra. A su vez, las clases poseedoras y el imperialismo multiplican los actos de terror y de intimidación contra las masas en movimiento.

**De este modo, todo revela una situación extremadamente explosiva, que evoluciona rápidamente hacia una prueba de fuerzas.**

Aleccionados por el precedente de la victoria del FSLN en Nicaragua, y por la destrucción total del régimen y del aparato represivo de Somoza, el imperialismo y la oligarquía concentran todos sus esfuerzos para evitar que se repita la revolución nicaraguense en El Salvador. Para ello, habían instalado primero una Junta "democrática" que prometió "reformas", con miras a desarmar el potencial revolucionarios y anticapitalista del empuje de las masas. Se esforzaron en asegurarse el apoyo de algunos sectores de la oposición burguesa y pequeño burguesa.

De hecho, una parte de la democracia cristiana continúa apoyando a la Junta, pese a las masacres de que esta es responsable (más de 1.000 muertos en menos de 6 meses). El PC y su organización de cobertura, la UDN, así como el partido liberal burgués MNR (formalmente miembro de la IIª Internacional), participaron también, al principio, en el gobierno.

Grosso modo esta maniobra "aperturista" ha fracasado. Ante la exacerbación de las contradicciones sociales y el peso creciente de las organizaciones revolucionarias, las luchas y movilizaciones de masa no se han atenuado a la espera de las "reformas". Al contrario, se han extendido aún más. La Junta ha respondido intensificando la represión, quitando todo margen a las ilusiones reformistas. Así, la reforma agraria decidida por la Junta vino acompañada de la proclamación del estado de sitio. Su objetivo efectivo no es sino la ocupación por el ejércitó de las grandes propiedades agrarias y la represión sanguinaria de los jornaleros y de los campesinos pobres. De hecho, empezamos a asistir a una verdadera operación de limpieza del campo salvadoreño.

Fueron precisamente estas infames matanzas las que llevaron a monseñor Romero a llamar a los soldados a no obedecer más a las órdenes de matar que les dan los oficiales. Este llamamiento fue calificado de "crimen" por el coronel Marco Aurelio González, portavoz del ejército. Selló el destino del arzobispo de San Salvador. El 24 de marzo de 1980 fue abatido por un pistolero a sueldo de la extrema derecha.

De este modo se desvela claramente la nueva etapa en que ha entrado la lucha de clases en El Salvador, tras el fracaso de las maniobras de "apertura liberal". El imperialismo, la oligarquía y la extrema derecha salvadoreñas preparan el aplastamiento físico de las organizaciones revolucionarias y de los sectores de masas que las apoyan. La reacción salvadoreña dispone para ello no sólo de un ejército bien entrenado, que el imperialismo está reforzando continuamente, sino también de milicias de extrema derecha, como la ORDEN, que cuenta con millares de personas y que se apoya en los sectores atrasados del campesinado, y que han sido creadas y entranadas por cuadros dirigentes del ejército y de la policía y están estrechamente vinculadas a estos.

Las fuerzas contrarrevolucionarias son por tanto más numerosas y más fuertes que en Nicaragua. Son la expansión política de la oligarquía salvadoreña, independientemente de las divergencias tácticas que la separan a unas de otras; por lo demás, esta oligarquía no es novata en materia de represión sanguinaria. Ya en 1932 había aplastado la insurrección desencadenada por el joven Partido Comunista, asesinado a 30.000 campesinos pobres y jornaleros agrícolas con el fin de "pacificar el país". Las famosas 14 familias que poseen el 60% de las tierras y que tienen en su poder una buena parte de la industria, de las finanzas, y del comercio al por mayor, aliándose así con amplias capas de la burguesía, no están dispuestas a ceder sus riquezas y su poder al pueblo sin una lucha a muerte. Los crímenes y las masacres que están dispuestas a perpetrar no tienen límites.

Junto a la oligarquía, el imperialismo, y en primer lugar el imperialismo norteamericano, se compromete a fondo en la lucha contra la revolución salvadoreña en ascenso. No sólo continúa suministrando su ayuda económica corriente a la Junta, su hijo legítimo, con vistas a compensar los efectos de la evasión masiva de capitales que se desarrolla desde hace meses, sino que intensifica también sus suministros de armas al ejército, aduciendo hipócritamente que Cuba ayuda a las guerrillas de extrema izquierda. Moviliza a la burguesía centroamericana y a la del "Bloque Andino", para evitar toda política de "no intervención" o de rechazo del apoyo a la Junta. Esta presión ya ha tenido un éxito notable en el caso de Costa Rica y de Venezuela, cuyas burguesías manifiestan una hostilidad muy clara hacia las organizaciones revolucionarias salvadoreñas, mientras que anteriormente se habían esforzado en ayudar en cierta medida al FSLN contra Somoza, tratando además de este modo, de mantenerlo en el marco del régimen capitalista, gracias a una solución de recambio a la dictadura que no pusiera en entredicho este marco.

En las próximas semanas no podemos excluir formas aún más directas de intervención contrarrevolucionaria del imperialismo. Ya ha llegado una fuerte misión militar norteamericana a El Salvador, compuesta de numerosos "consejeros". Hay que recordar que la intervención masiva del imperialismo norteamericano contra la revolución vietnamita también empezó a comienzos de los años 60 con el envío de numerosos "consejeros militares" norteamericanos al servicio de la dictadura de Diem en Saigón.

En la frontera de Guatemala está dispuesto a intervenir un ejército de 10.000 contrarrevolucionarios cubanos y exguardias nacionales nicaraguenses. Frente a estas numerosas amenazas y provocaciones que pesan sobre ellas, las masas trabajadoras salvadoreñas y las cuatro organizaciones revolucionarias que han creado hasta ahora, el FAPU, las LP 28, el BRP y el MLP, se topan con dificultades mayores a las que tuvieron que hacer frente las fuerzas del FSLN en Nicaragua. Pero disponen también de bazas más importantes.

Entre las dificultades mayores hay que mencionar: el carácter más estructurado y mejor armado de la clase dominante y de su base en la pequeña burguesía. La configuración topográfica (una planicie grande), que es menos favorable para la lucha de guerrillas masiva que la geografía de Nicaragua; la imposibilidad de constituir una base armada junto a la frontera inmediata del país. La mayor división entre las propias organizaciones revolucionarias, las tradiciones sectarias en las relaciones mutuas que tienen algunas de ellas; la ausencia, hasta hoy, de auténticos órganos unitarios en la base, en los barrios y en las aldeas.

Entre las bazas que favorecen el desarrollo de la revolución salvadoreña hay que mencionar el efecto positivo que tuvo para la combatividad de las masas en toda América Central la caída de la dictadura de Somoza y los avances de la revolución nicaraguense; el mayor peso del proletariado salvadoreño, en comparación con el de Nicaragua, y su mayor experiencia y tradición de lucha; el carácter semiproletario de una fuerte proporción de la población rural (el 80% de la población rural tiene como principal fuente de ingresos el salario, aunque sólo sea temporero),acostumbrado a formas de organización sindicales o semisindicales; la tradición de lucha de clases, más pronunciada en El Salvador que en Nicaragua, donde el enfrentamiento directo entre la burguesía "oligárquica" y "nacional", por un lado, y las masas desheredadas por otro, ha impregnado desde hace tiempo la ideología y la práctica de las organizaciones revolucionarias (en parte también como consecuencia del mayor peso de un PC derechista sumergido hasta el cuello, aún hasta hace poco, en una práctica de colaboración de clases).

En la etapa actual, la tarea principal de las masas salvadoreñas y de sus organizaciones revolucionarias consiste en hacer frente a la represión sanguinaria de la Junta, de las organizaciones de extrema derecha, de los representantes directos del imperialismo y de sus mercenarios. Para ello, es necesaria la unidad de acción más amplia entre organizaciones obreras y campesinas, no sólo en la cúspide -donde se ha formado la Coordinadora Revolucionaria de Masas, el 11 de enero de 1980-, sino también en la base. La unificación de las organizaciones de masas y de los sindicatos es el medio más apropiado para superar el estadio en que cada una de las organizaciones revolucionarias creaba su propio "frente de masas", excluyendo a militantes o simpatizantes de otras organizaciones, o a independientes. Esta unificación también es indispensable para desarrollar organismos masivos de autodefensa, apoyados por todas las masas urbanas y rurales, como ocurrió en Nicaragua con el desarrollo de los comités unitarios de defensa civil.

Las tareas de autodefensa, de protección frente a la represión y a la contrarrevolución, están además estrechamente vinculadas a las tareas vitales inmediatas de la propia revolución salvadoreña, que sólo podrán realizarse mediante la insurrección popular generalizada. Estas tareas están resumidas en grandes trazos en la "Plataforma programática del Gobierno Democrático Revolucionario", publicada el 15 de febrero de 1980 por la Coordinadora Revolucionaria de Masas.

Incluyen particularmente: la completa destrucción de la maquinaria político militar de la dictadura existente desde hace medio siglo, es decir, el aparato estatal burgués; la liquidación definitiva de la dependencia económica, política y militar del imperialismo; la garantía de las libertades democráticas; una revolución agraria radical; la transferencia al pueblo, mediante la nacionalización y la creación de empresas colectivas y cooperativas, de los medios de producción y distribución fundamentales, en especial las compañías de producción y distribución de electricidad, las refinerias de petróleo, las grandes empresas industriales, el comercio exterior, la distribución, el transporte y las finanzas (Bancos y Compañías de Seguros).

Este programa, más radical que el del FSLN en la fase final de la lucha contra Somoza, abre claramente la perspectiva de una revolución que pasa sin solución de continuidad de las tareas antiimperialistas y antioligárquicas a las tareas anticapitalistas de la revolución. Un gobierno que aplique todas estas medidas no podría estar ya al servicio de los capitalistas y de la casta militar, sino que sería un gobierno que defendería los intereses de los obreros, de los campesinos y de las demás capas explotadas. Los marxistas revolucionarios luchan consecuentemente y sin componendas por esta perpectiva, la



"...La división entre las propias organizaciones revolucionarias, las tradiciones sectarias en las relaciones mutuas que tienen algunas de ellas; la ausencia hasta hoy de auténticos órganos unitarios en la base, en los barrios y en las aldeas, son algunas de las dificultades mayores..."

de un gobierno obrero y campesino sin generales ni patronos. Su realización reclama la movilización y la organización de masas, así como su armamento general. Este proceso desembocaría en una amplia red de comités populares democráticamente elegidos en las ciudades y en el campo, que asestaría el golpe final al poder económico y político de la burguesía, que como clase comparte, junto con el imperisliamo y la oligarquía, la responsabilidad de todos los males que padecen las masas populares salvadoreñas desde hace medio siglo, de todos los crímenes cometidos contra ellas.

Paralelamente a la política de represión sangrienta, a gran escala, que están preparando el imperialismo y sus esbirros, tratan también de invertir la orientación de las organizaciones revolucionarias. Esta presión será muy fuerte, máxime si el ascenso de las masas prosigue y si fracasa la política de represión. La ampliación de las fuerzas que se preparan para crear un gobierno de recambio al de la Junta puede ser la ocasión para semejante maniobra.

Cualquier bloque político con la burguesía que trabe la movilización y la autoorganización unitaria de las masas con miras a llevar a la práctica las tareas centrales mencionadas más arriba constituiría en este sentido un freno, y no un motor de la revolución salvadoreña. Facilitaría objetivamente los esfuerzos de las clases poseedoras por sustituir el aparato estatal de la dictadura que quieren destruir las organizaciones revolucionarias y las masas, por un aparato estatal burgués con una forma distinta.

El primero de abril de 1980, la Coordinadora Revolucionaria de Masas lanzó un llamamiento a la solidaridad Internacional con las luchas en El Salvador. La IVª Internacional llama al movimiento obrero y al movimiento antiimperialista en América Central, en el Caribe y en toda América, en los Estados Unidos, en Europa y en todos los demás países, a organizar una vasta campaña de información sobre la represión sanguinaria, los riesgos de su extensión cualitativa y de intervención imperialista directa que pesan sobre la revolución salvadoreña, y a organizar en su apoyo un amplio movimiento de solidaridad internacional.

El imperialismo desea crear a cualquier precio un cordón sanitario en torno a la revolución nicaraguense, para impedir que se extienda a toda la región. Si logra sus fines, los riesgos de ahogar esta revolución, o incluso los de una nueva agresión contra la revolución cubana, serán mayores.

Pero si fracasa la contrarrevolución salvadoreña, si la revolución de algunos pasos decisivos, se desarticulará todo el triángulo contrarrevolucionario -El Salvador, Honduras, Guatemala-, lo que sería un gigantesco paso adelante para el conjunto de la revolución latinoamericana, al tener un efecto acumulativo junto con la revolución nicaraguense.

Todos los revolucionarios, todos los militantes obreros y antiimperialistas, deben ser plenamente conscientes de la importancia de la prueba de fuerzas que se prepara en este pequeño país de América Central.

Por esto, es nuestro deber movilizar todas nuestras fuerzas, desplegar todos los esfuerzos para detener el brazo criminal del imperialismo y de la oligarquía en América Central.

FUERA LAS MANOS DE LA REVOLUCION SALVADOREÑA
DETENCION INMEDIATA DE TODOS LOS SUMINISTROS DE ARMAS Y DE TODO ENVIO DE "CONSEJEROS" Y MERCENARIOS IMPERIALISTAS A EL SALVADOR
NINGUN CENTIMO PARA LA JUNTA, PARA LOS ASESINOS DEL EJERCITO Y DE ORDEN
DERROGACION INMEDIATA DEL ESTADO DE SITIO Y REESTABLECIMIENTO DE TODAS LAS LIBERTADES DEMOCRATICAS SIN RESTRICCION ALGUNA
DEFENDAMOS A TODOS LOS QUE LUCHAN CONTRA EL IMPERIALISMO Y LA OLIGARQUIA Y A TODAS LAS VICTIMAS DE LA REPRESION
SOLIDARIDAD CON LAS CUATRO ORGANIZACIONES REVOLUCIONARIAS DE LAS MASAS SALVADOREÑAS: BPR, LP 28, FAPU Y MLP
TODO EL PODER A LA COORDINADORA REVOLUCIONARIA DE MASAS ■

El Salvador

# Velada de armas

Michel Rovere

EL asesinato del arzobispo de San Salvador, Monseñor Oscar Arnulfo Romero, por un asesino profesional, arroja, por si falta hacía, una luz un poco más cruda sobre la actitud del combate de la oligarquía salvadoreña y de la actual junta militar apoyada por Washington.

Como conservador, el Monseñor Romero encarnaba esa fracción de la jerarquía católica de América Central que comprendía, a la luz del final del somocismo en Nicaragua y del ascenso revolucionario en la región, que la Iglesia sería barrida si identifica sus intereses con la defensa sin matiz de los egoísmos de la oligarquía y de las razones de estado de las dictaduras militares.

Pero más que su defensa de los derechos humanos, que venía acompañada de un llamamiento a la no violencia (así, en octubre de 1979, tras la toma del poder por la actual Junta, la Iglesia salvadoreña pidió a las organizaciones de extrema izquierda y a las masas que renunciaran a las acciones armadas), son las últimas posturas adoptadas por el arzobispo las que sellaron su suerte. En primer lugar, la denuncia, y por tanto la publicidad que dió a la "reforma agraria" decretada por los militares. Esta reforma agraria sirvió fundamentalmente a la Junta para enviar a sus tropas a ocupar las propiedades agrícolas donde los movimientos de protesta de los campesinos pobres y de los trabajadores rurales eran las más avanzadas. Anunciando que "las tierras nacionalizadas"' sólo serían diustribuidas a los buenos campesinos, es decir, a los campesinos organizados en las redes de la organización de extrema derecha ORDEN, o "apolíticos", el ejército empezó a expulsar a los campesinos y trabajadores agrícolas. Varias decenas de campesinos encontrarían la muerte en los enfrentamientos que se produjeron.

*"No se riega la tierra con sangre"*, explicó entonces el prelado. Con la voluntad de no dejarse desbordar por la radicalización del movimiento de masas, e incluso para poder desempeñar en el momento oportuno un papel de mediador y conciliador para salvar lo que pudiera salvarse del régimen, el monseñor Romero no duró en afirmar que la Iglesia no puede condenar la violencia *"una vez agotados todos los medios de la evolución social hacia la justicia, y cuando los daños provocados por la insurrección fueran un mal menor en comparación con la situación actual"*.

Pero la gota que desbordaría el vaso, para la oligarquía y la Junta militar, fue cuando en su última homilía dominical, el prelado llamó a los soldados a *"no obedecer a ninguna orden de matar"*.

Para el arzobispo, que había sacado las lecciones de Nicaragua, se trataba de salvar, en caso de que cayera el régimen por obra de una insurrección popular, lo que podía constituir el aparato de Estado; para la Junta militar y el imperialismo, que han optado por el aplastamiento físico de la extrema izquierda y del movimiento sindical, era una provocación insoportable. Poco después del discurso, el portavoz de las fuerzas armadas, el coronel Marco Aurelio González, calificó el llamamiento del prelado de "crimen".

Pocas horas después, una organización de extrema derecha liquidaba a este personaje molesto.

Este asesinato, al igual que la represión que prosigue en el campo, saca a la luz de nuevo el papel de las organizaciones de extrema derecha. Estas organizaciones están estrechamente vinculadas, pese a todos los desmentiudos oficiales, con la oligarquía, el aparato de Estado y las agencias de información norteamericanas. Estas organizaciones terroristas organizan, en colaboración con la policía y el ejército, el ataque contra las manifestaciones obreras y campesinas, y se encargan de los trabajos sucios, del asesinato y de la liquidación de militantes revolucionarios y sindicalistas. Hace pocos días volvieron a descubrirse los cadáveres de militantes torturados y asesinados.

Estos comandos se ven reforzados ahora por mercenarios supervivientes de la guardia nacional somocista o de organizaciones de exiliados cubanos anticastristas, que con ocasión de la última huelga general del 17 de marzo, convocada por la Coordinadora Revolucionaria, intervinieron contra los obreros que ocupaban sus fábricas.

Lars Palmgren, enviado especial de *Internationale*, órgano de la sección sueca de la IVª Internacional y uno de los pocos periodistas que aún no han sido expulsados, asistió a estas operaciones del terror blanco: *"Era en la 'zona libre', fuera de la capital, San Salvador. Al llegar pasamos al lado del personal de la Cruz Roja, al que los militares no dejaban entrar en el barrio, mientras que todo el mundo sabía que había muchos heridos en la fábrica que hay un poco más abajo en la calle".*

*Cuando estábamos ahí, llegó un convoy militar de la fábrica. Estaba compuesto por dos pequeñas tanquetas, dos o tres camiones llenos de soldados y pequeños vehículos llenos de hombres armados que visiblemente eran de la policía. Cuando intenté sacarles una foto, apuntaron con sus fusiles hacia nosotros, los armaron y empezaron a gritar de una forma histérica.*

*A continuación, 50 soldados trataron de dispersar a la gente que se había aglomerado en torno al vehículo de la cruz roja. Un poco más tarde, los soldados desaparecieron y pudimos entrar en el barrio. Al llegar a la fábrica "APLAR", que pertenece a norteamericanos, y que estaba cerrada desde mediados de diciembre, nos encontramos con gente que gritaba.*

*Los trabajadores de la fábrica habían sido convocados ese lunes para discutir con la dirección sobre la reanudación de la producción. Al entrar vimos alrededor de 1.500 personas, principalmente mujeres. Los suelos y los muros estaban cubiertos de sangre. El mobiliario y las puertas estaban destruidos. Alrededor de nosotros había gente en estado muy grave, gimiendo. En una de las habitaciones había 5 trabajadores muertos, tendidos en el suelo: cuatro*



El Ejército, cercando la Universidad.

*hombres y una mujer, asesinados a quemarropa. En el exterior, cerca de la valla de la fábrica, había aún otro hombre tendido que había sido matado.*

*El terror había durado unas dos horas. Los que no habían sido heridos o matados, habían sido golpeados muy brutalmente. Sin embargo, este acto de terror contra los trabajadores ni siquiera se mencionó en los diarios de El Salvador.*

*Después de esto vimos cómo la policía y los militares rodearon las otras partes de la fábrica que habían sido ocupadas por los trabajadores. Hubo numerosos enfrentamientos, pero la Cruz Roja y los periodistas no pudieron entrar.*

*Según un militante sindical, en un ataque de las fuerzas represivas a la fábrica de Sacor Cuscatlán murieron otros 10 obreros. Pero en los periódicos, que están censurados, la versión oficial dice que las violencias fueron provocadas por extremistas que empezaron a disparar sobre la policía.*

*No se sabe exactamente cuántos trabajadores murieron ese día en las demás fábricas, pero podemos avanzar la cifra de 35 personas. Nadie sabe cuántos fueron heridos".*

El asesinato de monseñor Romero, punto culminante de una oleada de violencias, exacciones y crímenes, que hizo 200 muertos en dos semanas, no puede sino reforzar la polarización política y social creciente en El Salvador, y cerrar un poco más las posibilidades de una salida pacífica o negociada a la crisis del régimen.

Un antiguo asistente el prelado explicó: *"El asesinato del arzobispo amenaza con radicalizar a todo un sector de la población que creía en los derechos humanos y en la no violencia".* Un miembro del propio gobierno manifestó sus temores, explicando que a partir de ahora la extrema izquierda *"aparece como una solución alternativa para un número creciente de salvadoreños".*

Hace dos semanas, la Coordinadora Revolucionaria, que agrupa, además de los comunistas pro-Moscú de la UDN, a la FAPU, el BPR y las LP 28, publicaba la plataforma programática "por un Gobierno Democrático Revolucionario".

Esta plataforma abre las puertas a una alianza política con sectores de la burguesía nacional, partidos burgueses de oposición (el MNR, vinculado a la IIª Internacional, y la oposición que acaba de ser expulsada del Partido Demócrata Cristiano, que está en la Junta), y sectores del ejército, calificados de "patriotas y honestos".

Esta plataforma merece varias observaciones. Es evidente que, de la misma manera que la creación, en enero, de la Coordinadora Revolucionaria, se inspiraba en la reunificación de las tres 'tendencias' del FSLN (de hecho, tres alas que tenían su propia configuración política y organizativa), en diciembre de 1978, la definición de esta plataforma y la política de alianzas que expresa se inspira en la misma que aplicó el FSLN en vísperas de su victoria contra Somoza.



**La Coordinadora Revolucionaria se inspira en el FSLN.**

Como ya nos lo explicaron los representantes de algunas organizaciones revolucionarias salvadoreñas, se trata de subvertir aún más la base política y social del régimen —en particular, de acentuar la crisis de la Democracia Cristiana—, de favorecer las fisuras en el seno del ejército y sobre todo de aislar a la Junta a nivel internacional. El eje central sigue siendo el de la proclama de enero por la Coordinadora, es decir, el de la preparación de una huelga general insurreccional para derribar al gobierno militar apoyado por el imperialismo. Pero la diferencia con lo que sucedió en Nicaragua, es que esta plataforma es una expresión bastarda, en forma de compromiso, de concepciones divergentes en el seno de la Coordinadora en torno a las alternativas políticas a ofrecer. Y en segundo lugar, debido a las particularidades de El Salvador y tras las lecciones que saca la burguesía salvadoreña y los regímenes de la región de lo que sucedió precisamente en Nicaragua, la situación en el seno del campo burgués en El Salvador tiene poco que ver con lo que ocurrió en Managua.

Es cierto que los firmantes de la plataforma de gobierno tienen intenciones divergentes. Para el Partido Comunista, esta plataforma debe permitir reconstruir, junto con el MNR, y también con los restos de la Democracia Cristiana, una verdadera alianza de frente popular, más o menos según el modelo de lo que fueron sus alianzas electorales de 1972 y 1977, o el *Foro Popular* formado en Septiembre de 1979. El *Foro Popular* estalló cuando el MNR y el PDC pasaron a apoyar a la Junta. Evidentemente, el proyecto del PCS consiste en detener el ascenso revolucionario de las masas en un proyecto de colaboración de clases que deje intacto lo esencial del aparato estatal burgués y de los intereses de la burguesía y del imperialismo.

Esto es lo que explicaba el Secretario General del PCS, Schafik Jorge Handal, en una entrevista reproducida a finales de febrero en *Granma,* a propósito de las posibilidades de alianza con la Democracia Cristiana: *"Hemos recorrido juntos un camino desde hace varios años. Por tanto, nos conocemos bien y por eso podemos afirmar lo que acabo de decirle. La base del Partido Demócrata Cristiano pertenece en su gran mayoría al vasto movimiento popular revolucionario (...). Pensamos también que la mayoría de demócratas cristianos que forman parte de la dirección del partido y ocupan ahora puestos en el gobierno, sabrán reaccionar. Esperamos que sepan reaccionar.*

Salta a la vista ahora que el PCS y la UDN, que de octubre a diciembre de 1979 apoyaron a la Junta militar y participaron en su gobierno, se esfuerzan por avanzar sus propuestas y se protegen detrás de las formulaciones del FAPU en torno a la necesidad de un "gobierno de salvación nacio-

nal". Así, el FAPU explicó que esta plataforma de gobierno democrático revolucionario era la concreción de su propia fórmula de "gobierno de salvación nacional".

Al otro lado del abanico, las LP 28 explicaron que esta plataforma era la concreción de su consigna radical de "gobierno obrero popular y socialista".

Viendo las declaraciones de las LP 28, con las que trabaja cada vez más regularmente el BPR, es cierto que esta plataforma se distingue en varios puntos esenciales de lo que eran las plataformas elaboradas por los sandinistas junto con la oposición burguesa antisomocista.

1. **En torno a la cuestión decisiva, más que cualquier otra, del Estado**. La plataforma explica que *"la primera tarea y el primer objetivo de la revolución en El Salvador"* consiste en *"derrocar la dictadura militar reaccionaria impuesta y defendida por la oligarquía y el imperialismo yanqui contra la voluntad del pueblo salvadoreño desde hace 50 años.* ***Destruir su maquinaria político-militar*** *e instaurar un gobierno democrático revolucionario que se apoyen en la unidad de las fuerzas revolucionarias y democráticas, en el ejército popular y en el pueblo salvadoreño"* (el subrayado es nuestro).
2. Sobre la cuestión de las **medidas económicas** a aplicar tras la conquista del poder, está claro que su extensión y su profundidad, tal como se describen en el punto 7, van mucho más lejos que el programa inicial de los sandinistas de después de enero de 1979, que sólo se proponía la nacionalización de los bienes de Somoza.
3. La insistencia en el papel del movimiento de masas. En el punto 8 se subraya el desarrollo de la *"organización popular a todos los niveles"*, e la que se dice que su importancia radica en que *"el pueblo y su gobierno se identifican de la forma más estrecha"*.
4. Finalmente, un último aspecto, pero que está lejos de ser el menos importante, la cuestión de saber **quién dirige** la alianza "antiimperialista y antioligárquica", a la que vendría a unirse eventualmente algún sector de la "burguesía nacional".

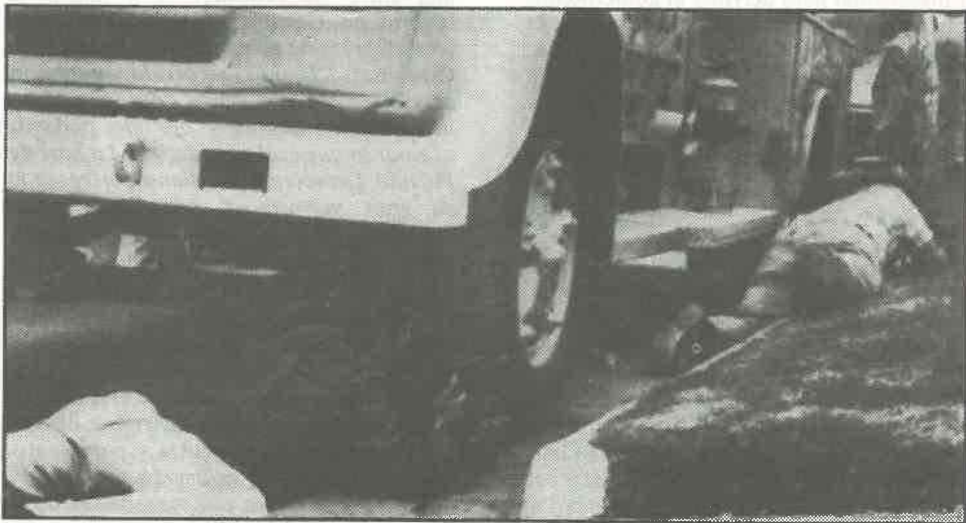
Se recuerda que tras el derrocamiento de Somoza y la conquista del poder, los sandinistas respondieron con la forma ción de la Junta de Gobierno, en la que detentaban de hecho tres de los cinco puestos, y la constitución de la dirección de los nueve comandantes de la revolución.

En El Salvador, de momento, aparece claramente que la dirección política y militar incontestable del proceso revolucionario sólo puede ser asumido por la Coordinadora Revolucionaria, que agrupa a la UDN y a las tres organizaciones revolucionarias.

Salta a la vista que los sectores favorables a una política de colaboración de clases, en el interior o en el exterior de la Coordinadora, batallarán, si no lo han empezado ya, ya sea por su ampliación hacia la derecha, ya sea por que su papel sea relativizado en beneficio de un frente más amplio, agrupado o no alrededor de la plataforma de gobierno democrático revolucionario.

Sin embargo, por el momento es evidente, tanto a la luz de la huelga general del 17 de marzo como del llamamiento a una nueva huelga general, ocho días despues de la muerte de Romero, que es la Coordinadora Revolucionaria la que sigue desempeñando efectivamente el papel de dirección.

Para concluir, es evidente que la publicación de esta plataforma está destinada, como decía Ana Mª Gómez, de la dirección del BPR, a llenar un vacío: el acuerdo en que se base la creación de la Coordinadora Revolucionaria establecía como perspectiva general la **huelga general insurreccional**. Pero no incluía ninguna consigna política transitoria que concretara, antes de desencadenar este enfrentamiento final, una alternativa a la Junta. Pero dadas las maniobras de esta última en torno a la cuestión de las "reformas", resultaba indispensable, para las organizaciones revolucionarias, concretar sus propuestas. La huelga general insurreccional sólo es una **forma de lucha** para derrocar el actual régimen. No basta para explicar a las amplias masas, sobre todo a los sectores que aún no siguen a la Coordinadora, **por qué** hay que derribarla (es decir, tras qué progrma de transformaciones alternativo hay que hacer frente a los fusiles de la Junta), ni **por quién** (qué forma superior de poder político puede sustituirla).



Se aproximan acontecimientos decisivos.

La otra diferencia entre Nicaragua y El Salvador, que no es secundaria, es que el dispositivo de las fuerzas políticas burguesas es totalmente distinto. En primer lugar, a causa del peso específico de la oligarquía salvadoreña, de las catorce familias, que poco tiene que ver con lo que eran Somoza y sus acólitos. Desde el punto de vista económico y social, sobre todo desde que la mayoría de la Democracia Cristiana apoya a la Junta, el peso de la "burguesía opositora" no tiene nada que ver con el peso que tenía la burguesía antisomocista.

También desde el punto de vista político, la solución propiciada por el imperialismo y las fuerzas armadas, desde el 25 de octubre, al formarse la Junta, modifica sensiblemente las posibilidades de comparación. Particularmente desde el punto de vista de la actitud de las burguesías centramericanas y de los gobiernos del Pacto Andino. Escaldados por lo que ocurrió en Nicaragua tras la caída de Somoza, han decidido apoyar a la Junta salvadoreña contra el movimiento de masas. Esto explica que, al menos por el momento, ninguna de las fuerzas burguesas opositoras, si quiera las más pequeñas, hayan aceptado tomar nota de la plataforma de gobierno democrático revolucionario que se les ofrecía. El último factor que explica esta actitud es la misma firmeza de la política de intervención del imperialismo en El Salvador y en la región.

Desde hace varios meses resulta evidente, para la burguesía salvadoreña en su conjunto, así como para las burguesías de la región (2), que Washington, después de lo ocurrido en Nicaragua, ha decidido convertir a El Salvador en el test de su capacidad de contener y aplastar al movimiento revolucionario que se desarrolla a escala de toda Centroamérica.

Carter vertió algunas lágrimas sobre la muerte del arzobispo, pero su administración, a través del Secretario de Estado, se apresuró a reafirmar el apoyo total a la junta, mientras prosiguen los envíos de armas, de dinero y de consejeros militares. Al aproximarse acontecimientos decisivos, esto determina para todos los marxistas revolucionarios la importancia de la defensa inmediata, de la solidaridad con la revolución salvadoreña, frente a los golpes combindos de la Junta, de la oligarquía y del imperialismo.

A esto se compromete la IVª Internacional. ■

Bolivia

# La crisis del régimen boliviano y la amenaza de golpe de estado



El golpe de Estado de agosto de 1971 en Bolivia inauguró ocho años de dictadura militar que iban a ser el periodo de la reacción más negra que haya conocido el movimiento obrero boliviano desde hacía un siglo. La llegada al poder del general Banzer puso un punto final sangriento a la crisis prerrevolucionaria de 1970-71, e inauguró una serie de derrotas del movimiento de masas a escala de todo el continente latinoamericano.

En 1973 vino el golpe de Estado militar en Uruguay, y después de derrocamiento sangriendo de la Unidad Popular en Chile. Tras el giro a la derecha de la dictadura militar peruana en 1975, el golpe de Estado de los militares argentinos, en 1976, contra el régimen de Isabel Perón, fue el apogeo de la ofensiva contrarrevolucionaria emprendida en toda la región por el imperialismo y las burguesías locales.

Ahora, con el resurgir de las luchas obreras de masas en Brasil y en el Perú, y recientemente en Bolivia, la crisis de las dictaduras militares ilustra la nueva fase de ascenso de las luchas de masas en América Latina, cuyos puntos culminantes han sido, hasta ahora, el derrocamiento de la dictadura somocista en Nicaragua y la apertura de la crisis revolucionaria en El Salvador.

En enero de 1978, el desgaste político de la dictadura militar boliviana, su incapacidad para resolver la crisis económica, agravada aun más por la crisis internacional, desembocarían en un proceso de "apertura democrática" —limitada e inestable—. En efecto, esta "apertura democrática" no iba a comportar la estabilización del sistema de dominación burguesa.

Al contrario: mientras que los partidos burgueses, a la sombra de los militares, seguían desgarrandose entre sí en torno a las soluciones políticas, económicas y sociales a dar la crisis, el proceso de "apertura democrática", por muy limitado y contradictorio que fuera, le permitiría al movimiento obrero reconstruir sus organizaciones y desarrollar sus experiencias a un nivel más alto.

El congreso de la Central Obrera Boliviana (COB), en mayo de 1979, y posteriormente la huelga general que desencadenó en agosto de 1979, contra los fraudes ocurridos en las elecciones de julio, iban a marcar la vuelta del movimiento obrero boliviano a la escena política.

En noviembre de 1979, todo un sector de las fuerzas armadas bolivianas (que jamás han sido depuradas durante los quince meses —desde agosto de 1978 hasta noviembre de 1979— en que se sucedieron nueve presidentes, siete de ellos militares, al frente del Estado boliviano), decidió, bajo el mando del coronel Natusch, interrumpir el proceso de "apertura democrática" y establecer una dictadura copiada de los modelos imperantes en el Cono Sur. La respuesta, si bien tímida en lo que respecta a la dirección de la COB, desembocaría entonces en una verdadera insurrección popular de masas que finalmente haría fracasar los proyectos de los golpistas.

El papel central que desempeña actualmente la COB para el movimiento obrero boliviano, pese a las tendencias de su dirección al compromiso y a la conciliación con sectores de la burguesía y del aparato de Estado, ilustra las características del nuevo ascenso del movimiento de masas en América Latina, descritas en la resolución adoptada por el XI Congreso Mundial de la IV Internacional, el pasado mes de noviembre.

Demuestra el papel clave desempeñado por el proletariado industrial (y en este caso minero), que se ha reforzado cuantitativamente como consecuencia de los cambios estructurales, del proceso e industrialización y de urbanización que ha conocido el último decenio.

Demuestra también la voluntad política de unidad e independencia de sectores de masa del movimiento obrero. A través del debate en torno a las candidaturas obreras patrocinadas por la COB para las próximas elecciones legislativas bolivianas, vemos resurgir el mismo tipo de preocupación que han impulsado a sectores enteros del movimiento obrero brasileño a lanzarse a construir un Partido de los Trabajadores, o que explican el impacto que tuvo la campaña del FOCEP en las elecciones a la Constituyente peruana, en junio-julio de 1979, y la presión unitaria de masas que condujo a la formación de la ARI en enero de este año, en el Perú (ver INPRECOR nº 13 y 14).

La preparación abierta, por parte de la derecha y de sectores del ejército boliviano, de un nuevo golpe de Estado, subraya la importancia que reviste la necesidad de combinar las tareas de construcción y de refuerzo del partido marxista revolucionario para la clase obrera boliviana, que incluye una política inteligente de agrupamientos y fusiones. ■

# Por la constitución de un frente único obrero en torno a la COB

**Publicamos a continuación la entrevista que hemos realizado a un miembro de la Central Obrera Boliviana y dirigente del Partido Obrero Revolucionario (sección boliviana de la IVª Internacional).**

**CUALES son las características de la crisis actual del gobierno boliviano, presidido por Lidia Gueiler?**

—Bolivia se encuentra actualmente en una situación de descomposición del Parlamento y del gobierno, que en cierto modo se apoya en aquél. Esta crisis resulta de un fracaso mucho mayor, a saber, el de la democracia burguesa en este país.

A partir de enero de 1978 se abrió en Bolivia un tímido proceso de democratización, que hasta el momento no ha logrado darle a la burguesía ninguna estabilidad. Desde enero de 1978 hemos conocido los dos escándalos de unas elecciones generales fraudulentas, tres golpes de Estado y dos gobiernos provisionales —uno, encabezado por la presidente Gueiler— surgidos de un Congreso débil, contradictorio y completamente paralizado. Esto ha aparecido claramente, a los ojos de las masas bolivianas, como el fracaso estrepitoso de la democracia burguesa, lo que incita a las fuerzas reaccionarias a actuar con mayor desfachatez.

Han sido las masas las que han defendido lo que puede llamarse democracia en Bolivia. En noviembre pasado, cuando el último golpe de Estado —en que fueron masacradas 300 personas—, fué únicamente la movilización de los trabajadores la que hizo fracasar los planes de la reacción. Si a todo ello se añade una situación económica cada vez más difícil, de la que se deriva un nivel de vida miserable y unas condiciones de trabajo insoportables, tendremos un panorama completo de la dura realidad boliviana.

La respuesta que se dió a Natusch, el ultimo general golpista, fue masiva en todo el país; se manifestó con fuerza, audacia, espontaneidad y sin ninguna vacilación. Las masas se han radicalizado: han discutido los problemas en los lugares de trabajo, en los barrios, en las comunidades campesinas, en las universidades, en la familia, en todas partes... Durante los dos últimos años, la radicalización y la conciencia política de las masas han aumentado de forma asombrosa.

• **¿Quién dirige el movimiento popular?**

— Es indiscutible que a la cabeza de las masas está la COB, que goza de la máxima autoridad. Esto se vio claramente en noviembre: fue la COB quien dirigió la movilización de las masas contra el golpe de Estado. Los partidos burgueses se mostraron totalmente impotentes. La Unión Democrática Popular (UDP), frente que incluye también al PCB (pro-soviético), no hizo ningún intento de movilización.

Al contrario, los grupos burgueses y reformistas negociaron con los golpistas, a espaldas del movimiento obrero. Por ejemplo, la Alianza MNRH (Movimiento Nacionalista Revolucionario Histórico), dirigida por Paz Estensoro y en cuyo seno se encuentran los maoístas del PC m-l, trató de llegar a un compromiso con los golpistas, Banzer y Natusch.

## El plan anticrisis de la COB

La situación actual empezó a despuntar el pasado mes de setiembre. Debido a la grave crisis económica, la COB elaboró un plan, a nivel nacional, para "sacar a Bolivia de la crisis económica", y que se centra en los siguientes ejes:

— el refuerzo de las empresas del Estado, nacionalizaciones con un sistema de cogestión y el control obrero colectivo;
— la expropiación de las "minas de importancia media", que en realidad son las grandes minas privadas;
— el monopolio del comercio exterior;
— una política agraria que integre la participación de los sindicatos obreros y campesinos de cara a la comercialización de los productos.

En noviembre, cuando se produjo el golpe de Estado, Natusch y los golpistas tomaron una serie de medidas: censura de prensa, "supresión del Parlamento", ley marcial, estado de sitio, etc. La Paz fue ocupada por los tanques y los carros de asalto, y por el cielo de la capital surcaban los aviones y helicópteros de la fuerza aérea. Todo ello desembocó en una masacre: más de 300 muertos, 200 desaparecidos y más de 400 heridos.

La movilización de las masas fue tan amplia, tan fuerte y tan general que los golpistas tuvieron que dar marcha atrás: habían calculado mal el golpe. Querían quebrantar el proceso democrático. Fracasaron.

En el ejército han aparecido fisuras. La



La respuesta al general golpista fue masiva en todo el país.



Los mineros, la vanguardia del proletariado boliviano.

burguesía, desorientada, no supo qué partido tomar.

Así, esta situación permitió, en su conjunto, el refuerzo de la COB. Este refuerzo se produjo gracias a la mayor participación de los partidos marxistas revolucionarios en el seno de la propia COB; este es el caso, por ejemplo, de Vanguardia Obrera, dirigida por Filemón Escobar, y de nuestro partido.

• **Has hablado de la COB y de la reacción de las masas obreras. ¿Qué sucedió en el campo, con el campesinado?**

— Creo que el comportamiento del campesinado demuestra que el proceso que se desarrolla en Bolivia es el fruto de un profundo ascenso revolucionario, más que de un simple fenómeno de apertura democrática.

Hemos presenciado una gran sed de unificación con la clase obrera, que se manifestó en sus formas más avanzadas con la aparición de la Confederación Unica de Campesinos de Bolivia, en la que participan todos los grupos y partidos campesinos. Esta confederación campesina forma parte de la COB, lo que les ha quitado a los partidos burgueses un margen de maniobra muy importante, y lo que constituye un paso importante en la lucha por la alianza obrero-campesina.

• **¿Cuáles fueron las consecuencias del golpe frustrado para la burguesía?**

— Se ha puesto en evidencia la debilidad política de la burguesía. El Parlamento, atacado por los propios partidos burgueses, es impotente, lo que le obliga a buscar el apoyo de la COB. Así, paradójicamente, son las masas las que apoyan la frágil democracia burguesa.

Las tentativas de golpe de Estado son evidentes. Actualmente se conocen distintas variantes. Salta a la vista que todos estos golpes se hacen a espaldas y por encima de las masas, sin ningún respeto por su movilización antigolpista y con el más profundo desprecio por su capacidad para ofrecer una alternativa independiente y socialista a la crisis.

• **¿Podrías citar algunos ejemplos concretos de esta descomposición de la burguesía?.**

— En Bolivia nada puede permanecer oculto. La efervescencia de las masas es tal que a la postre todo termina sabiéndose. Por ejemplo, la Confederación Nacional de Empresarios Privados envió una circular a todos sus afiliados solicitando fondos para financiar el golpe, con el fin de estabilizar la situación. No sabemos a qué corriente golpista estaban destinados estos fondos. Pero en definitiva, poco importa. Lo que importa es si el golpe se produjo o no.

Esta crisis política generalizada se refleja incluso en el seno del gobierno. Algunos ministros están involucrados en intentonas golpistas, a través del contrabando de armas, de la ocultación de armas, del contrabando de cocaína para recoger fondos, del reclutamiento de bandas paramilitares.

Los ministros y viceministros van ahora codo a codo con los grupos y partidos que según ellos tienen las mayores posibilidades de lograr el próximo golpe. En la calle se cuenta que el viceministro X tiene contactos con este u otro partido y que le presta ayuda en armas y en especie; que el viceministro Y hace negocios fraudulentos con los fondos del gobierno y que el general Z vende armas al ejército brasileño a mitad del precio que pagó por ellas el propio ejército boliviano.

La Paz, Cochabamba, Santa Cruz todas las ciudades bolivianas son el escenario de complots, de preparativos golpistas y de planes subversivos, emprendidos por la burguesía contra el gobierno. Vivimos en un clima de tensión permanente y todo el mundo sabe que los enfrentamientos decisivos están delante nuestro, no detrás.

• **¿Cómo se prepara la salida revolucionaria a la crisis?**

— Toda la política cotidiana se hace en función de las elecciones que tendrán lugar

el próximo 29 de junio.

En el seno de las masas se perfila ya una vasta corriente electoral independiente, que se expresa con fuerza a través de la COB. El PS (Uno), el que dirige Quiroga Santa Cruz, y el Partido Revolucionario de la Izquierda Nacional, dirigido por Juan Lechín, el presidente de la COB, se han pronunciado a favor de la constitución de un frente de izquierdas, aunque sin decir claramente cuál será el papel de la COB en dicho frente.

Para ello, en un documento conjunto (reproducido en este número de INPRECOR) firmado por el POR (Combate), el Movimiento de Liberación Nacional, el Partido Revolucionario de los Trabajadores de Bolivia y Vanguardia Comunista del POR, llamamos a la constitución de un frente alrededor de la COB, de los sindicatos y partidos obreros y de izquierda, con el fin de luchar por la liberación nacional y el socialismo. Hasta ahora, la actitud del PS (Uno) ha impedido que se forme este frente.

## Por candidaturas obreras y campesinas apoyadas por la COB

En el periodo actual, la función y el papel de la COB son claves. Constituye un polo de agrupamiento para las amplias masas que despiertan a la política. La COB impulsa la autoorganización de las masas, gracias a las perspectivas de independencia que puede ofrecerles. Podemos observar esto en los diversos movimientos de masas. Cabe destacar, al respecto, el Congreso de Mujeres Campesinas celebrado en La Paz, hace algunas semanas, y en el que participaron más de 5.000 personas, que se pronunciaron con entusiasmo a favor de candidaturas obreras y campesinas apoyadas por la COB.

En Bolivia, el peso de la clase obrera ha sido siempre un hecho cotidiano fundamental en la vida política. Pero en la crisis que se abrió en 1978, con la caída de Banzer, este peso ha aumentado cualitativamente. Nada puede hacerse sin el proletariado, y sólo éste puede sacar al país de la crisis.

Para que te hagas una idea de la importancia concreta de la COB, podemos citar el siguiente ejemplo: durante la visita del encargado de relaciones interamericanas del Departamento de Estado de los EE.UU., éste demostró que tenía una visión exacta de la geometría del poder imperante actualmente en Bolivia. Desde el aeropuerto se encaminó directamente a la sede de la COB, después se desplazó al Alto Mando militar y finalmente se presentó en el palacio presidencial, para reunirse con Lidia Gueiler.

• **¿Qué objetivos políticos generales persigue el movimiento revolucionario, más allá de las elecciones?**

— El resultado de las elecciones del 29 de junio no está asegurado, ni mucho menos. En este sentido, los sindicatos, al igual que los partidos obreros y de izquierda, han entablado negociaciones en relación a la estrategia a llevar a la práctica frente a un golpe militar y en torno a la posibilidad de avanzar en la consolidación de un instrumento unitario de dirección revolucionaria, que permita encontrar una solución revolucionaria a la crisis actual del capitalismo y del Estado burgués en Bolivia.

En los sindicatos y en los centros urbanos se desarrollan iniciativas con miras a formar comités de defensa, de resistencia, de vigilancia, en todos los centros obreros, contra la escalada terrorista de la derecha (durante el último mes ha habido innumerables atentados contra los locales sindicales, las radios y los periódicos independientes etc.). De hecho, esta iniciativa política de los partidos revolucionarios responde a un movimiento muy extendido en la base. Hay una comprensión que se generaliza: la de la necesidad de prepararse para un golpe. Vivimos en la perspectiva de una nueva ofensiva militar inminente.

De hecho, hay informaciones de que Natusch ha tenido que refrenar a sus partidarios, que querían realizar un golpe que él juzgaba "prematuro". Ante esta situación, lógicamente no podemos esperar a que las masas empiecen a organizarse, espontáneamente, en los barrios, en los sindicatos, en grupos militares y en comités de resistencia contra el golpe militar.

• **¿Cuál es la situación de la izquierda en Bolivia?**

— La situación política es muy favorable al refuerzo de las posiciones y de las organizaciones marxistas revolucionarias, y esto es lo que se produce hoy en día en Bolivia.

## La situación del movimiento trotskista

Los marxistas revolucionarios se han reforzado sensiblemente desde 1978, recuperándose de la difícil situación que han conocido durante más de siete años, bajo la dictadura de Banzer, la más dura, feroz y larga de toda la historia boliviana.

En particular se han reforzado dos organizaciones marxistas revolucionarias: Vanguardia Obrera, dirigida por el camarada Escobar, y el Partido Obrero Revolucionario (Combate), sección boliviana de la IV Internacional. Ambas organizaciones tienen buenas relaciones y nos planteamos un proceso de fusión en un futuro próximo.

En lo que se refiere a las demás organizaciones que se reclaman del trotskismo, podemos citar a Vanguardia Comunista del POR, y la Organización Socialista de los Trabajadores. En lo que se refiere a la primera se desarrolla ya un proceso de fusión con el POR (Combate). La OST, afiliada a la Fracción Bolchevique, ha conocido varias escisiones. Un sector importante se ha dirigido a Vanguardia Obrera.

La corriente maoísta, la corriente de izquierda más importante en 1978, agrupada principalmente en el PCm-l, ha sufrido escisiones constantes, frutos de su política frentista con la burguesía nacionalista. El PCB (pro-soviético) no se ha repuesto de la dura etapa de 1967-1971, cuando traicionó a la guerrilla del Che. Los maoístas han llegado a ser mucho más fuertes que el PCB durante el último decenio.

En Bolivia está gestándose una oportunidad histórica para el movimiento obrero y sus organizaciones revolucionarias. En la nueva situación abierta en América Latina con la revolución en Nicaragua y sus repercusiones directas en América Central, los acontecimientos de Bolivia se inscriben y refuerzan las perspectivas de un nuevo ascenso en América Latina, claramente determinadas esta vez por las masas trabajadoras de las ciudades, por el proletariado. ■



# Documento

**Publicamos a continuación el llamamiento publicado el 6 de marzo de 1980, por cuatro organizaciones de extrema izquierda boliviana: el POR (Combate) (Sección boliviana de la IV Internacional), el PRTS-ERP, la organización Vanguardia Comunista del POR y el MLN.**

*Los partidos abajo firmantes, conscientes de sus responsabilidades ante el pueblo y vigilantes frente a la crisis que sufre el país, declaran:*

*1. El proceso político generado por el ascenso del movimiento popular está a punto de sufrir un rápido deterioro, cuyas causas pueden detectarse, por un lado, en la incapacidad del gobierno para responder a las exigencias expresadas en las jornadas de noviembre, cuando se le planteó que garantizara las libertades reconquistadas tras dos años de luchas populares, y por otro lado, en la política conciliadora de los grupos socialdemócratas, que han desempeñado un papel de freno de las movilizaciones de masas y han contribuido a desorientar permanentemente a los trabajadores.*

*2. En el transcurso del último periodo, este deterioro había alcanzado un nivel tal que los grupos golpistas consideraron que ya no había lugar a dudas de que el terreno estaba listo para lanzarse a una nueva aventura. Jefes militares como García Mesa, Luis Arce y Vargas Salinas, a quienes se han unido los golpistas derrotados de noviembre, como Sandoval Morón, han aparecido como las cabezas visibles de un golpe de Estado al que no podía o no quería oponerse el gobierno.*

*Se les han unido otros dirigentes, partidarios de Paz Estenssoro, el PCm-l de Oscar Zamora, así como falangistas y banzeristas que operan ora fuera, ora dentro del Parlamento. En el seno de la UDP han aparecido asimismo otros golpistas, como el diputado Rubén Sánchez, que ha declarado que las fuerzas armadas tenían el derecho e incluso la obligación de intervenir en estos momentos si los juzgaban conveniente.*

*3. En circulos oficiales se consideraba que el golpe de Estado era inevitable. Este era el espíritu dominante en el seno del gobierno y del Parlamento y sus miembros se preparaban para la situación que iba a producirse. De este modo, la llamada representación popular que encarnaba el Congreso no daba solución alguna para hacer frente a la aventura fascista y garantizar de esta manera las libertades democráticas. Esta situación ha permitido que en el propio seno del gobierno y del parlamento aparezcan los golpistas, que organizaban y preparaban en ellos el golpe de Estado.*

*4. Pero estas condiciones no eran suficientes para los golpistas. Para ello tenían que provocar la división y la confusión en el seno del movimiento obrero y popular. Consciente o inconscientemente, algunos sectores se han prestado a dichas maniobras.*

*Esto es lo que se produjo durante la huelga dirigida por los enseñantes de La Paz, comprometidos en los preparativos golpistas, y que, en desacuerdo con su Confederación Nacional y desobedeciendo las consignas unitarias de la COB, provocaron la división en el seno de las masas y favorecieron los planes de los conspiradores.*

*Hubo también intentos de provocación por parte de los empresarios del transporte, que realizaron una huelga que ayudó a los proyectos de los golpistas, e intentos de utilizar los fondos regionales en beneficio de los grupos golpistas.*

*La conspiración de derechas se ha desarrollado en un contexto de escalada terrorista, con atentados destinados a sembrar el terror entre la población y la concentración de grupos paramilitares, principalmente en La Paz, donde hubo hasta 90 mercenarios con la misión de "suprimir" a los dirigentes políticos y sindicales.*

*5. El pueblo sabe que únicamente su propia movilización puede garantizar el proceso democrático que comenzó en enero de 1978, y que significa para él la defensa y el ejercicio de las libertades políticas y sindicales (derecho sindical, independencia de clase, unidad con los campesinos a través de la CSUTCB, autonomía universitaria, etc.).*

*No podemos engañarnos en cuanto a la realidad a que nos enfrentamos actualmente. La lucha por las reivindicaciones económicas, preocupación fundamental de los trabajadores, pasa necesariamente por la defensa de este proceso. Hay que decir, por tanto, que la prioridad del momento es la movilización del pueblo para hacer frente a la amenaza fascista y la preparación acelerada de las condiciones para rechazar la amenaza de la derecha. No podemos ocultar esta realidad, ni pretender que se puede seguir perorando sobre el proceso electoral, cada vez más improbable, sin garantizar previamente el ejercicio de los derechos populares.*

*6. La Central Obrera Boliviana, que ejerció la dirección política del pueblo durante la Semana Sangrienta, tiene obligaciones que se derivan de su responsabilidad.*

*En torno a ellas, las masas deben organizarse y movilizarse por la resistencia. Pero, por otro lado, es responsabilidad de los partidos populares y revolucionarios dar a las masas una dirección que prepare esta movilización, que asuma las necesidades de la organización y planifique la resistencia de los trabajadores y del pueblo en su conjunto. La unidad de las fuerzas políticas es la base de la resistencia. Los partidos populares y revolucionarios tienen la obligación de responder a este llamado histórico.*

*7. El pueblo no se hace ninguna ilusión en torno a la acción del gobierno, del Parlamento y de los frentes electorales. El frente que dirige la resistencia se organiza para preparar la resistencia. Para ellos hay que empezar, en el seno de las masas, a organizarse en Comités de Resistencia Antifascista, que en cada barrio, en cada fábrica, en todos los lugares de trabajo deben formar núcleos que se opondrán a las intentonas de los golpistas.*

*8. Por que los conspiradores no logren sus objetivos. Si la resistencia de noviembre, desorganizada y espontánea, puso freno a la aventura de Natusch y sus cómplices, ahora el pueblo organizado y preparado logrará hacer fracasar definitivamente al fascismo y avanzará hasta su propio objetivo histórico: la liberación nacional y la construcción del socialismo en Bolivia.*

*La Paz, 6 de marzo de 1980.* ■

Simbabue

# Tras la victoria electoral

**Resolución del Secretariado Unificado de la Cuarta Internacional.**

La aplastante victoria electoral de Robert Mugabe y de la Unión Nacional Africana de Simbabue (ZANU) es un gran paso adelante para el pueblo de Simbabue y un golpe serio contra el imperialismo y el régimen segregacionista de Africa del Sur.

Ian Smith, el dirigente de los colonos blancos, se había vanagloriado en repetidas ocasiones de que mientras él viviera, jamás se aplicaría la norma del "poder para la mayoría". Los medios de comunicación de la burguesía occidental desarrollaron una ofensiva ininterrumpida contra las guerrillas de Simbabue. Los políticos imperialistas habían declarado que los guerrilleros no eran sino "terroristas" sin ningún apoyo en la propia Simbabue.

El gobierno conservador británico esperaba que el resultado de las elecciones no fuera concluyente y que podría maniobrar con miras a colocar en el poder a Joshua N'Jomo, al frente de un gobierno de coalición. Las fuerzas de seguridad rodesianas hicieron todo lo posible por perturbar la campaña de la ZANU, mediante una combinación bien orquestada de difamaciones, terror e intimidación. Durante el período que precedió a las elecciones hubo:

— dos intentos de asesinato contra Robert Mugabe;
— una serie de ataques con cohetes y bombas incendiarias, contra las viviendas de los representantes de la ZANU y sus familias;
— la detención de 10.000 miembros y partidarios de la ZANU, que en algunos casos fueron maltratados por las fuerzas de seguridad blancas;
—la prohibición a la ZANU de desarrollar su campaña en una de las circunscripciones;
— dos atentados de bomba organizados por los tristemente célebres *Selous Scouts,* que trataron de achacarlos a la ZANU;
— la obstaculización del retorno de los refugiados, para impedir que pudieran votar.

Pese a todos estos obstáculos, los actos electorales de la ZANU constituyeron la movilización de las masas urbanas y rurales más grande que jamás se haya visto en la historia de Simbabue. Este proceso se reflejó incluso en los colegios electorales. Pese al terror racista, pese a la presencia provocadora de las tropas sudafricanas, estacionadas en Beir Bridge, pese a la violencia ciega de la banda de lamentables bandoleros del obispo Muzorewa (los "Auxiliares"), pese a la proclamación de la ley marcial por el ejército rodesiano blanco en algunas regiones del país, pese a la decisión del lord Soames de prorrogar el estado de emergencia, con todo lo que ello comporta, -censura, trabajos forzosos, toque de queda, derecho de detención y encarcelamiento sin proceso, miles de presos nacionalistas, etc.- y pese a los ataques incesantes de los medios de comunicación racista, los imperialistas y los colonos blancos han fracasado estrepitosamente.

Las masas de Simbabue se abalanzaron sobre los colegios electorales para aprovechar la primera ocasión que jamás han tenido para expresar su opinión sobre las organizaciones que desarrollaron sin tregua la lucha armada contra un régimen colonial odiado. La ZANU obtuvo más del 60% de los votos y la Unión del Pueblo Africano de Saimbabue (ZAPU), dirigida por N'Jomo, obtuvo el 24,1%. El conjunto de los votos obtenidos por estos partidos de la *chimurenga* (guerra de liberación) es del 87 %. Ganaron 77 escaños, de los 80 atribuidos a los negros.

La amplitud de la victoria electoral de la ZANU está directamente ligada al hecho de que esta ha sido el componente más combativo, mejor implantado y más intransigente de la guerra de liberación contra el régimen colonial blanco y sus aliados imperialistas.

Mugabe fue denunciado constantemente como un marxista que quería "implantar el comunismo" en Simbabue. Este era el plan ideológico de cada día impuesto a las masas por la máquina de propaganda rodesiana. Al votar a Mugabe, estas han demostrado que querían ir hasta el final. Las promesas de la ZANU despertaron sus esperanzas, y la propaganda racista de los colonos reforzó aún más su determinación. La victoria de la ZANU constituye a los ojos de las masas negras de toda Africa austral su propio triunfo.

Mientras que los amos blancos de Pretoria no lograban ocultar su ira y proferían amenazas de intervención militar inmediatamente después de las elecciones, las masas negras de Soweto expresaban su alegría y su entusiasmo. Así, el impacto de esta victoria se ha manifestado también más allá de las fronteras de Simbabue. Las guerrillas en la selva de Namibia celebraron la victoria de la ZANU como si fuera la suya.

Pero las movilizaciones y las exigencias de las masas negras de Simbabue, sobre todo de las que han sido despojadas de sus tierras por la ley de distribución de las tierras y otras disposiciones de los racistas blancos, constituyen la mayor amenaza para los intereses del imperialismo y de los colonos blancos en la región.

Al mismo tiempo hay que resaltar que pese a la vistoria electoral de la ZANU y su amplia resonancia entre las masas de toda Africa austral, en Simbabue las instituciones del Estado capitalista blanco siguen en buena medida intactas.

## La presión del imperialismo

Tras el hundimiento del imperio portugués en Angola y en Moçambique, en 1974-75, y tras el levantamiento de Soueto en Africa del Sur, el imperialismo tuvo que buscar rápidamente una solución que le permitiera preservar sus intereses globales en el conjunto de Africa austral.

La incapacidad de la minoría colonial blanca para inflingir una derrota militar decisiva a las fuerzas de liberación de Simbabue, y de hecho el refuerzo de la lucha armada durante los tres ultimos años, hacían aún más urgente la búsqueda de este tipo de solución para el imperialismo y sus aliados locales. Necesitaban una solución política que permitiera la formación de un régimen en el que el papel otorgado a los dirigentes del Frente Patriótico no implicará la puesta en tela de juicio de las posiciones económicas del imperialismo ni de los privilegios de los colonos blancos. La experiencia del gobierno del obispo Abel Muzorewa mostró el grado de precariedad de cualquier acuerdo que no incluyera a las fuerzas del Frente Patriótico. Se imponía una fórmula distinta.

La situación empezó a hacerse aún más difícil a medida que crecía la influencia del Frente Patriótico entre la población negra y se erosionaba la base del régimen Smith-Muzorewa. Por tanto, el imperialismo necesitaba la ayuda de los regímenes de los países vecinos, Zambia, Mozambique, Tanzania, Botswana y Angola, con miras a presionar sobre la dirección del Frente Patriótico.

El imperialismo británico y norteamericano y el régimen racista de Africa del Sur intensificaron significativamente sus presiones sobre estos estados, para que forzaran al Frente Patriótico a "entrar en razón". Utilizaron la profunda crisis económica que conocen estos países, y las considerables necesidades de algunos de ellos en materia de importación de bienes alimenticios para meterlos en vereda. El gobierno sudafricano fue particularmente hábil en la utilización de los lazos económicos que tiene con ellos. Sambia, por ejemplo, depende mucho de Pretoria en relación a las inversiones en las minas de cobre. Moçambique se beneficia de las exportaciones de Africa del Sur, que atraviesas su territorio en ferrocarril, en dirección al puerto de Beira, y exporta también una parte de su fuerza de trabajo a Africa del Sur. Además, en Moçambique se profundizaba la crisis social y política.

Encima, en ejército rodesiano lanzó mortíferas incursiones contra los territorios de estos estados, con el fin de intimidarlos, cada vez que se iniciaba una fase delicada en las negociaciones. Estos países constituían la retaguardia de los movimientos de liberación, un pivote para su abastecimiento y para el entrenamiento de sus tropas. Sus gobiernos podían influir por tanto de modo importante en la política de la ZANU y de la ZAPU. Presionando sobre estos gobiernos y apoyándose en ellos, las potencias imperialistas obtuvieron con mayor facilidad concesiones por parte de los movimientos nacionalistas, y en diciembre de 1979 lograron que se firmara un acuerdo que pocos meses antes aún rechazaban. Se trataba del acuerdo de Lancaster House (ver Inprecor nº 10).

La guerra civil en Rodesia era un abceso peligroso para el régimen sudafricano que intenta establecer lazos económicos más estrechos con los paises neocoloniales relativamente más estables de la región, así como crear nuevos mercados importantes y posibilidades de realizar inversiones para desarrollar su propia economía.

Intentar "pacificar" Africa austral es una necesidad capital para el imperialismo británico y norteamericano, que desean proteger sus intereses estratégicos y económicos en Africa del Sur. Esta última, y tambien los regímenes neocolonialistas, buscaban, por sus propios medios y en su propio interés, el final del conflicto en Rodesia. El imperialismo contaba con medios efectivos de presión, que podía ejercer tanto sobre las fuerzas patrióticas como sobre los colones blancos, con el fin de llegar al acuerdo de Lancaster House.

## Un acuerdo neocolonial impuesto a las masas

El documento firmado por el Frente Patriótico en Lancaster House es un acuerdo neocolonial impuesto a las masas de Simbabue. La misma transición implicaba que Gran Bretaña reasumiera el poder colonial y que formara un gobierno apoyado por 1.200 soldados del Commonwealth, en su mayoría británicos. Las fuerzas guerrilleras debian reunirse en determinadas zonas. Al disponer tan sólo de armamento ligero, podían ser una víctima fácil para la aviación rodesiana.

La constitución aceptada en Lancaster House conserva numerosos rasgos del "reglamento interno", tan violentamente rechazado en la época por los dirigentes nacionalistas.

El acuerdo de Lancaster House se sitúa muy por detrás de las consignas avanzadas desde hace años por las fuerzas del Frente Patriótico.

Esta constitución prevé reservar el 20% de los escaños en el Parlamento a los colonos blancos, mientras que sólo constituyen un poco más del 2% del total de votantes (200.000 sobre una población de alrededor de 7 millones). Mantiene también el ejército, la policía, la justicia y otros elementos del aparato estatal dominado por la minoría de colonos blancos; rechaza la reforma agraria para todo un periodo futuro.





A la izquierda, Robert Mugabe. A la derecha, de arriba abajo: Joshua Nkomo, Abel Muzorewa y Ndabaningi Sithole.

Hasta ahora, Mugabe se ha comprometido a aplicar estos acuerdos. Ha pedido al reaccionario general Walls, el comandante del ejército rodesiano que había dirigido la guerra contra la guerrilla, que permanezca en su puesto. Ha sido encargado de supervisar la formación de un "ejército nuevo" en Simbabue. Este debe estar integrado por las fuerzas blancos y los dos antiguos ejércitos guerrilleros. Las comisiones de vigilancia de los funcionarios que habían impedido que el gobierno Muzorewa pudiera tomar ninguna iniciativa autónoma, siguen funcionando.

Los pocos jueces separados de sus funciones son una cortina de humo que debe permitir que siga funcionando el aparato judicial racista.

El gobierno Mugabe, formado gracias al voto masivo a favor de la ZANU, se sitúa dentro del marco de los acuerdos neocoloniales. La mayoría de los miembros del gabinete, 14, son miembros de la ZANU, y 4 son miembros de la ZAPU. Dos ministros son representantes de los colonos blancos. Uno, Davit Smith, gran terrateniente y miembro del Frente Rodesiano, es ministro de Comercio e Industria. Ya formó parte de los gobiernos de Ian Smith y de Muzorewa. El otro es Denis Norman, ministro de Agricultura. Es también un gran terrateniente y en 1978 fue presidente de la Unión Nacional de Agricultores Rodesianos.

## ¿Aceptarán las masas este acuerdo?

El gobierno de Mugabe ha anunciado que la cuestión agraria se resolverá mediante la distribución de las tierras que han dejado de cultivar los propietarios blancos y mediante la organización de cooperativas. Sin embargo, según sus declaraciones actuales, los intereses fundamentales de los colonos blancos no se verán afectados. Los antiguos guerrilleros entrarán en las filas del ejército y de la policía, y para asegurar su integración se promoverá al rango de oficiales a numerosos antiguos cuadros intermedios de los ejércitos guerrilleros. Mugabe no muestra ninguna intención de poner en tela de juicio los intereses y las prerrogativas de las firmas británicas, norteamericanas o sudafricanas, que controlan cerca del 65% de las inversiones industriales.

Ha recordado que la aplicación de los acuerdos requiere una considerable ayuda financiera de los países imperialistas, que éstos están dispuestos a conceder. Ha subrayado la necesidad de un entendimiento económico con su poderoso vecinos sudafricano, por estas mismas razones.

Los proyectos del imperialismo están claros: tratar de establecer rápidamente un Estado neocolonial, apoyado en una alianza especifica a nivel político y socioeconómico entre las direcciones de los movimientos nacionalistas y los colonos blancos, bajo la "protección" del imperialismo.

Hay un factor que puede trastocar todos

estos planes: un fuerte ascenso del movimiento de masas. Estas consideran que el acceso al poder de Mugabe es su victoria. Fue la lucha armada la que impuso unas elecciones a los blancos racistas, y la que condujo al Parlamento a una mayoría negra. Las reivindicaciones del sufragio universal y de la igualdad de derechos fue un poderoso estímulo de la movilización de los campesinos y de los trabajadores de Simbabue. Mientras permanezcan los numerosos aspectos de la opresión nacional, las reivindicaciones democráticas, sociales y económicas desencadenarán nuevas luchas.

Uno de los problemas más acuciantes es el de la tierra. El 84% de la población negra vive en el campo, pero la minúscula capa blanca posee la mitad de las mejores tierras. Esta distribución desigual provocó un exceso de población en las "reservas de tierras tribales", donde los negros se ven condenados a una agricultura de subsistencia.

La consecuencia de esto es un sistema de fuerza de trabajo migratoria, parecida a la que existe en Africa del Sur, donde la gente se ve obligada a trabajar durante una parte del año, en las minas, las haciendas, las fábricas y las casas de los blancos. Entre el 60 y el 75% de las familias negras dependen, para su subsistencia, de alguna forma de trabajo asalariado.

El campo, y en particular las "reservas de tierras tribales", fue devastado por las fuerzas de seguridad racistas. Los programas de sanidad y educación se redujeron a la nada. Según la Cruz Roja, el 20% de la población padece desnutrición.

Hay 750.000 "personas desplazadas" que viven en miserables chabolas y en las fronteras hay aún 175.000 refugiados. A esto hay que añadir cerca de 225.000 personas que viven en las pretendidas aldeas "protegidas" y que quisieran volver a su región.

Se estima que se necesitarán 100 millones de dólares para que las "reservas" vuelvan a funcionar.

Millares de semiproletarios se concentran en los centros urbanos donde el paro y el subempleo constituyen problemas graves. Además existe una gigantesca discriminación en el nivel de los salarios, las pretaciones a la Seguridad Social y la educación.

Todas estas condiciones sociales y económicas que sufren los negros en Simbabue crean una situación muy explosiva, y no pueden sino estimular la puesta en tela de juicio del contenido de los acuerdos.

En las fábricas de las principales ciudades ya se han producido huelgas, incluso en la principal mina de oro (Dalny), por parte de los obreros negros. La respuesta de los patronos fue la previsible: despidieron inmediatamente a gran número de trabajadores.

La respuesta de Mugabe fue la de afirmar que los obreros deberían utilizar los procedimientos legales —los que creó Smith— para avanzar sus reivindicaciones, y que toda "acción ilegal" sería fuertemente reprimida. Por tanto, también a nivel social aparecerán fisuras en el acuerdo de Lancaster House.

## Una inestabilidad prolongada

El contenido neocolonial del acuerdo de Lancaster House y los primeros pasos del gobierno Mugabe están aún lejos de ser suficientes para satisfacer totalmente las necesidades de los imperialistas. Las contradicciones sociales y políticas siguen siendo agudas, y la inestabilidad se perpetúa en toda la región.

Pretoria tendrá problemas en sus intentos de desviar a las masas negras que sufren la segregación en Africa del Sur, del irresistible atractivo de la regla del "poder para la mayoría" y de la igualdad política completa. En particular, a partir de ahora redoblará la resistencia que opone a la lucha por la independencia en la Namibia ocupada.

Las potencias imperialistas, el régimen racista de Africa del Sur y los colonos blancos de Simbabue utilizarán todos los medios para defender sus intereses económicos y sus privilegios. Esperan que Mugabe se enfrentará con firmeza a las luchas de los obreros y campesinos, y no vacilará en recurrir al chantaje económico y tomar medidas de intimidación para obligarlo a ello. Especialmente los capitalistas de Africa del Sur profieren amenazas de intervención militar y buscarán en todo momento una ocasión para intervenir.

La lucha para obtener la verdadera independencia de Simbabue se centra en torno a los siguientes objetivos: reforma agraria radical, derechos democráticos sin restricción ni discriminación, desmantelamiento de la administración colonial, del ejército y de la policía heredada del Estado colonial, y expropiación de las empresas extranjeras.

Muchos dirigentes nacionalistas, que hoy en día son ministros en el gobierno de coalición, tratarán de subordinar las organizaciones de masas al gobierno. De ahí que la formación de sindicatos y organizaciones de campesinos negros, independientes del Estado, sea muy importante.

La perspectiva de la organización política independiente de las masas trabajadoras es un factor imprescindible.

Además, la amenaza de los ataques terroristas de los colonos blancos y del gobierno surafricano plantea la cuestión acuciante del armamento de las masas y de sus organizaciones.

## Reforzar la solidaridad

De cara a las luchas del futuro, el peso principal de la solidaridad recae sobre la clase obrera de los países imperialistas, sobre todo en Gran Bretaña y los Estados Unidos, países que tienen cuantiosos intereses en la región.

El movimiento obrero debe organizar la solidaridad frente a las maniobras del imperialismo en la región, incluida Namibia. Debemos defender al gobierno de Mugabe contra todos los complots y maniobras reaccionarios.

Pero al mismo tiempo, nos comprometemos a apoyar y a ayudar a los obreros y campesinos, en su intento de crear organizaciones de masas independientes.

Desarrollaremos esta campaña de solidaridad con las siguientes consignas:

— Por el fin de la ocupación de Namibia por Africa del Sur.
— Defensa de la revolución en Simbabue.
— Fuera los EE.UU., Gran Bretaña y Africa del Sur de Simbabue.

# Los nuestros: Ben kies ha muerto

**El pasado 19 de diciembre, Ben M. Kies, que luchó durante más de cuarenta años contra el régimen racista de Africa del Sur, murió en Ciudad de El Cabo, a la edad de 62 años.**

**Hijo de una familia obrera, y clasificado como "persona de color" (es decir, mulato), Ben Kies entró a los 20 años a formar parte del movimiento trotskista en Africa del Sur. La represión de que fue objeto el Partido Obrero de Africa del Sur también se abatió sobre este camarada, a finales de la segunda guerra mundial. En 1956 se le prohibió seguir ejerciendo la enseñanza. Durante estos últimos años, además de su actividad política en la oposición al régimen *apartheid*, ejercía como abogado, defendiendo a las víctimas de la represión política.**

**El camarada Kies murió precisamente durante un proceso, en el que defendía a cuatro militantes acusados de delitos contemplados en la brutal ley "antiterrorista" que promulgó el régimen hace poco.**

**la muerte de Kies no ha pasado desapercibida en la prensa sudafricana. El diario liberal *Cap Times* del 20 de diciembre lo describe como *"un hombre de voluntad y un intelectual notable"*, que fue *"el defensor infatigable de los pobres y de los débiles..."*.**

**Su desaparición será muy resentida por todos los que luchamos contra el régimen racista de Africa del Sur.**

# Quedan once piezas en el tablero.

Claude Gabriel

Existen actualmente en Chad once tendencias político-militares que se disputan el poder. La mayoría de ellas son fruto del estallido del Frente de Liberación Nacional del Chad (FROLINAT).

Al principio, este movimiento, cuya implantación se centraba básicamente entre las poblaciones árabes del Norte, parecía materializar de momento un movimiento de masas opuesto al régimen dictatorial de Tombalbaye, fantoche de Francia, cuyo régimen defendía exclusivamente los intereses de los notables negros del sur. Pero numerosos factores han contribuído a limitar las pretensiones de aquel FROLINAT a convertirse en un auténtico movimiento de liberación nacional, con el apoyo de toda la población del Chad (árabe y negra) y con un programa alternativo al brutal neocolonismo de la camarilla en el poder. En efecto, el FROLINAT abrió primero sus puertas a políticos como Abba Siddick, que había sido ministro bajo Tombalbaye, después a Hissène Fabré, que había sido prefecto del mismo régimen. Optando, por otro lado, por la lucha armada en una zona desértica y montañosa, el FROLINAT despreciaba de este modo a las poblaciones del sur, y más particularmente a las de la capital, Fort Lamy (actualmente Djamena), limitando así sus capacidades militares a los medios logísticos de su retaguardia, particularmente en Libia.

Hoy en día sería inútil querer encontrar, entre todas estas camarillas que se enfrentan, divergencias pragmáticas, planteamientos políticos antagónicos a largo plazo.

La carrera hacia el poder es un fin en sí y ninguno de los líderes intenta justificarse mediante programa alguno. El "debate" se realiza a golpe de operaciones militares, para tratar de ocupar un poco más de terreno y poder utilizarlo en la negociación, en la próxima "conferencia".

Por tanto, en modo alguno puede hablarse, en el conflicto actual, de una lucha en que algunos combatirían por la liberación nacional. Por supuesto, el caos actual es consecuencia, parcialmente, de la complejidad de las divisiones regionales y étnicas del país, en que cada dirigente pretende ser el amo "en su terreno". Pero sería erróneo pensar que detrás de estas fuerzas político-militares se colocan resueltamente las poblaciones en búsqueda de su autodeterminación. El país está a sangre y fuego, y los chadianos buscan por millares refugio en el extranjero. El último intento del gobierno, de componer un régimen con las once tendencias, ha sido un fracaso. Para la masa de la población, ya nada puede justificar la esperanza y el apoyo a esta multitud de ministros.

## El imperialismo francés al acecho

Hubo por tanto una última conferencia y un último intento. Esta vez se quiso meter a los once en el mismo gobierno. Nadie se lo creía realmente. La capital no fue desmilitarizada. Cada uno campaba por sus respetos, preparando a sus tropas para el próximo enfrentamiento.

Tres países eran los "patrocinadores" naturales y disponibles. En primer lugar, Francia, siempre presente desde la época colonial, dio su apoyo militar de los regímenes de Tombalbaye y de Malum desde 1969, fecha en la que De Gaulle decidió terminar con el Frolinat. Nigeria, poderoso vecino interesado en extender su influencia económica en el Sur del Chad. Finalmente, Libia, que desde hace algunos años ocupa ya una zona en el norte, de la que las malas lenguas afirman que es rica en diversos minerales. Pero estos tres países han sido muy versátiles en sus amistades durante los últimos años. Las alianzas se hacían y deshacían a un ritmo tal que ya nadie es capaz de saber cómo serán mañana.

En el momento actual es posible avanzar una hipótesis prudente sobre el nuevo conflicto. Parece que después del ataque a Gafsa (Túnez), Libia y Francia han decidido que en el Chad hay que llegar a alguna conclusión. París no puede apoyar abiertamente a una fracción cualquiera y las fuerzas francesas presentes en el país se limitan oficialmene a ser "neutrales" y a cuidar a los heridos.

Pero puede que Hissène Habré, que actualmente se opone a todas las demás fracciones, obtenga el apoyo de Egipto. Puesto que en la coalición contraria se encuentra la fracción pro-Libia de Acyl Ahmat y las fuerzas armadas del Sur, de Kamunqué, más bien inspiradas por Nigeria, se perfila así una nueva línea divisoria, cuyas razones



primarias son los apetitos del imperialismo y los de los regímenes reaccionarios vecinos.

Tradicionalmente se consideraba al Chad del Sur como el "Chad útil". Pero desde hace algunos años se sabe que toda la zona norte encierra una gran cantidad de minerales (uranio, casiterita, wolframio, bauxita, hierro, oro y petróleo). Por tanto, ya no es únicamente cuestión de imponerse en el sur. Hay que establecer en Djamena un régimen neocolonial capaz de promover una reorganización del conjunto del país.

En estas condiciones, la auténtica base de las once tendencias existentes son los distintos apoyos extranjeros que se disputan las riquezas de este país, así como su papel estratégico en el corazón de Africa. Detrás de los centenares de pobres diablos que envían a la masacre en un conflicto fraticida, se encuentra, más allá de los politicastros pequeño-burgueses que los manipulan, los apetitos imperialistas.

Si Hissène Fabré y sus "fuerzas armadas del norte" gozan actualmente del apoyo de Francia, esto no puede significar que el adversario merezca más interés. En efecto, curioso es ese nacionalismo de Goukouni, principal fuerza de la coalición anti-Habré. Tras diez años de enfrentamiento con las fuerzas francesas, en los que habían perecido centenares de jóvenes chadianos, ¿acaso no había reclamado que estas fuerzas permanezcan en el Chad para ayudar a la cohesión del nuevo régimen?.

Actualmente, mientras que París organiza su política imperialista a través de un intermediario (sin duda, el gobierno de El Cairo), el ejército francés se desvive por acoger en el Camerún a los millares de refugiados. De este modo se prepara el futuro. Millares de hombres hacinados en los campos, al otro lado del río Chari, a pocos centenares de metros de la capital chadiana, podrían servir en el día de mañana como nueva "arma" para marcar algunos tantos en esta macabra partida.

Mucha gente se interesa actualmente por el caso del Chad. ¿Es viable un estado de este tipo?. ¿No hay que optar por el federalismo?. Bonito asunto. La primera cosa que hay que hacer es extraer el balance del colonialismo francés, del que el Chad es una creación artificial. El embrollo nacional de este país es fruto de la balcanización imperialista. ¿Cómo pueden resolver el problema del Chad unos políticos que son todos marionetas de Estados burgueses, cuya ideología es la del brutal centralismo de todas sus capas pequeño-burguesas?

Los señores más lúcidos de las cancillerias desearían una solución federalista, conservando evidentemente el carácter neocolonial y burgués del Estado, y negando todo derecho democrático a las masas. En estas condiciones, están lejos de llegar al final de sus preocupaciones.

Pero mientras tanto, los campesinos chadianos mueren. Mueren para que Giscard D'Estaing pueda hablarnos del papel cada vez más histórico de Francia en Africa. Una vez más, es la lucha contra el imperialismo la que está a la orden del día. Después del Zaire, de Africa Central, el Chad es una plaga adicional que el movimiento obrero francés deja supurar sin reaccionar, sin exigir ni siquiera que las tropas francesas abandonen el Chad y todo el continente. ■

## Las once fracciones

- **Fuerzas Armadas Populares** (FAP) de Gukuni presentes en la capital, jefes de fila de la coalición anti-Habré, implantadas fundamentalmente en el centro-norte del país;
- **Fuerzas Armadas del Norte** (FAN), de Hissène Habré, ocupan el Este del país, están muy bien estructuradas en la capital;

**Fuerzas Armadas chadianas** (FAT), de Kamungué. Son el resto del antiguo régimen militar, y están implantadas en el sur;

- **Fuerzas Armadas Occidentales** (FAO), Escisión del Movimiento Popular de Liberación del Chad, dirigidas por Moussa Mahamat;

Estas 4 fracciones participaron en el gobierno formado en abril de 1979. Tras el acuerdo de agosto de 1979, otras seis tendencias se les han unido:

- **Primer Ejército Volcán** de Zbdoulaye Dana, escisión del Frolinat, próximo al gobierno del Sudán; presente en el Nordeste, cerca de la frontera sudanesa;
- **Consejo Democrático Revolucionario** (ó Volcán Nuevo) dirigido por Acyl Ahmat, considerado como el hombre de los libios. Presente en el extremo norte y el sudeste;
- **Movimiento Popular por la Liberación del Chad** (MPLT), de Abdelranmah, curioso movimiento implantado en las pequeñas islas del lago Chad. Se considera que es apoyado por Nigeria.
- **Frolinat** "original", de Abba Siddick. Grupúsculo sin existencia real;
- **FROLINAT** "fundamental", de Hadjera Senoussi. Idem.

Estas seis tendencias habían formado un **Frente de Acción Común** (FAC) que se rompió en Noviembre de 1979.

- Finalmente la onceava: la **Unión Nacional Democrática** (UND), de fatcho Balam, cuya realidad, aparte dicho personaje, es un secreto para todo el mundo.



**Tras el estallido del FROLINAT, once tendencias político-militares se disputan el poder. En la foto, guerrilleros del FROLINAT.**

India

# El retorno al poder de Indira Gandhi.

Pierre Rousset

DESDE hace más de 10 años, en la India la democracia parlamentaria burguesa está sometida a tensiones crecientes. Esta inestabilidad política de la democracia burguesa se debe a la constante erosión de las bases tanto materiales como políticas del poder de la burguesía india.

Por un lado, el Partido del Congreso, que había acumulado un enorme prestigio a los ojos de las masas, gracias al papel dirigente que había desempañado en la lucha por la independencia nacional —y a la traición de esta lucha por los estalinistas en 1942—, vio cómo su credibilidad se erosionaba lentamente durante 25 años de ejercicio del poder. La muerte del dirigente carismático contribuyó a ello, sin duda, desde finales de los años 60. Sin embargo, esta erosión expresaba fundamentalmente el fracaso del Partido del Congreso, que no supo resolver los problemas fundamentales de las masas: la miseria, el subempleo masivo en el campo, la sobreexplotación de los trabajadores sin tierra y del semiproletariado de las ciudades, las hambrunas periódicas, como la de 1966, que provocó una situación semi-insurreccional en Bengala occidental.

Por otro lado, la recesión económica de finales de los años 60 y las consecuencias financieras de la última guerra entre la India y Pakistán, provocaron una intensificación de la lucha de clases, que desembocó en la huelga de los ferroviarios en 1975 y en las explosivas luchas de masas en Gujarat y en Bihar. Además, esta situación se vio agravada por las consecuencias que tuvo en la economía india la recesión mundial de 1974.

Todo ello precipitó la democracia burguesa, que ya se tambaleaba, a una crisis aguda, a la que el régimen de Indira Gandhi respondió mediante la proclamación del Estado de Excepción, mediante la represión brutal de las luchas de masas y mediante la detención de numerosos militantes del movimiento obrero y políticos de la oposición burguesa.

En marzo de 1977, las elecciones generales sancionaron la derrota del régimen de Indira Gandhi, que había impuesto el Estado de Excepción.

En el período posterior a 1977, la evolución política en la India vino marcada por una lucha permanente por el poder entre la burguesía industrial y la burguesía agraria, en el seno de la coalición burguesa que se había formado con la creación del partido Janata.

Este partido era un conglomerado incoherente de la antigua derecha burguesa tradicional, centrada en torno al partido racista hinduísta *Jan Sang*, de sectores del Partido del Congreso que se habían escindido junto con el viejo político Morarji Desai, representantes de la nuebva burguesía rural, estimulada por la "revolución verde", defensores pequeñoburgueses y burgueses de los "derechos humanos" atacados por Indira Gandhi, pedazos de la socialdemocracia en torno al dirigente de los ferroviarios Georges Fernández. Incluso contó con el apoyo electoral del Partido Comunista (Marxista), la más fuerte de las dos formaciones de origen stalinista que existen en la India (inicialmente prochina, actualmente cercana a las posiciones "eurocomunistas").

Esta coalición no supo resistir mucho tiempo a la prueba del poder. Su descomposición sancionó el fracaso del proyecto burgués de instaurar un sistema bipartidista viable. De ahí se derivó una creciente pérdida de autoridad del gobierno central y la atomización progresiva de las fuerzas políticas burguesas.

Otras características del período posterior a 1977: el nuevo ascenso de la lucha de clases y de las masas, el descenso de la tasa de crecimiento de la producción industrial y la voluntad de dominación cada vez más abierta por parte de la burguesía agraria. Todos estos elementos desembocaron finalmente en una crisis del poder político en la India.

El período intermedio 1977-1979 se caracterizó asimismo por la ausencia de una alternativa proletaria, independiente, de masas, implantada a nivel nacional.

### Las consecuencias de las elecciones de enero de 1980

Las elecciones parlamentarias de enero de 1980 modificaron radicalmente la situación política. El partido Janata se hundió; el Partido del Congreso de Indira Gandhi se alzó con una victoria aplastante, obteniendo dos tercios de los escaños en la Cámara Baja.

El resto de los escaños se reparte entre formaciones regionales y personalidades independientes. Entre los diputados del Janata hay algunos socialdemócratas. El *Lod Dal* es el partido de la burguesía rural acomodada; en su origen es una escisión del Partido del Congreso.

De los resultados electorales (véase el Cuadro) se desprenden 3 factores fundamentales. En primer lugar, el Partido del Congreso de Indira Gandhi apareció como el único partido tras el que podía agruparse la burguesía india. Ha sustituido a la frágil coalición que era el partido Janata, que trataba de defender al mismo tiempo los intereses de la burguesía y de la pequeña burguesía, del sector industrial y del sector agrario. Una vez más, es el capital industrial el que se ha hecho con el poder político, lo que ilustra de nuevo la tesis marxista sobre el predominio del modo de producción capitalista en la India.

Contrariamente a un mito propagado por la burocrácia soviética y muchos PC pro-Moscú —empezando por el de la India y su jefe, Dange—, este capital industrial es claramente un capital monopolista. Según Ajis Roy *(Political and Economic Weekly*, 5 de enero de 1980), los bienes de los 20 principales grupos monopolistas privados aumentaron en casi un 40 % entre 1974 y 1977, de 37 a 51.000 millones de rupias.

En la medida en que la burguesía rural ha logrado organizarse para defender sus intereses particulares a nivel político, a través de un partido, *Lok Dal*, esto constituía un desafío al gran capital. Sin embargo, la burguesía industrial ha respondido con éxito a este desafío. En estos momentos, los resultados de las elecciones comprometen incluso su existencia política independiente a nivel nacional.

En segundo lugar, la ausencia de alternativas socialistas claras a las distintas variantes de la política burguesa ha ayudado enormemente a la burguesía a estabilizar su predominio político a nivel nacional.

Los dos principales partidos obreros, el

PC (M) y el PC (pro-Moscú), vienen aplicando desde hace años una política de colaboración de clases sistemática e institucionalizada con distintas fracciones de la burguesía. El PC (pro-Moscú) apoyó sin reservas el Estado de Excepción de Indira Gandhi, e incluso lo apoyó durante la campaña electoral de 1977. Con su oportunismo acostumbrado hizo después su autocrítica al respecto... tras el desastre electoral que sufrió Indira Gandhi en 1977.

A su vez, el PC (M) apoyó a fondo la coalición de partido Janata en las elecciones de 1977, y le concedió también su apoyo (aunque fuera crítico) durante 1979-1980. Además, en tres Estados dirige unos gobiernos de coalición con partidos obreros centristas y partidos burgueses, incluidas formaciones reaccionarias como la Liga Musulmana. Estos gobiernos mantienen las estructuras capitalistas en dichos Estados, con todo lo que ello implica para las masas.

Los partidos de izquierda presentaron en las elecciones el proyecto de crear un bloque interclasista, denominado Frente Democrático de Izquierda. Este no apareció como una alternativa creíble a nivel nacional, frente a las propuestas de la burguesía. Así, no han ampliado su base ni su audiencia más allá de sus bastiones tradicionales. Tampoco el PC (M) ha aparecido como partido representativo a nivel nacional. Los intentos de acercamiento de los dos PC reflejan sin duda la voluntad unitaria de la clase obrera. Pero sus políticas siguen viniendo determinadas por la colaboración de clases.

Así, debido a la ausencia total de una alternativa global, la burguesía ha logrado reabsorber su crisis de dominación política. En una situación económica que se degradaba rápidamente y que frisaba la catástrofe, la burguesía ha logrado de nuevo burlar las esperanzas de las masas, instaurando un gobierno central fuerte y estable. La opción por este tipo de gobierno, por parte de la burguesía, que en el período actual constituye la principal condición del desarrollo del mercado interior en un país tan vasto y diversificado como es la India, con su estructura federal —condición tanto más necesaria, cuanto que el partido Janata no supo cumplirla— coincidió con las esperanzas difusas de los electores en una mejora de su nivel de vida, lo que se ha traducido en un cambio de los esquemas tradicionales de su comportamiento.

El tercer aspecto del resultado electoral es el fracaso total de la coalición Janata-Lok Dal, su incapacidad para atraerse lo fundamental del voto rural tras los candidatos pretendidamente campesinos. Este fracaso refleja la creciente diferenciación en el seno de la aldea india, entre una burguesía rural cada vez más rica, por un lado, y unas masas de campesinos (trabajadores rurales) sin tierra, por otro.

Este fracaso es particularmente chocante a la luz del intento de Jagjivan Ram, de origen "paria", de movilizar los votos de decenas de millones de parias a favor del partido Janata, del que apareció como uno de los principales dirigentes, incluso como candidato a primer ministro. La idea de que una solidaridad de casta pasa por encima de la diferenciación de clases se ha revelado, por tanto, ilusoria.

Es cierto que la inmensa mayoría de los "intocables" son trabajadores sin tierra en el campo y semiproletarios marginados en las ciudades. Pero el propio Jagjivan Ram es un multimillonario que desempeñó un papel dirigente en un gobierno que no mejoró en nada la suerte de los pobres. Estos empiezan a tomar conciencia de sus propios intereses de clase. Se han comprometido en un número creciente de luchas directas, son víctimas de un número creciente de acciones represivas sangrientas desencadenadas por los campesinos ricos. En estas condiciones, se han negado masivamente a prestar su apoyo a los candidatos Janata-Lok Dal, que identificaban con su enemigo de clase inmediato.

Esto marca una importante etapa de la toma de conciencia política de los trabajadores sin tierra, los aliados naturales de la clase obrera y del movimiento obrero, problema al que los marxistas revolucionarios deberían prestar mayor atención.

Las elecciones generales de 1980 han mostrado también el fracaso total de las políticas aplicadas por los distintos partidos de izquierda en la lucha contra el autoritarismo. Sus políticas de apoyo a determinados sectores de explotadores, en particular la del PC (M), que desde el pasado mes de julio apoya al Lok Dal —en oposición a una política de movilización independiente de las masas, organizadas democráticamente y bajo la dirección del proletariado—, ayudó a Indira Gandhi, su principal enemigo en la lucha contra el autoritarismo, a reforzar sus posiciones y a tomar el poder.

Como subraya el manifiesto electoral de la Liga Comunista (LC), sección india de la IV Internacional, el autoritarismo es un producto del sistema capitalista en un país atrasado como es la India. Como demostró la LC en sus diferentes resoluciones y declaraciones durante el período 1977-1979, el régimen del Janata era también un régimen represivo. La LC había insistido particularmente en los factores socioecónomicos internos que llevaron al régimen Janata-Lok Dal a tomar medidas represivas. La LC ha subrayado siempre que era un error confundir el autoritarismo con un individuo, un grupo o un partido. El autoritarismo, el peligro de instaurar un Estado fuerte, no puede combatirse sino con la movilización de masas y la independencia política del proletariado.


Indira Gandhi es conocida por su intransigencia frente a las luchas obreras.

## Resultados de las elecciones de Enero de 1980

| | |
|---|---|
| Escaños a repartir | 525 |
| Partido del Congreso | 351 |
| Partido Janata | 31 |
| Lok Dal | 41 |
| PC (Marxista) | 35 |
| PCI (Pro Moscú) | 11 |
| RSP | 4 |
| Forward Bloc | 3 |
| DMK (partido regionalista) | 16 |

El RSP y el Forward Bloc son aliados centristas del PC (M) en el gobierno de Bengala Occidental.

### La situación después de las elecciones: amenazas de represión

Las elecciones de enero de 1980 no han significado ni un cambio social ni un cambio político fundamental. El gobierno de Indira Gandhi es un gobierno burgués cuyo objetivo es el de gestionar el aparato de

Estado capitalista, estabilizar y reforzar la economía capitalista en la India, en un momento en que se enfrenta con dificultades estructurales y debe encarar los efectos de la crisis internacional de la economía capitalista, la inflación y la recesión.

Indira Gandhi ha vuelto al poder en un momento en que los factores económicos y políticos que la llevaron a proclamar el Estado de Excepción, en julio de 1975, revisten ahora mayor importancia.

La economía india se ve cada vez más afectada por el alza de los precios de las materias primas y de los bienes de primera necesidad. El déficit presupuestario asciende a más de 30.000 millones de rupias. La tasa de crecimiento industrial es negativa. La masa de inversiones en el sector privado tiende a disminuir. Las exportaciones descendieron tanto a causa de la competencia como de las tendencias inflacionistas y recesionistas de la economía mundial. La inflación y, por consiguiente, el descenso del poder adquisitivo de las masas, la amenaza de una nueva recesión, superan a los economistas y a los responsables políticos. A corto plazo no puede plantearse ni siquiera una solución a las deficiencias de infraestructura que se manifiestan en la penuria de energía, de carbón, en la escasez de medios de transporte, etc.

En estas circunstancias, y frente a las esperanzas y la combatividad de los electores, que se manifestaron en su condena del régimen Janata tras poco meses de ejercicio del poder, le queda poco margen de maniobra a un gobierno que quisiera tomar medidas draconianas para hacer frente con eficacia a las necesidades elementales del pueblo y a su voluntad de obtener una mejora, aunque modesta, de sus condiciones de vida.

Por tanto, es inevitable que aumente el descontento popular; y para frenar sus manifestaciones se necesitará el autoritarismo. Porque al mismo tiempo las reacciones y las declaraciones de los grandes industriales y de sus organizaciones señalan claramente lo que espera la burguesía de Indira Gandhi.

La burguesía trata de obtener la suspensión total de las huelgas. Trata de condicionar las primas y los aumentos de salarios al incremento de la productividad Exige y multiplica las presiones para obtener una rápida reorientación de la política de los sindicatos. Incluso ha propuesto y publicado sus proyectos en este sentido. La mayoría de los dirigentes se habían pronuncial o por su retorno al poder. Espresar su confianza en Indira Gandhi, y le aseguraron su apoyo en sus esfuerzos por volver a poner en marcha la economía capitalista tambaleante. Piensan que existen posibilidades de un relanzamiento rápido del crecimiento industrial y de un aumento notable de las inversiones.

Indira Gandhi es conocida por su firmeza frente a las luchas obreras. En la situación económica actual y con el fin de mantener el nivel de producción. Es probable que tome medidas draconianas y trate de atacar los derechos sindicales de los trabajadores. En los círculos interesados se habla ya de prohibir la desaceleración de los ritmos, los *gheraos* (secuestro de los directores de fábrica en empresas ocupadas por los trabajadores), autorizar los despidos y la supresión de puestos de trabajo. Desarrollando sus actividades sindicales habituales y defendiendo sus derechos democráticos, los trabajadores avanzarán probablemente hacia un enfrentamiento amplio con el régimen.

Los marxistas revolucionarios y la vanguardia obrera deben prepararse para estas luchas. Hay que oponerse a cualquier intento de vincular las primas y los aumentos de salario a la productividad, rechazar cualquier medida tendente a aumentar la producción mediante la aceleración de los ritmos y la racionalización. Hay que impulsar luchas contra la suspensión o la prohibición de las huelgas. Hay que cerrar filas y constituir un frente único de todas las organizaciones, grupos o individuos de la clase obrera, para luchar en torno a estas cuestiones. Hay que oponerse a toda tentativa de bloqueo de salarios, cualquiera que sea su forma.

La LC ha lanzado un llamamiento a todos los partidos de izquierda para que constituyan un frente único de combate en torno a estas cuestiones, con miras a ofrecer resistencia a los ataques inminentes de la burguesía contra el movimiento obrero indio y contra las libertades democráticas.

En el momento actual, el gobierno central ya ha empezado a disolver algunas asambleas regionales elegidas y gobiernos locales que no están en poder del Partido del Congreso. Pero esto no es todo. Los dirigentes de la juventud del Partido del Congreso han amenazado incluso con derribar el gobierno de Bengala Occidental. Más precisamente, los rumores en torno a un derrocamiento de este gobierno, dirigido por el PC (M), constituía una grave amenaza para el futuro, pues el PC (M) no sólo obtuvo una mayoría de escaños en el parlamento local, en las elecciones de enero, sino que además aumentó considerablemente sus resultados a nivel nacional. Por consiguiente, en estos momentos es muy probable que el ataque contra las libertades democráticas se traduzca en la disolución forzada de los gobiernos locales de este tipo.

Aunque la LC no le haya prestado jamás su confianza ni su apoyo, pues son gobiernos capitalistas, se opone a estas disoluciones, derrocamientos o evicciones, y llama a los partidos de izquierda, a los comités de defensa de las libertades civiles, a las organizaciones de masa y de clase a impulsar un movimiento de masas y una movilización masiva contra estos ataques.

La LC denuncia y condena el decreto sobre la detención preventiva y todo intento de aplicar estas medidas draconianas.

## La crisis de los PC

La crisis latente en el seno de los dos PC, ya antes de las elecciones, ha estallado más abiertamente después de las mismas. En el PC (pro-Moscú), el presidente del partido, Dange, bestia negra número uno del PC (M), y que defendió hasta el final la orientación de apoyo a Indira Gandhi —con la aprobación del Kremlin—, se ha visto obligado finalmente a dimitir.

¿Es esto el preludio de una reunificación de los dos PC, al precio de una ligera toma de distancia del PCI con respecto a Moscú, y de un ligero acercamiento del PC (M) a la burocracia soviética?

Es posible, pues al mismo tiempo los elementos más "izquierdistas" del PC (M), como Ranadive, parecen perder impulso y el partido está cada vez más dominado por la fracción en torno a Dasgupta, que domina la sección regional de Bengala Occidental, que es de lejos la más fuerte en el seno del PC (M). De hecho, mucho dependerá de saber si el régimen de Indira Gandhi atacará realmente a los gobiernos regionales dominados por el PC (M) y las reacciones (unitarias o sectarias) del PCI en estos casos.

Sin embargo, no cabe excluir la eventualidad de una nueva escisión en el seno del PCI: la fracción "dura" en torno a Dange rechaza un curso hacia la reunificación, y ésta no afectaría por tanto sino a una parte tan sólo del PCI.

Por lo demás, también el PC (M) está profundamente dividido. No sólo el grupo de Ranadive, sino también un grupo en torno al secretario general, Namboodiripad, se oponen a la orientación ultraoportunista de la fracción Dasgupta, sin romper, sin embargo, con la política de colaboración de clases.

El conjunto de estos factores, así como una crisis creciente de las formaciones centristas, crean por primera vez desde hace años un clima favorable a un reagrupamiento de cuadros en torno al programa trotskysta, clima que trata de aprovechar la LC, pese a sus medios aún modestos. ■

## Yugoeslavia

# Un equilibrio muy inestable

Catherine Verla

YUGOSLAVIA emprendió el año 1980 con un plan de austeridad impuesto por el gobierno en virtud de un procedimiento excepcional (que le permite pasar por alto la prolongada oposición de la Asamblea Federal).

Una de las razones es el desfase entre la recesión que conocen los paises capitalistas europeos (provocando, entre otras cosas, una disminución de sus compras en el mercado yugoslavo), y la tasa de crecimiento, muy alta, de la economía yugoslava durante los últimos años (Yugoslavia no conoce la "estanflación"). Esto implicaba, en el marco actual de insuficiente explotación de sus propias materias primas, un incremento muy fuerte de las importaciones, y por tanto una agravación de la deuda exterior y fuertes llamaradas inflacionistas. Esto habrá que incluirlo en el balance de los actuales debates sobre la integración de este país en el "nuevo orden económico mundial"...

### La incertidumbre

Mientras tanto, reina la duda en cuanto a la eficacia de las medidas adoptadas. Ya la anterior congelación de precios, impuesta el pasado mes de agosto, había provocado el almacenamiento de mercancías (entre otras, el café), con el fin de especular con los futuros aumentos de precios, y había generado, en diciembre, una verdadera crisis de abastecimiento en Belgrado (con amenazas de dimisión política de los funcionarios locales). Pero esto no es más que la punta del *iceberg*.

Tras las vastas purgas de comienzos de los años 70, que afectaron de hecho a todos los que —desde la "derecha" o la "izquierda"— ponian en entredicho la unidad y el monopolio del poder político de la Liga de los Comunistas Yugoslavos (LCY), sigue reinando la autocensura cuando se inicia el *postitismo*. Algunos esperan una nueva fase de liberalización política por parte del equipo en el poder, que de lo contrario no podría apelar a ningún árbitro y no dispondría de una popularidad suficiente para rebajar las tensiones. Sería un medio de ampliar su apoyo popular.

Apoyándose en este argumento, en los últimos tiempos vemos florecer algunas declaraciones sobre la necesidad de una "reconciliación" con los que fueron separados o dimitieron de la LCY. Se habla de reconsiderar la situación de la revista *Praxis*, proscrita, a cuyos colaboradores marxistas de izquierda se les prohibió, en 1975, enseñar en la Universidad de Belgrado.

Pero incluso los que esperan esta liberalización política no ocultan sus temores de que se opere en un contexto favorable a las fuerzas centrífugas, en que los nacionalismos exacerbados podrían hacer estallar la Federación. En la situación actual, el estallido de Yugoslavia debilitaría la capacidad de resistencia, tanto al entorno capitalista como a la intervención soviética (sin duda, con distintos resultados para las diversas repúblicas).

El miedo a los "rusos" está en todas partes, alimentado por las autoridades, que saben muy bien que esto es un factor de cohesión de la población, un factor que puede impedirle expresar plenamente su descontento. En el ejército se han suspendido muchos permisos, y los ciudadanos participan en las guardias nocturnas en los lugares de trabajo. Y si bien es poco probable que se produzca una intervención militar directa, no cabe duda que el Kremlin no ha vacilado en multiplicar los intercambios bilaterales directos con las diversas rapúblicas, estos últimos años, y que no vacilará, igual que en el pasado, en explotar las disensiones nacionales para reforzar sus propias posiciones.

De ahí que la principal incertidumbre se sitúe al nivel de la relación de fuerzas internas entre las distintas clases y capas sociales, y entre las distintas tendencias susceptibles de orientar a la LCY y al sistema yugoslavo.

¿Cuáles fueron los efectos profundos de las medidas adoptadas desde 1971, sancionadas legalmente por la nueva Constitución de 1974 y sobre todo por la "Ley sobre el Trabajo Asociado", promulgada a finales de 1976?.

Desde que entraron en vigor dijimos que llevarian a un callejón sin salida (ver Inprecor, edición francesa, nº 25 y 41-42, del 30.3.1978 y del 30.12.1978, respectivamente).

Habrá que esperar a que las tensiones refrenadas en este fin de reinado de Tito se expresen a plena luz del día para determinar realmente en que medida estas reformas han podido afectar a la conciencia de los trabajadores y transformar la relación de fuerzas sociales.

Decir que la autogestión es en gran medida formal en Yugoslavia es una banalidad. **La manera** en que se la ha reducido a algo formal ha variado considerablemente según las grandes etapas que ha atravesado Yugoslavia (ver la reseña histórica al final del artículo). Y suprimir de un manotazo la experiencia yugoslava sin tomarse la molestia de examinar sus contradicciones -infinitamente más ricas que las de sus vecinos del Este-, equivaldría a dejar de lado una de las experiencias más ricas para el movimiento obrero, desde el punto de vista de la construcción de una sociedad socialista efectivamente autogestionaria. Equivaldría también a desarmarse totalmente en la propia Yugoslavia, incluso ante los acontecimientos inminentes.

### Las tendencias a la restauración del capitalismo en 1968-1971

Durante mucho tiempo, en Yugoslavia se identificaba la planificación centralizada y burocracia. En nombre de la mayor eficacia de los poderes autogestionarios, al nivel de las empresas, se desmanteló, con la reforma Económica, el principal instrumento de la planificación de antes de 1965 -el Fondo Central de Inversiones-. El mercado (el "socialista", aunque también el mercado mundial, con la apertura de las fronteras) era la contrapartida, considerada inevitable, de la "libertad" de la autogestión en relación a las trabas burocráticas centrales del periodo anterior.

Al cabo de poco tiempo -esto iba a manifestarse a partir de 1968-, con la extensión de las leyes del mercado se observó **al mismo tiempo** cómo la planificación perdía eficacia, cómo se reducía el peso de la clase obrera en beneficio del ascenso de los "especialistas" de la "gestión", y cómo se desarrollaba el paro. Se asistió a una fulgurante progresión de las fuerzas sociales favorecidas por el desarrollo del mercado, en particular las direcciones de las empresas de importación y exportación, aunque sobre todo las de los bancos y otros intermediarios financieros, que durante este período acumularon fondos anónimos, incontrolados, sobre la base de un considerable endeudamiento de las empresas (cuyas inversiones dependían casi únicamente de los bancos).

De hecho, la lógica de la Reforma llevaba la formulación de un verdadero programa de restauración del capitalismo: en nombre de la "racionalidad", ligada a la competencia en el mercado, en nombre del "espíritu empresarial", que difícilmente podían asumir los trabajadores en ese contexto, ¿acaso no era conveniente suprimir bastantes derechos de la autogestión, permitir los despi-




dos legales, estimular la participación en los beneficios de los responsables de las empresas y el empleo "eficaz" de los fondos acumulados mediante la restauración de un mercado de capitales, y, finalmente extender la propiedad privada?.

El aprendiz de brujo había sido la misma dirección de la LCY. Este programa encontraba a sus más ardientes defensores en las propias filas del partido (independientemente de su grado de conciencia en torno a las consecuencias restauracionistas de su aplicación). Así mismo, la lógica de la competencia estaba en contradicción con la de la solidaridad con los sectores y regiones menos desarrolladas. Las desigualdades no podían más que aumentar, afirmandose los egoismos regionales en forma de oposición entre las repúblicas -es decir, entre las nacionalidades.

En 1971, un amplio movimiento reclamaba en Croacia que no hubiera más intervenciones destinadas a centralizar los recursos y que llevaban a la "colonización" (sic) de las regiones ricas por las más pobres. Esta república, que gracias al turismo de la costa dálmata aportaba al país gran parte de sus divisas, reclamaba en particular la posibilidad de conservar para sí la integridad de sus ingresos. El movimiento, parcialmente propiciado por los dirigentes locales de la LCY, adquirió una dinámica separatista y derechista (dominada socialmente por capas pequeño-burguesas, orientadas hacia el comercio internacional, ideológicamente explotado por la Iglesia y por los *ustachis* croatas y, al parecer, poco implantado entre los trabajadores) pese a que el carácter de la planificación haya podido conferir a las reivindicaciones una base antiburocrática real.

Frente a esta expresión abierta de la desintegración, no solo de la planificación sino también de la LCY y de la misma Federación la dirección operó un cambio radical en 1971.

## Un viraje centrista burocrático

Las principales características del nuevo curso que se adoptó entonces son las siguientes:

• en el plano político: la represión de todas las opciones, la crítica pública (formulada por Kardeliy, principal teórico del régimen, que murió el año pasado) de la "desintegración prematura de la dictadura del proletariado", es decir, del "papel dirigente del Partido", el refuerzo del peso del ejército en la LCY y en el aparato de estado, el control de los sindicatos, que se habían emancipado un poco de su función de correa de transmisión en el periodo anterior.

• en el plano social, se trató de encontrar un nuevo equilibrio, apoyándose en los trabajadores frente a los tecnócratas, si bien satisfaciendo a continuación -una vez estaba consolidado el aparato y liquidados los movimientos de revuelta- las principales reivindicaciones descentralizadoras: frente al poder de los tecnócratas a nivel de empresa, y en los bancos, se reformó el sistema bancario y se desmantelaron las antiguas empresas, formando unidades más pequeñas (supuestamente más controlables por los trabajadores), y creando las "Organizaciones de Base del Trabajo Asociado" (OBTA), dotadas asimismo de un poder de gestación de sus "rentas" (es decir, de lo que queda una vez pagadas las materias primas y las amortizaciones de los fondos fijos). En otras palabras se amplió el campo en que puede intervenir la gestión: no sólo los "ingresos personales" inmediatos (los salarios), sino también el consumo colectivo (guarderías, hospitales, enseñanza, vivienda etc.), gestionado por "Comunidades Autogestionarias", que agrupan directamente a trabajadores y usuarios de los servicios colectivos, y finalmente, la "reproducción amplia" (la inversión).

En este marco, los fondos anónimos de los bancos quedaron suprimidos y se anularon las deudas de las empresas. Los bancos locales se transformaron en una especie de servicio financiero de las empresas que los crean o que depositan en ellos sus fondos. En otros tiempos, a partir de ahora serán estas empresas asociadas las que solicitan créditos a los bancos y que a través de sus delegados determinan al mismo tiempo la política de los bancos.

Paralelamente, el Banco Central de Yugoslavia se desdobló en tantos bancos centrales como repúblicas tiene la Federación. Estos bancos detentan fondos suficientes para financiar las grandes inversiones prioritarias. Y a partir de enero de 1968, cada república conserva sus ingresos de divisas y dispone de una autonomía presupuestaria y económica bastante amplia.

Es ante todo la LCY la que, estando detrás (y en el centro) de las direcciones de las empresas y de los bancos, la que debe conferir a este sistema la necesaria unidad, basada en la exigencia de una estricta disciplina. La planificación determina las proporciones mayores y las opciones prioritarias, pero no precisa ninguna sanción en caso de que no se resperen sus decisiones. Estas son fruto de un largo proceso de armonización de los múltiples intereses que se enfrentan a partir del plan de cada OBTA, de cada comuna, de cada república.

Finalmente, a la extensión de los derechos de gestión de los trabajadores se añadió un derecho permanente, destinado también a controlar los poderes tecnocráticos que existen de hecho en este tipo de gestión: el control obrero autogestionario.

## La hora del balance

Aún manteniendo un punto de apoyo fundamental en el **mercado**, el nuevo sistema debía permitir el control de sus efectos

más nefastos: la aparición de desigualdades "injustificadas" y de poderosas fuerzas tecnocráticas. Debía permitir asimismo que las decisiones de gestión las tomaran realmente los trabajadores.

En la práctica, las diferencias entre regiones ricas y regiones pobres han continuado aumentando. La forma descentralizada de determinar las rentas hace que en la práctica las rentas más elevadas se encuentren en los sectores que gozan de una posición privilegiada gracias a su función en el mercado: ya sea por razones "naturales" (lugar adecuado para el turismo, abundancia de materias primas), ya sea porque disponen de una infraestructura que les permite una fuerte productividad del trabajo. Aunque teóricamente la parte de los ingresos que proviene de estas "rentas" debe redistribuirse para formar fondos colectivos o de acumulación, esto choca con fuertes resistencias. En la práctica, "a cada uno según su trabajo" sigue traduciéndose por "a cada uno por sus funciones, por un lado, y según el resultado de su trabajo en el mercado, por otro". Es decir, se opera una transferencia de valor desde las regiones y sectores menos desarrollados hacia los otros, y desde los sectores productivos al de servicios.

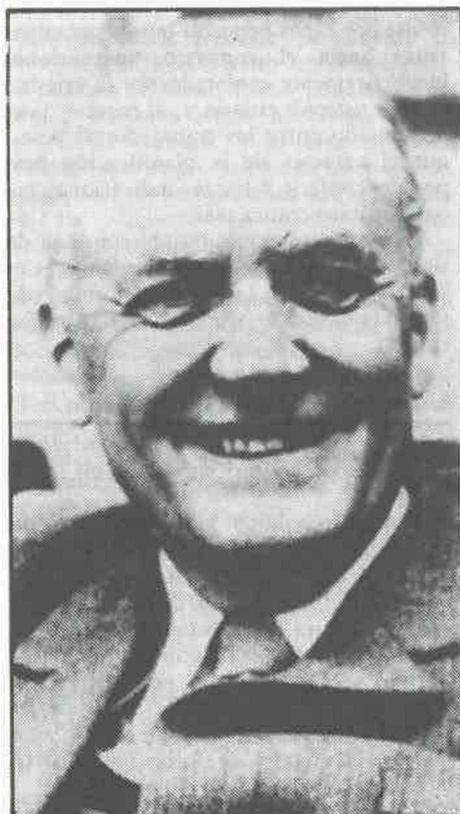
A ello se añaden las diferencias de ingresos debidas a las diferentes políticas de precios (por ejemplo, los precios de las principales materias primas, que siguen manteniéndose bajos, hacen que de hecho los trabajadores de estos sectores perciban salarios inferiores, pues las medidas de compensación son bastante insuficientes). En cambio, parece que las desigualdades en el seno de una misma unidad de trabajo hayan disminuido (como reflejo de un control más directo por parte de los trabajadores), al igual que en el interior de los ramos en que los acuerdos entre las distintas empresas han llevado a una equiparación de los salarios.

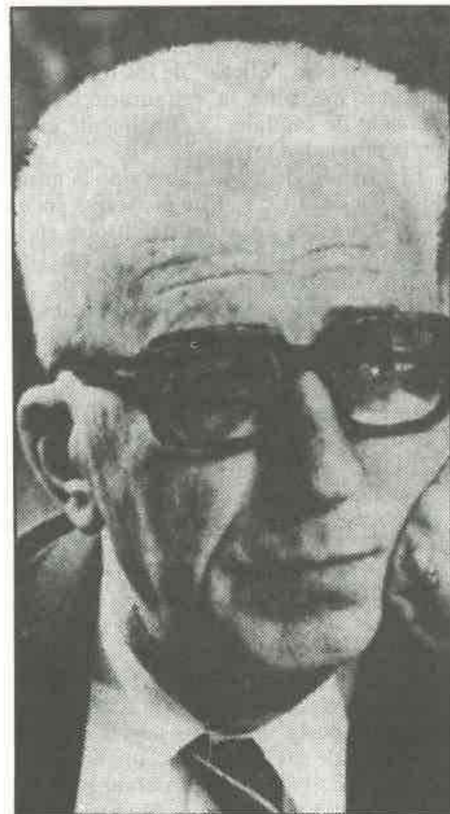
Frente al poder de los "componentes", cuando pasamos a niveles superiores de la organización del trabajo, los trabajadores tienden a replegarse sobre las decisiones concretas, las que tienen implicaciones inmediata y directamente palpables. Esta tendencia sólo puede verse reforzada cuando las decisiones propuestas se presentan en forma de un montón de textos ilegibles (por su lenguaje y por su cantidad), cuando se trabaja más de cuarenta horas por semana y cuando, finalmente, si se llega a entender qué es lo que hay que decidir, sólo se plantea un único proyecto, sin posibilidad material -política- de elaborar una alternativa.

Esta es una de las razones por las cuales la extensión del derecho de los trabajadores a tomar una serie de decisiones ha significado, en la práctica, una separación creciente entre el derecho y la realidad, y, por consiguiente, una razón suplementaria para vaciar la autogestión de su contenido potencial. El ejemplo de las "comunidades auto-

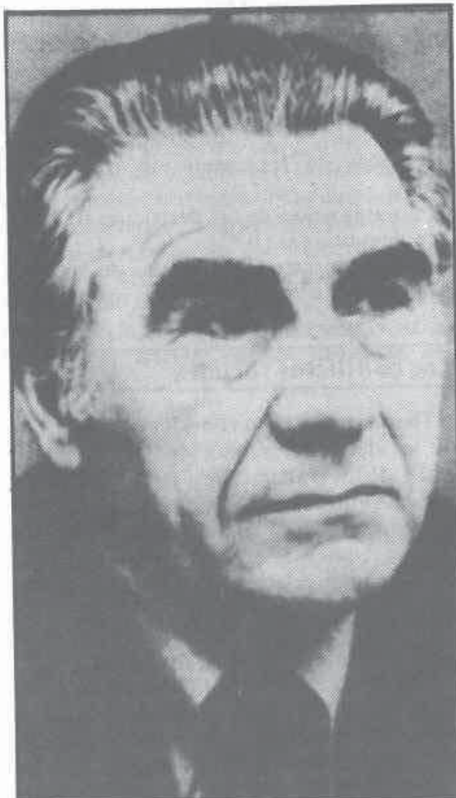

Vladimir Bakaric

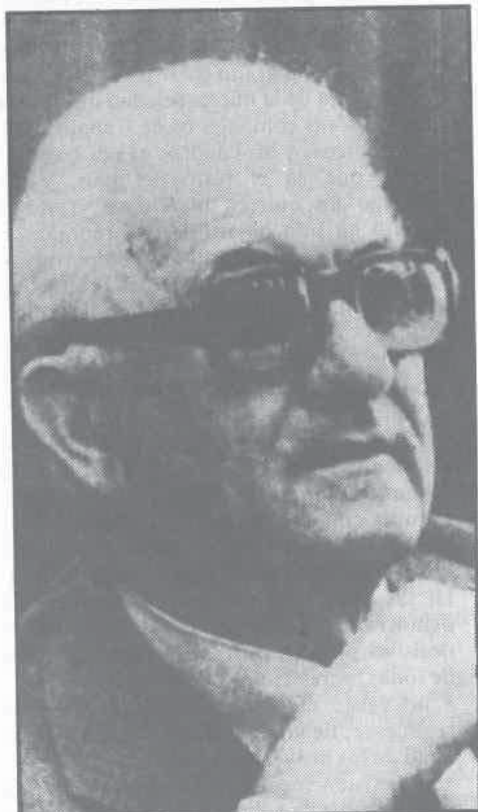

Stevan Doronjski


Sergej Krajger


Cvijetin Mijatovic


Fadilj Hodza


Lazar Kolisevski


Petar Stambolic


Vidoje Zarkovic

gestionarias" es bastante típico. Concebidas como instrumentos para impulsar un proceso de extinción del Estado mediante la asunción directa de los servicios comunitarios (sanidad, cultura etc.), por parte de los trabajadores y los usuarios de dichos servicios, en la práctica se han burocratizado rápidamente: dado que los trabajadores no tienen los medios para controlar las decisiones adoptadas en su nombre por los "delegados", estos se han convertido rápidamente en auténticos funcionarios que gestionan a menudo unas sumas de dinero considerables, desarrollando un nuevo aparato administrativo en detrimento del propio servicio colectivo. Personalmente he podido ver fichas de salarios en que se restaban múltiples cantidades del importe total, sin precisar siquiera la naturaleza de esas deducciones prácticamente automáticas, que sin embargo se pretendía eran el resultado de decisiones autogestionarias.

En cuanto al sistema bancario, la relación de fuerzas es ahora distinta al periodo 1965-1971, pues su política no es decidida ya por una dirección autónoma deseosa de obtener un beneficio inmediato sobre la base del endeudamiento de las empresas. Al contrario, los tipos de interés han sido muy bajos en el último período (dado que las empresas que solicitan créditos eran al mismo tiempo las que determinaban la política de los bancos), tan bajos que con la tasa de inflación existente, estos tipos de interés han sido de hecho negativos, estimulando así una enorme demanda de créditos para invertir.

En cambio, el poder de decisión real depende mucho de los potentados locales: en un sistema en que los privilegios provienen ante todo de la función que se cubre (y en primer lugar, de la función en el aparato del Partido y del Estado), las decisiones que se adoptan vienen determinadas directamente por la búsqueda de buenas relaciones con tal o cual dirigente local.

En cuanto a la política de estos dirigentes locales, se orienta por la voluntad de evitar las tensiones a nivel local, de asentar su poder político, de ganarse cierto prestigio. En un contexto de extrema descentralización económica, esto hace que cada localidad trate de impulsar en cierto modo un desarrollo casi autárquico (cada una quiere tener "su" empresa azucarera, "su" energía etc.), derrochando así las capacidades productivas al hacer que proliferen los dobles empleos, la ausencia de una verdadera coordinación, la falta de integración de la autogestión y del trabajo al nivel del conjunto de la sociedad.

## El control obrero autogestionario: un balance positivo

Sobre la base de un análisis de los conflictos y de las huelgas que se produjeron en las empresas, los sindicatos discutieron y decidieron, en 1972-74, una serie de

medidas de control obrero que quedaron institucionalizadas en la "Ley del Trabajo Asociado", promulgada a finales de 1976. La Ley reconoce el derecho de los trabajadores a ejercer su **control**, a exigir públicamente -oralmente o por escrito- que se les rindan cuentas sobre cualquier aspecto de la gestión de la empresa, en todo momento. Pueden ejercer este derecho directamente, a través del Consejo Obrero o mediante la creación de un organismo especial, el "Comité de Control Obrero Autogestionario".

Un estudio realizado en 1976 en torno a estos Comités demuestra cuánta importancia le dan los trabajadores. Mientras que en principio es la organización sindical la que elabora las candidaturas a estos Comités de Control, resulta que en el 67% de los casos es directamente la asamblea de trabajadores la que confecciona las listas de candidatos.

En el 80% de los casos, estos Comités han realizado su trabajo públicamente en todas las fases; todos los trabajadores tienen libre acceso a sus actividades (en el 20% de los casos, el trabajo de recopilación de datos y de documentación se realizó en secreto). En el 75% de los casos, los informes fueron presentados a la asamblea de trabajadores o al Consejo Obrero (frente al 15% de los casos, en que se presentaron a las direcciones de la LCY y de los sindicatos). En los 1.602 Comités encuestados, el 81% de sus miembros eran obreros productivos, es decir, una cifra bastante más alta que en los Consejos Obreros y de Gestión. El 44% eran miembros de la LCY.

Si se analiza quién inició las acciones emprendidas por los Comités de Control Obrero Autogestionario, en el 73% de los casos se trataba de obreros y de miembros de estos Comités, mientras que el Consejo Obrero sólo había propuesto el 9% de las iniciativas, y el 2% habían sido sugeridas por la LCY y los sindicatos.

El Comité de Control no tiene facultades para tomar decisiones en torno a las irregularidades que descubra. Pero informa a los trabajadores y a los órganos que deben tomar las decisiones. En el 72% de los casos, han sido directamente las asambleas de trabajadores o los Consejos Obreros los que tomaron las decisiones pertinentes para subsanar las irregularidades detectadas. En el 10% de los casos no se tomó decisión alguna, a pesar de los informes presentados (lo que no quiere decir que no vaya a tomarse esa decisión, sino simplemente que aún no se había llegado a ninguna conclusión en el momento de realizar la encuesta).

Cuando la propuesta del Comité de Control no tuvo consecuencias, en el 64% de los casos los Comités apelaron a la LCY y a lo sindicatos, y en el 25% de los casos convocaron la asamblea de trabajadores y exigieron una decisión inmediata.

Finalmente, los principales problemas que motivaron la investigación de los Comités fueron los siguientes:

— abuso de poder (8%)
— relaciones burocráticas de los dirigentes con los obreros (6%)
— ingresos personales irregulares (10%)
— informes falsos sobre la cifra de negocios (6%)
— gastos de representación irracionales (5%)
— no aplicación de las decisiones de las asambleas obreras (10%)
— no respeto de las claúsulas de las leyes autogestionarias (21%)

## Los conflictos sociales

Hemos subrayado el desfase existente entre los derechos reconocidos y los poderes reales de los trabajadores. Pero no diremos que estos derechos son simplemente formales. La asombrosa **eficacia** de las huelgas, o de las acciones de control obrero, son el reflejo de unas relaciones sociales en las que los derechos autogestionarios tienen un peso: las direcciones de empresa son elegidas y revocables por los trabajadores.

Y los dirigentes de la LCY o de los sindicatos saben muy bien que la estabilidad de su **puesto** depende de la calma social. De ahí la rapidez con que tratan de resolver los conflictos cuando hay una huelga. Estos dirigentes políticos y estos tecnócratas no podrían asentar su poder en condiciones de preponderancia de relaciones de propiedad privada, del mismo modo que no existe la relativa estabilidad política de los burócratas nombrados desde arriba, como en los países del Este. Esto explica, por ejemplo, que en 1971, cuando además de las purgas la dirección titista lanzó una vasta campaña (harto demagógica, por supuesto) contra todos los que se habían enriquecido fraudulentamente, en muchas empresas de Croacia no se encontraba a ningún voluntario para el puesto de director...

Así las cosas, la autogestión es también una "realidad ideológica", como se dice allí, es decir, un derecho, que en buena medida se ha tornado formal debido a todos los mecanismos señalados, pero un derecho contra cuya supresión se rebelarían los trabajadores. Y el hecho de que este derecho se haya extendido a otros terrenos no puede dejar de ser importante para la evolución de la conciencia obrera.

Apoyándonos en este optimismo, diremos que no es mera casualidad si en el último período se denota una ampliación de los **temas** de los conflictos. Por ejemplo, me contaron casos de huelga de alquileres, así como un fuerte descontento en torno a la cuestión del acceso a la Universidad. Hay que saber que una de las razones del paro en Yugoslavia es el desfase existente entre la formación adquirida por los jóvenes y los puestos de trabajo disponibles. En pocas palabras: hay muchas ofertas de trabajo en los sectores de la producción material (los peor pagados...), y demasiados sociólogos.

En Croacia acaba de iniciarse, con miras a generalizarlo, una reforma de la enseñanza que establece una especie de control obrero de la enseñanza y la vinculación de una determinada carrera con la necesidad que tiene la sociedad (necesidad que a la sazón se expresa mediante una garantía de empleo avalada por alguna empresa). El fracaso de la reforma ya es manifiesto, pero no por ello ha dejado de causar revuelo. Era una prima al enchufe -y por tanto a los privilegios burocráticos.

## La alternativa

Frente a los conflictos de este tipo, y también frente a la proliferación de todos esos problemas sobre los que deberían decidir los trabajadores y sobre los que de hecho deciden otros en su lugar, en Yugoslavia se multiplican actualmente las expresiones de carácter muy elitista o abiertamente tecnocrático: *"Existen tareas ingratas, y otras más nobles. Es normal que los más competentes y cualificados estén mejor pagados. Y los obreros no pueden decidir sobre todas las cosas, es normal que deleguen poderes a los especialistas..."*.

Un eminente profesor me dijo: *"Los obreros no entienden. Se dicen: Pago a un director para que dirija, y mira por dónde me pide la opinión sobre todas las cosas, además de mi jornada de trabajo"*.

Sin embargo, se habla también de ese "islote del socialismo", en una comuna en donde un antiguo partisano, ahora director de fábrica, ha logrado crear una concepción muy distinta de la microsociedad que anima junto con sus compañeros de trabajo. Allí, los ingenieros y los cuadros ganan bastante menos que en el resto del país, y sin embargo no quieren marcharse. Todo el trabajo ha sido objeto de una reorganización creativa, que suprime la compartimentación y las viejas divisiones. La productividad se ha multiplicado por diez. Los recursos se gestionan colectivamente, creando un marco de vida social en que los servicios colectivos son cuantiosos y de buena calidad.

Las soluciones alternativas a las respuestas tecnocráticas existen y se abren camino (aunque es imposible decir aún con qué amplitud y con qué rapidez). Los mecanismos que impiden que la autogestión se convierta en realidad, permiten, sin embargo, formular las exigencias con mayor claridad. La **democracia** obrera, política, es el factor decisivo para la profunda transformación de todas las relaciones sociales:

• no existe ninguna posibilidad de optar realmente, de votar realmente, sin la pluralidad de los proyectos presentados;
• no existen medios para contrarrestar la fuerza de los tecnócratas si los trabajadores no constituyen una fuerza colectiva, consciente de las diversas opciones posibles y de sus implicaciones. Debe existir la posi-

bilidad de realizar los más amplios debates políticos posibles en torno a las opciones presentadas. Los puntos de vista divergentes deben poder confrontarse públicamente con los medios audiovisuales de comunicación de masas a todos los niveles. Los delegados deben ser elegidos a continuación, sobre la base de los programas debatidos y de los mandatos que hayan recibido tras la disolución pública. Todos los que comparten un punto de vista común en torno a las grandes opciones deben poder agruparse, incluso coyunturalmente, para elaborar y argumentar de forma clara y convincente. En este marco, los sindicatos y partidos deben ser también un lugar de debate público, donde deben conocerse las posiciones minoritarias, que deben disponer de los medios necesarios para expresarse colectivamente. Ninguna adscripción política debe comportar privilegios en la toma de decisiones que incumben a los órganos de autogestión;

• no existe ninguna posibilidad de optar realmente sin el tiempo y la formación necesarios para hacerlo; deben deducirse del tiempo de trabajo;

• no existe ninguna posibilidad de optar realmente si se continua sometido a la lógica del mercado y de la competencia: las grandes opciones de desarrollo deben ser debatidas teniendo en cuenta los objetivos de superar las desigualdades y las viejas divisiones entre el campo y la ciudad, entre el trabajo manual y el trabajo intelectual, la división sexual del trabajo, cuyo mantenimiento perpetuaría los privilegios sociales y no permitiría que todos y todas tengan el derecho efectivo a un trabajo no alienado. ■

# Las grandes etapas del sistema yugoslavo.

### 1945-1950

Planificación totalmente centralizada y colectivización de las tierras, según el modelo de la Unión Soviética.

### 1950/1952-1965

Introducción y posterior extensión de la autogestión a todos los sectores (incluidos los servicios y la cultura).

Sin embargo, el Estado federal sigue centralizando fuertemente las inversiones y deja escaso margen de gestión a las empresas: entre otras cosas, un impuesto sobre los fondos fijos alimenta un Fondo Central de Inversiones, que controla el 70% de las inversiones realizadas. Un plan central determina las grandes proporciones (consumo/inversión y estructura de las inversiones). Los bancos son básicamente los intermediarios que distribuyen los créditos cedidos centralmente. En lo esencial, los precios y el comercio exterior están bajo control.

El sector privado se limita a la agricultura (el 80% de las tierras son privadas tras la descolectivización) y al artesanado. Los Consejos Obreros y sus Comités de Gestión (ejecutivos) gestionan los fondos que quedan tras la deducción de los impuestos y tasas, deciden el reparto de la renta según los resultados obtenidos en el mercado, y eligen y revocan a la dirección de la empresa.

### 1965-1971

Puesta en práctica de la Reforma Económica: el aumento de la productividad del trabajo pasa por un aumento de la competencia entre las empresas y en el mercado mundial. Es la "rentabilidad" en el mercado la que debe determinar las inversiones, de lo que se deriva:

• una liberalización considerable de los precios (en principio, aunque la federación se verá obligada, en la práctica, a intervenir muy a menudo, para tratar de minimizar los daños sociales de esta política);

• la supresión del Fondo Central de Inversiones, cuyos recursos se reparten entre los bancos y las empresas. Se mantiene un Fondo de Ayuda a las regiones subdesarrolladas, si bien -y esto sigue así actualmente- se trata de un porcentaje muy bajo del producto social, que se distribuye en forma de préstamos (mientras que previamente se trataba de una redistribución de los recursos sin ninguna contrapartida).

Los bancos se convierten rápidamente en los principales depositarios de fondos; conceden créditos a cambio de fuertes tipos de interés, lo que les permite acumular, durante este período, grandes sumas incontroladas.

### 1971-1980

El sistema bancario se descentraliza, si bien se suprimen los fondos anónimos y las empresas son las únicas que pueden crear bancos comerciales sobre la base de sus propias aportaciones.

El plan central determina las grandes opciones de orientación, tras un largo proceso de reajuste a partir de los planes de las empresas, comunas y repúblicas. Al final de este proceso hay un sistema de acuerdos autogestionarios que debe sancionar las grandes opciones prioritarias del plan nacional. Aún respetando estas grandes opciones prioritarias, las unidades de trabajo son libres de gestionar sus ingresos, con los que de ahora en adelante cubren sus inversiones, el consumo colectivo y los ingresos del personal.

Los servicios colectivos, (sanidad, ocio, guarderías, vivienda, etc.) son gestionados por Comunidades Autogestionarias, que agrupan a los trabajadores y a los usuarios de estos servicios.

Las empresas se subdividen en unidades de base: las OBTA (Organizaciones de Base del Trabajo Asociado), que gestionan sus propios presupuestos. Las diversas OBTA se juntan en las OTA (Organización del Trabajo Asociado), que equivalen más o menos a las antiguas empresas, y en complejos que fabrican diversos productos. Pero las OBTA siguen siendo soberanas en el marco de los acuerdos que contraen entre ellas.

Se establece el control obrero autogestionario, que le permite a todo trabajador y a todo organismo de control obrero elegido por los trabajadores de la OBTA, investigar y dar publicidad a cualquier anomalía relativa a la gestión de la empresa.

A nivel político se crea un sistema de delegación para las elecciones a las Asambleas de las Comunas y de las Repúblicas: las OBTA eligen compromisarios que a su vez eligen sus delegados (revocables y obligados a rendir cuentas ante sus electores) para las Asambleas Comunales; junto a este sistema de representación, que parte de las organizaciones de trabajo, existe una representación (mediante el mismo sistema de compromisarios y delegados) de las comunidades locales y otra de las organizaciones sindicales y políticas (existen, pues, tres Cámaras Comunales). El conjunto de las Cámaras, y también los delegados de las organizaciones de trabajo, así como las organizaciones sindicales y políticas, eligen a sus delegados para los organismos correspondientes al nivel de las Repúblicas. El conjunto de los delegados comunales eligen a sus delegados a la Cámara Federal, y el conjunto de los delegados de una república eligen a sus delegados a la Cámara de las Repúblicas y Provincias (sobre una base de igualdad). Estas dos últimas constituyen la Asamblea Federal. ■

## Gran Bretaña

# La huelga de la siderurgia.

**Brian Grogan**

Al cabo de trece semanas de una lucha muy dura, la huelga de los obreros siderúrgicos en Gran Bretaña ha terminado. El acuerdo final constituye una traición vergonzosa. Los huelguistas han obtenido el 16 POR CIENTO DE AUMENTO DE LOS por ciento de aumento de los salarios, a cambio de la aceptación de una importante reducción de puestos de trabajo por parte de los sindicatos, y de un aumento de la productividad.

Sin embargo, el gobierno *tory* y la administración de la industria nacionalizada del acero no pueden cantar victoria. Los importantes despidos reclamados por los *tories*, que antes de la huelga parecían iban a pasar como una carta por el correo, puede convertirse ahora en el objeto de un nuevo combate. La huelga en la siderurgia ha elevado la temperatura de la lucha de clases en todo el país. Con ella, los trabajadores de una de las industrias básicas han salido de un largo período de letargo.

### Una traición — pero no una derrota

El mismo día de la vuelta al trabajo surgieron dos conflictos distintos entre los trabajadores y sus patronos, uno en el sur de Yorkshire, otro en Port Talbot, en el sur del país de Gales, en torno a un boicot de los camioneros que habían transportado a esquiroles durante la huelga, y que se negaron a respetar los piquetes de huelga. El segundo día después de la renudación del trabajo, unos 20.000 obreros de la siderurgia volvieron a protagonizar huelgas salvajes.

El acuerdo de reanudación del trabajo fue aceptado finalmente después de que una comisión investigadora pretendidamente "independiente" hubiera aumentado la oferta final de la administración (14 % de aumento salarial) en 2 puntos adicionales. Pero el acuerdo comprende dos partes.

El 11 % del aumento se paga sobre la base de las normas salariales en vigor en el momento en que estalló la huelga. En promedio, esto constituye un incremento de 10 libras (unos 2,30 dólares USA) por semana. Para financiar este aumento, habrá que encontrar 180 millones de libras. Casi la totalidad de esta suma procederá de una reducción del número de puestos de trabajo, puesto que el gobierno ha limitado estrictamente el importe total de los subsidios que otorga a la industria nacionalizada. La *British Steel Corporation* (BSC) estima que habrá que suprimir 52.000 puestos de trabajo para financiar este aumento salarial.

La segunda parte del aumento, es decir, el 4,5 %, sólo será definitivo tras la conclusión de las negociaciones locales en torno al aumento de la productividad, que implican cambios radicales en la organización del trabajo, la introducción de una mayor "movilidad de la mano de obra" y sobre todo una aceleración de los ritmos, que permitirá suprimir 12.000 puestos de trabajo adicionales. Durante los tres primeros meses posteriores al final de la huelga, este 4,5 % de aumento se pagará en forma de adelanto. Al cabo de este trimestre, sólo continuarán pagándose si se concluyen los acuerdos locales para satisfacción de la administración. En numerosos casos, por tanto, los trabajadores sólo recibirán el 11 % —y esto cuando existe una tasa de inflación que alcanza ya el 18,5% y que sigue aumentando—. Lo que recibirán efectivamente los trabajadores se reducirá aún más como consecuencia de un acuerdo de renegociar la norma vigente sobre la semana de trabajo, es decir, sobre el salario semanal garantizado. Sin embargo, un 16 % de aumento salarial, con todas las reservas que acabamos de señalar, es más que el 12 por ciento ofrecido al comienzo de la huelga por los patronos del complejo nacionalizado. Así, no puede decirse que los trabajadores de la siderurgia hayan sido aplastados, como deseaban los *tories*.




Estos querían haber dado una lección al conjunto de la clase obrera británica. No podrán intimidar a los sectores más fuertes con ayuda del acuerdo de la siderurgia. Esto se refiere particularmente a los mineros. Evidentemente los sectores más débiles de la clase obrera compararán la duración de la huelga, necesaria para alcanzar el incremento salarial deseado, con lo que se ha obtenido. En estas condiciones, no pocos sectores de los más débiles se lo pensarán dos veces antes de desencadenar huelgas en torno a cuestiones secundarias.

La situación en el interior de la industria siderúrgica se ha transformado completamente. Hubo una explosión de cólera entre los trabajadores cuando se aceptó el acuerdo. Delegaciones que habían acudido a la sede del sindicato, para influir en el voto en torno a la reanudacíon del trabajo, abuchearon, hostigaron e incluso atacaron físicamente a los miembros de la ejecutiva que habían votado por la reanudación del trabajo. La dirección sindical tuvo que llamar a la policía para protegerse contra los huelguistas.

Había prácticamente unanimidad entre los huelguistas activos para rechazar el acuerdo. Pero este sector activo de los huelguistas no representaba más que una minoría en el conjunto de los trabajadores de la siderurgia, pues una parte importante de estos permaneció en buena medida pasiva durante la huelga. Además, habían sido sometidos a una presión constante por parte de los medios de comunicación capitalistas. Bil Sirs, el dirigente del principal sindicato implicado en la huelga, la ISTC (Confederación de Trabajadores del Hierro y del Acero), así como otros burócratas sindicales, habían propiciado todas luces una situación semejante.

Por consiguiente, los dirigentes locales de los sindicatos adoptaron en general la posición de que era preferible volver al trabajo todos juntos, para mantener la combatividad de todos los afiliados. Una vez aceptado el acuerdo por la ejecutiva —apoyada por la comisión negociadora del principal sindicato, la ISTC, que se compone de delegados locales—, las regionales sindicales más combativas temieron verse aisladas y derrotadas una después de otra si proseguían con la huelga, con el

riesgo adicional de verse involucradas en violentos conflictos entre unos sectores de trabajadores y otros. Así, prefirieron esperar la ocasión para nuevos combates, para tomar la revancha. Sin embargo, la dirección local de Yorkshire del sur —una regional sindical particularmente combativa— tuvo que poner toda la carne en el asador para lograr una pequeña mayoría a favor de la reanudación del trabajo, en la Asamblea General de huelguistas convocada con este fin.

**La estrategia de los tories**

El hecho de que la huelga en la siderurgia haya durado 13 semanas, de que fuera la huelga a escala nacional más larga desde la 2.ª guerra mundial, ha sorprendido totalmente a todo el mundo, empezando por los *tories*. Cuando era aún uno de los principales dirigentes, el diputado Nicolas Ridley había tenido la idea de escoger deliberadamente un sector de la clase obrera para darle una lección al conjunto de la clase.

Los *tories* habían hecho balance de la experiencia del precedente gobierno conservador, el gabinete Heath, que a comienzos de los años 70 había querido hacer frente a las fuerzas vivas de la clase obrera en su conjunto, lo que provocó la explosión de la huelga de los mineros, que terminó derribando al gobierno. Esta vez iban a aplicar una táctica diferente, con miras a dividir deliberadamente a la clase obrera.

Así, los miembros obtuvieron un 21% de aumento salarial, sin lucha. Los trabajadores del consorcio privado *British Oxigen* recibieron el 30 % de aumento en las mismas circunstancias. Estos aumentos son evidentemente contradictorios con el objetivo de los *tories*, de hacer que el capitalismo británico vuelva a ser competitivo y expansionista en el mercado mundial. En estas condiciones, una derrota aplastante de los trabajadores de la siderurgia se consideraba como indispensable para vérselas después con los mineros, y después con otros sectores combativos en las posteriores negociaciones salariales.

Escoger como víctima un sindicato como la ISTC parecía una buena opción para la burguesía. Su dirigente, Bill Sirs, es un notorio "moderado". Además, se trata de un sindicato en que apenas existe democracia interna en su más simple expresión. En toda su historia no ha celebrado más que cuatro conferencias, la primera en 1976, y todas eran puramente de carácter consultativo. Desde la huelga general de 1926, en Gran Bretaña los trabajadores de la siderurgia jamás realizaron una huelga nacional. En el transcurso de los dos últimos años, la dirección del sindicato había aceptado la supresión de 40.000 puestos de trabajo. En las anteriores negociaciones salariales había aceptado un incremento de tan sólo el 8 %, mientras que la mayoría de los demás sindicatos habían obtenido incrementos del orden del 15 % en promedio, cuando la tasa de inflación era ya del 17 %.

Los trabajadores de la siderurgia británica son de lejos los peor pagados de Europa. Incluso en la escala salarial de Gran Bretaña ocupan tan sólo la 17.ª posición, si tenemos en cuenta las horas extraordinarias efectivamente pagadas, y el puesto 60 entre 120 categorías, si tomamos el salario base. En vísperas de la huelga, Sirs proclamó que el sindicato no se opondría a una nueva supresión de 53.000 puestos de trabajo, reclamada por la *British Steel Corporation*.

La oferta inicial del 2,5 % de aumento salarial por parte de la BSC, que se realizó tras el anuncio de despidos masivos, fue la chispa que despertó a este gigante dormido que era la clase obrera del acero. Pese a las sucesivas retiradas y capitulaciones de la dirección, los obreros siderúrgicos fueron a la huelga en su totalidad desde el primer día. Incluso los trabajadores de acerías como las de Shoton, Corby y Consette, que prácticamente deben hacer frente a un cierre total, participaron en bloque en la huelga, con la que sin embargo aparentemente no podían ganar nada.

**Una dirección sindical capituladora**

Bastaron pocos días de huelga para paralizar todo el consorcio nacionalizado. En el transcurso de las semanas siguientes, se crearon piquetes volantes masivos, con miras a actuar en otros sectores de la industria, particularmente el sector privado de la siderurgia y en los puertos en los que llega el acero importado del extranjero. Estas acciones se emprendieron en contradicción con la orientacíon, y en numerosos casos, con las instrucciones implícitas dadas por la burocracia sindical a escala nacional. Esta se oponía a los piquetes dirigidos contra los accionistas y contra otros "objetivos secundarios".

Al principio, Sirs se opuso incluso a un llamamiento a los trabajadores de las empresas privadas de la siderurgia, para unirse a la huelga, aunque este sector suministre el 26% de producción siderúrgica. Todo el fracaso —sino la traición deliberada— de este burócrata sindical se expresa en el hecho de que anunció la intención del sindicato de desencadenar la huelga, con cuatro semanas de antelación, lo que le permitió a los compradores de acero constituir tranquilamente unos *stocks* sólidos, reduciendo así el impacto económico de la huelga. Al mismo tiempo, no fijó ningún objetivo preciso ni ninguna estrategia para los huelguistas. Pero fue la energía y la resolución de los militantes de base la que permitió empujar la lucha hacia adelante.

El objetivo de la huelga lo formularon las direcciones locales: el 20 % de aumento salarial, sin ninguna condición previa (en materia de supresión de puestos de trabajo o de productividad). El comité de huelga de la regional de Yorkshire del sur desempeñó el papel de vanguardia en el transcurso de la lucha. Decidió particularmente oponerse a todo transporte de acero, en todo el país. Envió piquetes volantes a través de toda Gran Bretaña; fueron financiados por los comités de huelga locales.

La amplitud de los piquetes móviles y la de sus objetivos rebasó de lejos el nivel más elevado alcanzado anteriormente, durante la huelga de los mineros de 1972. Resulta típico que el comité de huelga regional de Yorkshire del sur escogiera como consejero a este respecto al dirigente combativo de los mineros, Arthur Scargill, que había sido el principal artesano de esa táctica de combate, en la huelga de mineros de 1972. El grado de autoorganización de los militantes huelguistas de base fue notable. Se combinó con una pronunciada desconfianza con respecto a la dirección sindical, popularizada con la exigencia de dimisión de Sirs.

La empresa siderúrgica privada *Handfields*, propiedad del conglomerado internacional (bajo control birtánico) *Lonhro*, apareció pronto como centro de atención del combate. La movilización de millares de trabajadores de la siderurgia de Yorkshire del sur, organizada por el comité de huelga regional, y a la que se habían unido millares de mineros y metalúrgicos de la región, desembocó en el cierre de dicha fábrica.

Pero la falta de determinación de la dirección nacional y la ausencia de una estrategia global en dirección al sector



**Los *Tories*, con Margaret Thatcher al frente, querían dividir al movimiento obrero.**

privado, permitieron a los patronos de *Handfield* explotar el miedo de los trabajadores a perder sus puestos de trabajo. Reanudaron el trabajo algunas semanas más tarde. Sin embargo, hasta ese momento fueron las acciones a nivel local y regional de este tipo, encabezadas por direcciones sindicales alternativas, surgidas de la base, las que permitieron impulsar y hacer avanzar la huelga.

La política de Sirs consistió desde el principio en la búsqueda de un compromiso con la administración en cada hito del conflicto. Una semana después de comenzar la huelga, propuso incluso (con el apoyo del jefe del TUC —la Confederacióon sindical—, Len Murray) detener la huelga con un 8 % de aumento salarial, más un 5 % a cambio de acuerdos locales en torno a la productividad.

### Una dirección de recambio surgida de la base

Entonces se puso de manifiesto que había que forjar una nueva dirección de la huelga. La comisión negociadora nacional, compuesta por delegados locales, respondía en cierta medida a la presión de la base. Cuando la administración, tras 5 semanas de huelga, ofreció como fórmula de compromiso un 2% de aumento más un 12 % a cambio de la aceptación de la reducción de puestos de trabajo, esta comisión nacional apenas necesitó 20 minutos de reunión para rechazar esa oferta. Pero la comisión no pudo actuar como dirección cotiiana de la huelga.

Fue el comité de huelga regional de Yorkshire del sur el que cumplió más o menos esta función, constituyendo una dirección coordinadora. Fue este comité el que decidió la intervención de los piquetes volantes, la que los organizó y los financió. Observó también una actitud constructiva de cara a propiciar la participación de los militantes de base y de los habitantes de los barrios obreros en la marcha de la huelga. Organizó incluso una serie de mitines y manifestaciones con el fin de informar a la masa de huelguistas sobre el desarrollo del combate y mantenerlos movilizados. En muchos casos, sus comités de huelga locales eran elegidos y estaban sometidos a las asambleas generales.

Pero un comité que sólo se apoya en una única regional no puede adquirir evidentemente la autoridad necesaria para tomar abiertamente en sus manos la dirección de la huelga a escala nacional. Muchas cosas debían hacerse entre bastidores. Esto provocó la aparición de un comité nacional de huelga no oficial.

De nuevo, la iniciativa partió de Yorkshire del sur. Su primera reunión se celebró en condiciones de secreto parcial, en el transcurso de la séptima semana de huelga. Asistieron representantes de la mayor parte de regiones. A partir de entonces celebró reuniones semanales regulares. Su objetivo inmediato era el de realizar a escala de todo el país la detención de todo el transporte de acero, extender la acción a los principales usuarios de acero, y popularizar el objetivo central de la huelga: el 20 % de aumento sin condiciones.

Fue este comité nacional de huelga no oficial el que decidió el cierre de la fábrica de *Ford* en Dagenham, la fábrica más grande de Gran Bretaña.

Cuando se iniciaba la última semana de huelga, *Ford-Dagenham* estaba a punto, en efecto, de cerrar sus puertas. Fue el mismo organismo el que envió delegaciones masivas al local de la dirección nacional del sindicato, con miras a presionar en contra de una capitulación.

La formación de este comité nacional de huelga inoficial constituye un enorme paso adelante. La coordinación realizada y los contactos establecidos permitirán crear una estructura capaz de sustituir a la dirección traidora. Pero el hecho de que no haya habido en este sector de la clase obrera ni un mínimo de organización de los militantes de base antes de la huelga, unido a la falta de implantación de una organización revolucionaria a escala nacional, ha impedido que el comité nacional de huelga lanzara en el momento decisivo un auténtico desafío a la dirección nacional oficial del sindicato.

### La huelga general en el país de Gales

En otra región combativa, la del sur del país de Gales, la situación era más complicada. Las amenazas de supresión de 11.000 puestos de trabajo en las acerías de Port Talbot y Llanwern, galvanizaron toda la región. En efecto, se trataba de una amenaza de aumento del paro en muchos sectores, como el del ferrocarril, los estibadores y los mineros, arrastrando en definitiva una pérdida de por lo menos 45.000 puestos de trabajo. Esto habría tenido efectos devastadores en toda la región.

Por esta razón, en el país de Gales la huelga se extendió hasta convertirse en un enfrentamiento del conjunto de la clase obrera con el gobierno. El 28 de enero de 1980 hubo una huelga general de 24 horas, en la que participaron 200.000 trabajadores del país de Gales, de todos los sectores. Esta dinámica iba a desarrollarse hacia una huelga general de duración ilimitada, dirigida por los mineros, y que debía empezar el 10 de marzo de 1980. Pero ante las tergiversaciones del TUC del país de Gales, y el sabotaje del TUC nacional, un referéndum de los mineros rechazó la propuesta de una huelga general de duración ilimitada, pese a la opinión favorable de la dirección regional del sindicato de los mienros. Esta decisión, así como la reanudación del trabajo en las fábricas *Hadfield*, fueron el primer revés que sufrió la huelga.

La situación en el país de Gales del sur reveló muy claramente la dinámica subyacente a la huelga. Era indudablemente una dinámica que conducía a la movilización del conjunto de la clase obrera en una huelga general contra el gobierno *tory*. La única razón por lo que esto no se produjo, por la que hicieron falta tantas semanas antes de que se notaran los efectos de la huelga en la economía británica, fue el sabotaje de las direcciones burocráticas de los sindicatos.

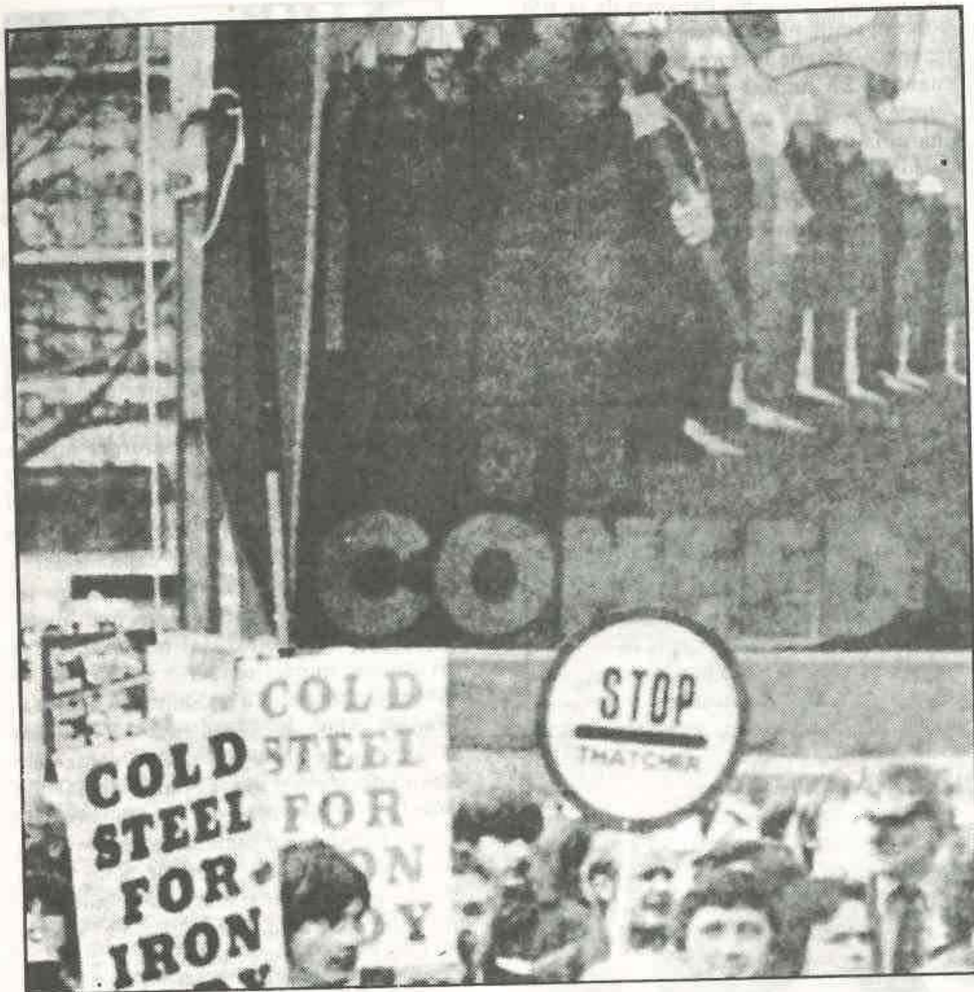
Pocas dudas puede haber en cuanto a la simpatía de que gozan los huelguistas entre la masa de trabajadores. Se daban cuenta que la huelga estaba dirigida fundamentalmente contra el gobierno *tory* como tal, pese a las declaraciones hipócritas del ministro de Industria, sir Keith Joseph, sobre la pretendida "no intervención" del gobierno.

### La clase obrera odia al gobierno conservador

La clase obrera resiente un odio profundo hacia ese gobierno. Desde el verano de 1979 se han ampliado cada vez más las acciones de masas contra las medidas antiobreras de los *tories*. A finales de noviembre de 1979, 50.000 personas salieron a la calle para manifestarse contra la reducción de los gastos sociales. La movilización por la defensa del derecho de las mujeres al aborto fue tan amplia —incluyendo una manifestación de 40.000 personas, dirigida por el TUC—, que el proyecto de ley *tory* que tendía a restringir estos derechos fue abandonado, aunque sobre el papel podría haber contado con la mayoría absoluta de los *tories* en la Cámara de los Comunes.

Mediada la huelga de los siderúrgicos, el TUC convocó una manifestación contra el proyecto de ley antisindical de los conservadores; participaron 80.000 personas. El TUC se vio forzado a convocar una jornada de acciones contra el gobierno, para el 14 de mayo, que podría adquirir la amplitud de una huelga general nacional de 24 horas.

Ha sido convocado un congreso extraordinario del partido laborista, con el fin de elaborar un plan de acción contra los ataques antiobreros de los *tories*, pese a los enérgicos esfuerzos del jefe del partido, el ex



"Acero frio para la dama de hierro", dicen las pancartas.

primer ministro James Callaghan, de oponerse. La lucha de clases evoluciona manifiestamente hacia un enfrentamiento global con el gobierno conservador. Los dirigentes sindicales hacen todo lo que pueden por desviar la voluntad de acción de los trabaja dores hacia vías inofensivas. Pero para alcanzar este objetivo se ven cada vez más obligados a ponerse ellos mismos a la cabeza del movimiento, para poder siquiera controlarlo.

Desde que se inició la huelga de los obreros de la siderurgia, los mineros, ferroviarios y estibadores más combativos manifestaron su solidaridad con los huelguistas y se ofrecieron a organizar acciones con miras a interrumpir los transportes de acero. Pero el TUC se negó a organizar la solidaridad intersectorial. La situación real se manifestó sobre todo en los puertos. En los puertos con una tradición combativa, de Liverpool y de Hull, los estibadores actuaron inmediatamente en ese sentido. Pero en los demás puertos la acción sólo fue parcial. Cuando se planteó la cuestión concretamente en el puerto de Liverpool, 6.000 estibadores pararon en solidaridad con los siderúrgicos en huelga. El mismo día en que se decidió la reanudación del trabajo en la siderurgia, iba a proclamarse una huelga general de solidaridad con los huelguistas en todos los puertos del país, huelga decidida por una conferencia nacional de delegados de todos los estibadores. Está claro que una acción semejante de solidaridad podía haber sido organizada desde el comienzo de la huelga, si no se hubiera enfrentado a la negativa de la dirección nacional del sindicato, la *Transport and General Workers Union* (TGWU), que agrupa a la mayoría de estibadores sindicados.

El sabotaje de las acciones de solidaridad por parte de la dirección nacional de la TGWU era el principal obstáculo para el inicio de la acción por parte de otro sector clave, el de los camioneros. Tan sólo en la primera semana de la huelga de los trabajadores de la siderurgia se lanzó una consigna a los camioneros, de no rebasar los piquetes de huelga de las propias acerías. Pero la dirección sindical dejó a la "conciencia" de cada camionero si quería rebasar o no los piquetes de huelga llamados "secundarios", es decir, los que se habían instalado particularmente ante las empresas usuarias de productos siderúrgicos.

Y era precisamente en ese punto donde el acero procedente del sector privado o del extranjero hacía más daño a la huelga. Esta "libertad de conciencia" fue interpretada por la mayoría de burócratas locales como luz verde para rebasar los "piquetes de huelga secundarios", saboteando así la acción de los piquetes. Sólo en el transcurso de la novena semana de huelga fueron dadas instrucciones más claras a los camioneros.

La consecuencia de todo ello es que se necesitaron largas semanas para que los efectos de la huelga se notaran realmente en la industria. La patronal, por supuesto, no dio muestras de la misma "moderación". Organizó a gran escala la distribución de los *stocks* de acero acumulados, a todas las empresas usuarias de productos siderúrgicos. Con la ayuda de la administración de la BSC, mantuvo un flujo constante de importación de acero través de los pequeños puertos, donde la mano de obra no está sindicada.

Sin embargo, en el transcurso de las dos últimas semanas de la huelga, sus efectos económicos empezaron a golpear a la industria en su conjunto. Las grandes empresas usuarias de productos siderúrgicos, como la *Ford* y la *British Leyland* (automóvil), se veían amenazadas con el estrangulamiento de la producción. Se había convocado una huelga nacional de los estibadores. Esta fue la razón de la prisa escandalosa con la que la comisión investigadora "independiente" presentó su informe. Se trataba de detener la dinámica hacia una huelga general, que habría podido derribar al gobierno.

## El fracaso de la estrategia reformista

La huelga de los trabajadores de la siderurgia pone en evidencia la estrategia global de los dirigentes reformistas de la ISTC, representativa del conjunto de los reformistas en Gran Bretaña. La estrategia de Will Sirs y de sus aliados en la dirección de la IST parte de la aceptación de la tesis burguesa de que la *British Steel Corporation* debe poder competir "en pie de igualdad" con sus principales competidores en el mercado mundial. Toda la argumentación de la ISTC consiste en acusar a los patronos de la BSC como "incompetentes", incapaces de organizar una ofensiva exportadora agresiva. Si llama al gobierno a aumentar los subsidios a la siderurgia nacionalizada, lo hace aceptando de antemano todos los proyectos de "racionalización" que impli-

can la supresión de puestos de trabajo cuya extensión está prevista por los mismos dirigentes de la BSC, así como el abandono de los derechos de los trabajadores en el seno de las empresas, derechos conquistados tras duros combates en el pasado.

Es cierto que la administración de la BSC es incompetente. La administración burocrática provoca la ineficacia tanto en el sector privado como en el sector público. Sólo el control obrero sobre la producción, realizado por una masa de trabajadores bien informada, y en el marco de un plan obrero global para toda la industria, toda la economía y toda la sociedad, puede eliminar el despilfarro y la ineficacia que reinan en las grandes empresas.

Pero el colosal derroche de recursos, que hay que achacar a los patronos de la BSC, no es el resultado únicamente de la incompetencia, sino de los proyectos erróneos en cuanto a las futuras tendencias de la producción y del mercado, debidos a la anarquía de la economía capitalista internacional. Reclamar un control restrictivo de las importaciones de productos siderúrgicos, en un intento de superar las consecuencias de dicha anarquía, es hacer un frente único con la patronal, con miras a ayudar a resolver sus problemas a expensas de los trabajadores, en este caso de los trabajadores extranjeros. Pero el interés de los obreros de la siderurgia, revelado claramente por la huelga, fue el de una solidaridad internacional de los trabajadores (1).

La nueva dirección combativa que está



emergiendo de la experiencia de esta huelga, debe centrar su estrategia en el mantenimiento de los puestos de trabajo. Los trabajadores de la siderurgia apenas tenían voz y voto cuando se tomaron decisiones anárquicas y descoordinadas en materia de inversión. Estas decisiones fueron adoptadas por los capitalistas, a escala nacional e internacional. No son los trabajadores los que tengan que pagar ahora los platos rotos. Hay que quebrantar los límites impuestos por los *tories* a los subsidios otorgados a las empresas nacionalizadas. Hay que asegurar todos los subsidios necesarios para que se mantengan los puestos de trabajo. El punto de partida debe ser la garantía de las 40 horas de salario pagadas por semana, lo que no obsta para que se reparta el número de horas efectivamente trabajadas entre toda la mano de obra actualmente inscrita, sin reducción del salario semanal.

Los comités de *shop-stewards* (delegados) creados en Yorkshire del sur, deben extenderse a todo el país. Hay que crear un comité nacional de coordinación de estos comités, que aplique una estrategia de lucha de clases. Al mismo tiempo, hay que proseguir la lucha en el seno del sindicato ISTC. El comité de enlace por la reforma de la ISTC, que ya existía antes de la huelga, puede operar ahora a un nivel más elevado, integrando una orientación sindical de lucha de clases con el combate por el control democrático del sindicato por los afiliados.

(1) A este respecto hay que denunciar la ausencia o la insuficiencia escandalosa de una campaña sistemática por que los marineros, los estibadores, los ferroviarios y los camioneros de Alemania occidental, de Holanda, de Bélgica y Francia, se nieguen a transportar a Gran Bretaña el acero fabricado en el continente o en otras partes, importaciones que ayudarán objetivamente a la burguesía británica a minar la huelga de los siderúrgicos. Pero una dirección reformista, orientada totalmente hacia la salvaguardia de la industria "nacional", no está por supuesto en buena posición para reclamar u organizar la solidaridad internacional. Son los trabajadores británicos los que han pagado los gastos de esta política llamada de "compre inglés". Esto es un aviso a los partidarios del "compre francés" en Francia y de similares políticas en otros países... ■

Portugal

# Un desafío al Gobierno Sa Carneiro

Heitor Souza



DOS meses después de su investidura, el gobierno de la "Alianza Democrática" (AD), formada por el Partido Socialdemócrata (PSD), el Centro Democrático y Social (CDS) y el Partido Popular Monárquico (PPM), que había obtenido una mayoría parlamentaria en las elecciones del 2 de diciembre, se enfrenta a la oposición de importantes sectores del movimiento de masas, que ofrece resistencia a la política del gobierno y a cada una de sus iniciativas.

Desde 1978 no se veían en Portugal movilizaciones tan generalizadas y de tanta intensidad contra el gobierno. El desafío es innegable: es la misma supervivencia del gobierno Sa Carneiro la que está en juego.

## "La tierra para quien siempre la ha poseído".

Las movilizaciones sindicales contra el gobierno alcanzaron un punto culminante en las tres jornadas de lucha convocadas en defensa de la Reforma Agraria durante los días 25, 26 y 27 de marzo. La huelga general paralizó todo el Alentejo durante dos días, el 26 y el 27.

Al mismo tiempo 300.000 metalúrgicos pararon con objeto de imponer sus reivindicaciones. El sector del transporte está en lucha desde hace varias semanas, contra la desnacionalización de varias empresas y para imponer su convenio colectivo. En total, estas movilizaciones agruparon a varios centenares de miles de trabajadores.

El tema central de todos estos conflictos es la ofensiva desarrollada por el gobierno contra las Unidades Colectivas de Producción (UCP) y las cooperativas agrarias del Alentejo y del Ribatejo. Desde hacía dos meses, el gobierno devolvió a los antiguos latifundistas cerca de 40.000 hectáreas de tierras que habían sido ocupadas o entregadas a las UCP. De este modo se desmantelaron unas cincuenta UCP, de un total de 500, en los cuatro distritos de la Reforma Agraria, y muchas otras se ven amenazadas con correr la misma suerte.

Los efectos sociales de esta política están muy claros: en pocos meses, 25.000 trabajadores agrícolas han sido despedidos. Este aumento del paro les recuerda a los trabajadores del Alentejo ese pasado no tan lejano en que el fantasma del hambre asolaba todas las aldeas de estas provincias.

La misma burguesía es conciente del terrible barril de pólvora en que está convirtiéndose el Alentejo, un barril que puede estallar con la menor chispa. El *Financial Times* del 27 de marzo de 1980 escribía a este respecto: *"La futura estabilidad del Alentejo depende de la capacidad del gobierno para presentar una política coherente de compensación para los trabajadores agrícolas amenazados de despido. Las pocas cartas que puede jugar el primer ministro, Francisco Sa Carneiro, incluyen la distribución de pequeñas parcelas de tierra a campesinos individuales, un plan ambicioso de obras públicas y el apoyo al frágil sector industrial nacional"*. El artículo concluye con cierto sentido común: *"No será una tarea fácil"*.

De hecho, la tarea es bastante difícil. La población del Alentejo está compuesta, en su gran mayoría, de trabajadores agrícolas que tienen una larga experiencia de lucha y un alto nivel de conciencia de clase. El retraso en la aplicación de la Ley Barreto, sobre la devolución de las tierras a sus antiguos propietarios, expresa bien el grado de enfrentamiento al que asistimos hoy en día: aprobada por el Partido Socialista (PS) y el PSD en 1978, aún no ha entrado en vigor.

El gobierno no va a escamotear esfuerzos para imponerla. Los 5.000 hombres de la Guardia Nacional Republicana han sido reforzados con 1.400 policías de las unidades antidisturbios, y posteriormente con otros 300 más. En dos intentos de desalojar las tierras ocupadas hubo 2 muertos y más de 1.000 heridos. Y este clima de enfrentamiento se acentuará aún más. En efecto, el gobierno ha anunciado que proyecta devolver a los antiguos propietarios todas las tierras de "reserva" antes del próximo mes de octubre, fecha probable de las elecciones legislativas.

Pero tras cada "desalojo" realizado con gran despliegue de fuerzas militares, los trabajadores agrícolas recuperan parcialmente las tierras. De hecho, la GNR no puede asegurar permanentemente la vigilancia de toda la superficie de las tierras "desalojadas". De este modo, los trabajadores han aprovechado la dispersión geográfica para recuperar muchas de ellas. Esto es lo que ha ocurrido, por ejemplo, en Mortemor O Novo: los trabajadores agrícolas han recuperado once propiedades.

En los comunicados que publicaron para explicar su acción, los trabajadores declaraban: *"Hemos vuelto a las propiedades para ocuparnos de las tierras y de las cosechas que habían sido robadas por el gobierno de Sa Carneiro y Freitas Do Amaral. Con esta acción, queremos dejar bien claro que las tierras robadas deben volver a las manos de los trabajadores y que la Reforma Agraria no será destruida"*.

La situación se hizo aún más explosiva cuando se desvelaron los escandalosos casos de corrupción en el Ministerio de Agricultura y pesca. Se descubrió, por ejemplo que más del 60 % del total de los créditos agrícolas nacionales —créditos baratos, destinados a la creación de nuevas explotaciones— se distribuyó a tres familias; una de ellas es la del presidente de la Confederación de la Agricultura Portuguesa (CAP, que agrupa a los terratenientes y forma parte de la actual coalición en el poder), y otra la del presidente del Plan de Inversiones en el Alentejo. Joao Goulao, el secretario de Estado responsable de estas operaciones, resumió toda la situación con una "metedura de pata", cuando tomó la palabra en el Parlamento: *"Queremos entregar la tierra a los que siempre la han poseído"*.

Otro efecto de estos choques es el estímulo que representa para el resto del movimiento obrero portugués. La resistencia a los desalojos, en el contexto de la crisis social que se profundiza, pone a la orden del día la huelga general contra el gobierno de Sa Carneiro. Determinadas direcciones sindicales, vinculadas a la oposición minoritaria en el seno de la Central General de Trabajadores Portugueses (CGTP), como los sindicatos del calzado de Aveiro y Coimbra, o el de guimares, donde la influencia de los socialistas revolucionarios

**Cuadro 1** EVOLUCION DE LOS SALARIOS REALES (índice 100 : 1968)

| | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lisbos (trabajadores de la industria y transportes... | 116,4 | 115,0 | 108,0 | 96,4 | 91,0 | 85,0 |
| Oporte (idem)............. | 128,0 | 136,4 | 130,0 | 114,0 | 102,0 | 100,4 |
| Trabajadores rurales (hombres).................... | 132,0 | 148,5 | 134,5 | 134,5 | 126,5 | 125,6 |
| Trabajadores rurales (mujeres).................... | 125,4 | 130,0 | 126,5 | 115,6 | 112,6 | 108,4 |

*Fuente:* Boletín CEP del Ministerio de Finanzas

es determinante, propusieron que la jornada de defensa de la Reforma Agraria, el 27 de marzo, se transformara en huelga general. Esta huelga habría sido posible.

Pese a la negativa de la dirección de la CGTP a generalizar la movilización, la presión que se ejerce en este sentido es ya el principal efecto de la resistencia al desmantelamiento de la Reforma Agraria y constituye una de las condiciones de su victoria: la reorganización de la lucha de las masas trabajadoras urbanas para hacer frente al gobierno y a su política.

## Los resultados de la política del FMI

El efecto político de la movilización permanente de los trabajadores agrícolas del Alentejo y del Ribatejo favorece las luchas en defensa del poder adquisitivo de las masas urbanas. En torno a esta combinación está reorganizándose el dispositivo de lucha del movimiento sindical.

Por su parte, el gobierno no dispone de un margen de maniobra suficiente para desarrollar una política de concesiones parciales o de integración. Hace pocos meses se ha producido un cambio considerable en la situación económica y financiera. En 1979, la balanza por cuenta corriente registró un saldo positivo, por primera vez en mucho tiempo. Las exportaciones aumentaron en un 61,6 %, mientras que las importaciones por las exportaciones alcanzó así el 54,6 %. Estos datos, que se refieren al primer semestre de 1979, revelan un relanzamiento económico real: la tasa de utilización de las capacidades productivas en la industria transformadora ha alcanzado el 74 - y la tasa de crecimiento del Producto Interior Bruto ha sido superior a la media de los países de la OCDE.

Esto es el resultado de una política agresiva de austeridad, emprendida por Soares y negociada con el FMI.

Una disminución considerable de las presiones financieras, el aumento de la liquidez, el desarrollo de la exportación, que se conjuga con una importante contracción del mercado interior, todos estos resultados no parecen poder impedir la acentuación de un nuevo desequilibrio ni la aproximación de una nueva recesión. En el segundo trimestre de 1979, la coyuntura cambió de nuevo: las inversiones en la industria transformadora disminuyeron (— 46 %), al igual que las inversiones en la industria en general (— 13%). La demanda externa es menor. La producción agraria ha descendido fuertemente (y continuará descendiendo debido a los enfrentamientos descritos, que se producen en las principales zonas cerealísticas del país).

Sin embargo, la evolución económica —incluido el pequeño balón de oxígeno con que ha podido contar la economía portuguesa— sólo ha sido posible gracias a la acentuación de la política de austeridad y al bloqueo de los salarios. La evolución de los salarios reales de los trabajadores portugueses ilustra este fenómeno (ver Cuadro n.º 1).

Al mismo tiempo, si esta evolución ha sido posible, hay que comprender que ello se debe a las enormes limitaciones que ha padecido la lucha defensiva de los trabajadores portugueses. Un informe del Banco Mundial *(Unemployment in Portugal - Prospects and Policy)* da una idea de esta situación, señalando las variaciones en el número de días perdidos a causa de las huelgas (cuadro n.º 2).

Todo indica que en 1978 y 1979 no cambió esta tendencia. Pero esto no significa que la clase obrera portuguesa haya sufrido una derrota decisiva. En 1976, e incluso hace poco, en diciembre de 1979, los partidos obreros obtuvieron la mayoría electoral (en 1979, la mayoría parlamentaria de la coalición burguesa se debió a las distorsiones que introduce en la proporcionalidad el sistema D'Hondt). Y los últimos acontecimientos han demostrado, por si falta hacía, la capacidad de combate del movimiento obrero.

**Cuadro 2**

*Jornadas perdidas a causa de las huelgas*

| | |
|---|---|
| 1975 | 2.174.067 |
| 1976 | 1.503.093 |
| 1977 | 524.654 |

Es cierto que la política de austeridad y las iniciativas del gobierno Soares lograron paralizar la respuesta obrera durante cierto espacio de tiempo. Las burocracias sindicales colaboraron directamente con esta ofensiva, tratando de negociar un pacto social con el gobierno. Pero ahora, el acceso al poder de Sa Carneiro genera una presión a favor de la unidad obrera y de un enfrentamiento político mucho más directo.

El gobierno se enfrenta ahora a un movimiento obrero más organizado, más decidido, a una enorme aspiración de las masas a la unidad y a la movilización general para recuperar el poder adquisitivo y para detener la ofensiva de la derecha. El contexto de crisis social y el impacto directamente político de los enfrentamientos que se desarrollan en el Alentejo ponen en movimiento a las masas trabajadoras.

Mientras que Sa Carneiro ya se ha visto obligado a dar marcha atrás en relación a su decisión, tomada en los primeros días de su gobierno, de congelar cuarenta convenios colectivos, la respuesta popular origina dificultades adicionales a una coalición que es frágil y que duda sobre la política a seguir. De hecho, el primer ministro pensaba que podría aplicar tranquilamente las medidas previstas y utilizar el dispositivo legal e institucional creado por Soares —fue el PS el que propuso la ley que actualmente se aplica con miras a desmantelar la Reforma Agraria en el Alentejo—, sin provocar graves desequilibrios sociales, antes de las próximas elecciones de septiembre-octubre, que darán nacimiento a un parlamento y a un gobierno que podría durar cuatro años.

Ante esta situación, el gobierno está en crisis.

## El último general portugués

A finales del mes de febrero, un semanario que apoya al gobierno y que es uno de sus principales portavoces, *Tempo*, titulaba en primera plana, sobre seis columnas: *"Portugal va hacia un período insurreccional"*. El editorial del director explicaba en detalle la situación: *"Si el gobierno no es enérgico, el país puede entrar de un momento a otro en una situación insurreccional"*.

Otra publicación de derechas evocaba, a su vez, la posibilidad de un "pronunciamiento militar", contra el gobierno. Y *Tempo* añadía, por su parte: *"Ante esta tentativa de golpe de Estado por parte de*

*fuerzas políticas cuyo objetivo primordial sería la retirada de Portugal de la OTAN y, por consiguiente, su acercamiento a las fuerzas 'antioccidentales', no cabe ninguna duda, entre los observadores políticos, que el actual jefe del ejecutivo y de las fuerzas armadas no permitiría que Portugal sea de nuevo víctima de una intervención extranjera*".

Está claro que no son los 30.000 trabajadores del transporte en huelga los que amenazan con hacer entrar al país en una "fase insurreccional".

En cambio, si la resistencia social a las medidas del gobierno se acentuara, al igual que la crisis del gabinete, Sa Carneiro podría verse tentado de escenificar una operación de este tipo para reagrupar a las fuerzas de la AD en torno a la defensa del gobierno y obligar eventualmente a los sindicatos a dar marcha atrás. Sin embargo, las crecientes dificultades del gobierno han llevado al Presidente de la República, el general Eanes —principal artífice del 25 de Noviembre y partidario de un acuerdo de gobierno PS-PSD—, a tomar aún más sus distancias con respecto al gobierno y a intensificar sus críticas al mismo. Con los poderes que detenta, que le fueron conferidos por una Constitución semipresidencialista, Eanes es un importante factor de presión sobre el gobierno y puede trabar su actividad: ya no cabe duda que el Presidente se opondrá a la promulgación de una nueva ley electoral, propuesta por el gobierno, y a la "ley del referéndum", que permitirá enmendar la Constitución por la vía del plebiscito, sin necesidad del voto de una mayoría de dos tercios en el Parlamento.

De este modo, el "*boato*", el rumor sobre el pronunciamiento militar, ponía indirectamente en entredicho al Consejo de la Revolución y al propio Eanes, acusándolos de preparar o permitir que se prepare un golpe contra el gobierno. De esta manera, Sa Carneiro pretendía retomar la iniciativa, acentuar un poco más las contradicciones entre el gobierno y el Presidente de la República y preparar ya una candidatura alternativa a la de Eanes para las elecciones presidenciales. Ni siquiera está excluido que el gobierno dimita para que la AD pueda disputar esta elección en una situación de partido de oposición...

Pero todas estas maniobras reflejan antes que nada el fracaso del gobierno. El propio Sa Carneiro se ha visto obligado a reconocer que no había ningún golpe de Estado en ciernes, aunque al menos ha obtenido un resultado: haber dado la señal de salida en la carrera a la Presidencia y en la presentación de las candidaturas.

Resultado harto exiguo, pues de hecho Eanes ha anunciado ya su propia candidatura, una candidatura que no es contestada por ningún sector de la jerarquía militar, mientras que de momento la AD no tiene ninguna alternativa que proponer. Y es más, la AD se ha dividido en torno a los candidatos potenciales. Algunos de sus dirigentes defienden la necesidad de apoyar a Eanes para llegar a un "compromiso de régimen" con el PS, con miras a poder modificar la Constitución en la próxima legislatura.

Su prudencia es muy lógica. "*Somos de los que piensan que el país sigue inclinado a la izquierda y no presta confianza a la derecha*", escribe el director de Tempo. Esto quiere decir, en otras palabras, que un candidato de la AD que perdiera las elecciones frente a un Eanes apoyado por el PS significaría una nueva oportunidad para Soares y su partido, como elemento clave en todas las negociaciones gubernamentales.

Pero otro sector de la AD, muy mayoritario, desea proponer un candidato alternativo. Si bien hasta ahora ningún militar ha aceptado hacer el papel: Lemos Ferreira, jefe del Ejército del Aire, Pedro Cardoso, jefe del Estado Mayor, y Soares Carneiro, jefe de los comandos, se han negado, arguyendo que Eanes ya cuenta con el apoyo de la jerarquía militar y que no quieren ir hacia una derrota certera. Así, es el propio Sa Carneiro en persona el que aparece como la hipótesis más viable. Sin embargo, cuando los sondeos de opinión encargados por el gobierno prevén una fácil victoria de Eanes frente a Sa Carneiro, el precio que éste tendría que pagar, caso de salir derrotado, sería muy grave.

De momento, y preparándose de cara a la hipótesis de una pugna entre Sa Carneiro y Eanes, el gobierno provoca conflictos permanentes y graves con la Presidencia de la República. Esta política favorece tanto a Sa Carneiro como a los partidos obreros reformistas: para el gobierno, se trata de justificar su candidatura altenativa; para los segundos, tanto más fácil les resultará apoyar a Eanes en la carrera a la Presidencia.

No obstante, la incertidumbre de la AD en relación al duelo presidencial impulsa a los sectores más derechistas a buscar a otros candidatos. Presentándolo como el "*último general portugués*", *Tempo* ha propuesto la candidatura de... Spinola. "*Fue el primer Presidente de la República que hizo frente al poder comunista, instalado en el país tras el 28 de setiembre, y se vio ogligado a refugiarse en España ante las amenazas de muerte. Desde el extranjero dirigió la resistencia al totalitarismo del partido de Alvaro Cunhal y fundó el MDLP*" (cuyo brazo armado era la organizafión terrorista ELP).

Esta candidatura, apoyada e impulsada por el CDS, ha tenido que crear cierto malestar entre los dirigentes del PCP y del PS: fueron ellos los que ratificaron a Spinola como Presidente de la República tras el 25 de abril de 1974. De todos modos, esta profunda división refleja las dificultades con que se encuentra la AD para encontrar los medios y los ritmos del enfrentamiento con el movimiento obrero, y expresa muy bien las contradicciones y la crisis del gobierno.

**Las próximas elecciones presidenciales y parlamentarias**

El fracaso del gobierno y la división de la AD han movido a Sa Carneiro a lanzar los rumores en torno al pronunciamiento militar, con el fin de que las elecciones tengan lugar lo antes posible. Tras haber fracasado en su intento de avanzar la fecha de las elecciones presidenciales, el gobierno trata de convocar las parlamentarias para dentro de dos meses, es decir, para junio... Es cierto que el tiempo va en contra de la AD. Las presiones aumentan, al igual que el descontento en su base, mientras que cada vez es más evidente su incapacidad actual para acabar de una vez por todas con la resistencia de los trabajadores agrícolas o para hacer frente al movimiento sindical.

Todos los sectores de la oposición se preparan febrilmente de cara a las elecciones.

El Partido Socialista, en alianza con dos partidos burgueses, el Movimiento Socialdemócrata (MSD), una escisión del PSD, y la Asociación Socialdemócrata Independiente (ASDI), otra escisión del PSD que ocurrió en 1979, que agrupa a la mayoría de su grupo parlamentario de entonces, y con la UEDS (Unión de la Izquierda Democrática y Socialista), dirigida por el ex ministro de Agricultura, Lopes Cardoso, han formado el "Frente del Progreso". De esta manera, el PS intenta reescalar la pendiente de su declive electoral y volver al gobierno. Para sus aliados electorales, particularmente la UEDS, que en diciembre de 1979 sufrió una terrible derrota al no obtener ni un escaño, el "Frente" es un pasaporte para Sao Bento (sede del Parlamento).

Este bloque electoral apoyará la candidatura de Eanes e incluye a personalidades, como la ex-primer ministro Pintazilgo, directamente vinculadas al Presidente de la República.

El PCP mantiene su coalición electoral, la Alianza del Pueblo Unido (APU), junto con el MDP (Movimiento Democrático Por-

tugués). Puede esperar alcanzar de nuevo los resultados de antaño, con el 17 % y un millón de votos. Sin embargo, es difícil que pueda superarlo, pues la aparente "unidad" materializada en el "Frente de Progreso" canalizará el "voto útil" en dirección al PS.

En lo que refiere a las presidenciales, numerosos dirigentes del PCP, como Dias Lourenco, han expresado ya su deseo de llegar a un acuerdo con Eanes. pero sobre todo a causa de las presiones que pueden ejercerse a su izquierda, el PCP podría verse obligado a presentar un candidato propio en la primera vuelta, para llamar a votar a Eanes en la segunda (las elecciones presidenciales, a diferencia de las parlamentarias, se realizan en dos vueltas, según el modelo francés).

Otelo Saraiva de Carvalho, dirige el FUP (Fuerza de Unidad Popular), que agrupa a organizaciones de extrema izquierda, incluyendo a las dos fracciones del MES, al PRP, a la UCP y a una de sus escisiones. Su proyecto consiste en presentar listas de candidatos animadas por "militares de abril", sobre la base de un programa poco definido, pero cuyo eje central será la defensa de la Constitución, considerada como una bandera indispensable, que puede ser utilizada para combatir la ofensiva de la derecha. Si Otelo es, por supuesto, el candidato presidencial designado de esta coalición, muchos de sus componentes sufren las presiones del "Frente del Progreso" a favor del desistimiento por el PS en determinadas zonas del país, y por consiguiente sufren también presiones a favor del apoyo a Eanes, el "defensor de la Constitución".

El Partido Socialista Revolucionario (PSR, sección portuguesa de la Cuarta Internacional) presentará candidatos propios en todo el país. Defenderán un programa de emergencia centrado en propuestas de unidad obrera y en la necesidad de un único candidato presidencial del movimiento obrero frente a Eanes y la AD.

Enfrentado a una respuesta popular masiva contra su gobierno, a la reorganización del dispositivo de combate del movimiento sindical, apoyándose en una coalición frágil (en 1978, Sa Carneiro había formado con Freitas do Amaral, del CDS, una "Convergencia Democrática", que se rompió al cabo de un mes, cuando el CDS formó gobierno con el PS), Sa Carneiro está muy interesado en adelantar la fecha de las elecciones.

Hay gente que califica esto de una táctica de "italianización" de Portugal: se favorece la polarización entre un bloque de derechas y un PCP fuerte, apartado del poder, mientras que el PS resulta incapaz de imponerse como intermediario. Sin embargo, de momento nada indica que este sueño pueda materializarse. El PS está lejos de verse reducido a la exiguidad del PSI, y la inestable coalición de derechas está lejos de representar algo como la Democracia Cristiana, instalada en todas las estructuras del poder en Italia.

Las luchas del mes de marzo, que han puesto objetivamente sobre el tapete la posibilidad de una huelga general nacional inmediata, han contribuido a acelerar la crisis del gobierno y han precipitado las convocatorias electorales.

Pero estas luchas están lejos de haber terminado, y no han sido derrotadas. Al contrario, día tras día imprimen un poco más la evolución política de Portugal. ■

